

JORGE INSUNZA G.

EL DIECIOCHO BRUMARIO DE GABRIEL BORIC

Las derrotas que no se comprenden
se repiten como destino



Ariadna
ediciones

El Dieciocho Brumario de Gabriel Boric
Las derrotas que no se comprenden se repiten
como destino

El Dieciocho Brumario de Gabriel Boric
Las derrotas que no se comprenden se repiten
como destino

Jorge Insunza

ISBN: 978-956-6276-89-0

Santiago de Chile

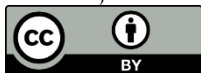
Primera edición, abril 2026

Gestión editorial: Ariadna Ediciones

<http://ariadnaediciones.cl/>

Doi: <https://doi.org/10.26448/ae.9789566276890.170>

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución



Esta editorial postula o indexa su producción en BCI-WoS, según sus normas (ver <https://n9.cl/bx7i3>), en Dialnet libros, Open Access Publishing in European Networks, OAPEN; en el Muse Project (Universidad John Hopkins); en el Directory of Open Access Books, DOAB; en la Digital Library of Commons (Universidad de Indiana, EEUU). Además, agrega sus trabajos en los repositorios ZENODO (OpenAIRE, Europa Occidental), HAL (Archives ouvertes, Francia), Google Scholar, Open Alex, SSOAR, ProQuest Central, Knowledge Commons Works, PhilPapers, WorldCat, Humanities Commons, Open Library (Internet Archive), Open Research Library, las redes sociales académicas Mendeley y academia.edu. Indexa, a la vez, toda producción en el repositorio ANID que cuente con folio Fondecyt. Todos nuestros textos disponen de los registros ISBN y DOI.

Este libro

Veíamos venir esta derrota, pero no pudimos evitarla. ¿Por qué? O, más precisamente ¿por qué nos pasó de nuevo? Hay una resistencia natural a formular estas preguntas, porque siempre cuesta procesar las derrotas, incluso cuesta verlas como tal. Tiende a prevalecer la inercia de las ideas o nociones previas, opera una suerte de refugio en la autocompasión -que prefiere la condescendencia al rigor- y siempre está a mano la alternativa de levantar la indignación moral contra el adversario.

Es la dinámica que leí profusamente en muchos documentos anteriores y posteriores al Golpe de 1973, donde aparecía la misma impotencia frente a un escenario que no se logró impedir y una similar divergencia estratégica sobre qué hacer. Es lo que me tocó vivir en los debates que rodearon el fracaso de la sublevación contra Pinochet en 1986, que considerábamos el “año decisivo” para hacer caer al régimen, que generó recriminaciones y divisiones hasta que la hegemonía de la “salida política” se impuso en torno a la campaña del No en 1988. Es lo que le costó a la Concertación procesar, incluso hasta ahora, sobre las causas más profundas de su desgaste y disolución, que comenzó a fines de los años 90, se tradujo como derrota el 2009, se creyó revertir el 2013 y se consagró como tal entre la nueva derrota el 2017 y el estallido de 2019. Es lo que se produjo después de la derrota del Apruebo en septiembre de 2022, su negación o relativización, y lo que percibo ahora, como resistencia emocional y política a calibrar la naturaleza de esta derrota y el desplazamiento de la derecha hacia la hegemonía de Kast y los Republicanos.

Esto requiere ser encarado, porque las derrotas que no se comprenden se repiten como destino.

El título de este texto evoca *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* de Carlos Marx por dos razones.

Primero, porque ahí Marx estudia por qué fracasó la revolución de 1848 en Francia y por qué en vez de escudarse en la descalificación del adversario o en lamentaciones de la desgracia, era mejor diseccionar el giro de los hechos, tratar de dilucidar la dinámica de esa derrota. Es reivindicar un talante, un espíritu crítico, que está en el acervo estoico de la izquierda. No es la búsqueda de consuelo, sino la exigencia de análisis concreto de lo que caracterizó esta etapa.

Segundo, porque por mucho tiempo se leyó *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* en una clave ideológica, esto es, como un esquema de ideas y conceptos que definían un modo de aproximarse a los acontecimientos. Posteriormente, en cambio, muchos historiadores y biógrafos de Marx lo han leído como historia, vale decir, como un texto que es parte de la crisis que trató de dilucidar y que, por lo tanto, es más vivo, complejo y penetrante que los intentos de canonización posteriores¹. Si se lo revisa así, esto es, si se observan sus distinciones como historia y no como ideología, ayuda a pensar por qué y cómo el momento revolucionario o reformista -cuya distinción para estos efectos no hará gran diferencia- de estos últimos años en Chile también terminó en un fracaso.

¹ Ver, en especial, *Karl Marx, Ilusión y Grandeza*, de Gareth Stedman Jones; *Karl Marx*, de Isaiah Berlin; *Los Grundrisse de Karl Marx*, de Marcello Musto; *Hacia la estación Finlandia*, de Edmund Wilson.

En nuestro caso, es el desafío de entender por qué la Convención Constitucional y el gobierno de Gabriel Boric llevaron a la izquierda a esta derrota y por qué debe ser tratada como estratégica.

Hay una analogía inevitable que, desprovista de su ironía, alude a un problema de fondo.

El Dieciocho Brumario comienza con una frase que se volvió famosa: "Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa". Aludía a que Napoleón Bonaparte encarnaba la tragedia y Luis Bonaparte la farsa, que bajo el mismo ropaje de autoridad en un caso se desarmaron los restos del viejo feudalismo y en otro era una restauración conservadora, un retorno pueril a la monarquía.

Aquí Boric recurrió al imaginario -y de seguro lo creyó auténticamente- de que él sería quién iba a reivindicar de verdad a Allende, que haría un "gobierno transformador" a la altura de las aspiraciones revolucionarias de él. Asimismo, redimiría a la izquierda, y en especial al PS, de la traición a Allende que fue la Concertación. Ese era uno de los fundamentos de la superioridad moral que reclamaba para sí el Frente Amplio (FA).

Uno fue la tragedia y otro terminó siendo su caricatura. Y en este caso no hubo tragedia porque el gobierno de Boric nunca llegó a ser una amenaza real a poder alguno.

A diferencia de las transformaciones que logró implementar Allende, que tocó la fibra de intereses reales, introdujo cambios de poder como la nacionalización del

cobre, el control de grandes empresas o la ampliación de la reforma agraria, Boric no llegó a ser un momento transformador: la Convención Constitucional no logró superar la Constitución de 1980, el gobierno logró menos reformas sustantivas que en los gobiernos de la Concertación y, en su cierre, le entregó una mayoría a José Antonio Kast, quien reivindica abiertamente la dictadura de Pinochet.

Esa es la médula del problema, que todavía no se quiere examinar o que es eludido con relatos minimalistas (“normalizamos el país”), listas de errores circunstanciales (la carta de Jackson al FA) o autocríticas genéricas (“hemos aprendido”) sin tensionar las causas ni la concepción general que llevó a estos resultados, sin indagar sus corrientes, sus contradicciones, sus limitaciones y vacíos.

En una apreciación histórica más larga, asimismo, todas las fuerzas de la izquierda y la centroizquierda debemos responder preguntas crudas e incisivas sobre nuestro rol en este desenlace, qué es lo que no estamos aprendiendo e incluso no estamos atreviéndonos a mirar sobre nuestras limitaciones.

Miradas en el espectro de las principales fuerzas actuales es preguntarnos:

Por qué el PC no ha podido o no ha sabido concluir en una revolución triunfante las tres situaciones revolucionarias que ha tenido delante de sí en las últimas décadas: la de 1970-1973, la de 1983-1986 y la de 2019-2022. Qué falla persistentemente en su cuerpo teórico y práctico que determina esa imposibilidad, qué mutación de las fuerzas sociales que representa lo sitúan en los márgenes y no como una fuerza articuladora, por qué no logra superar

consistentemente sus riesgos de aislamiento o por qué, si llegó a representar casi el 17%, en los últimos 30 años ronda el 5% o 6%.

El FA no puede eludir preguntarse por qué una fuerza que se propuso reemplazar a la Concertación perdió tan rápido la hegemonía que logró articular sobre la centroizquierda, que solo duró cuatro años -o menos si se considera la pérdida de poder real previa- *versus* los veinte años de la Concertación. Y, más a fondo, como mencionábamos, por qué hizo menos reformas estructurales que ella. Al final, también es la pregunta sobre qué hay en su marco teórico, en su relación orgánica con la sociedad chilena, en su estilo y su ética que los llevó a la minoría y a ser de las pocas fuerzas en la historia de Chile que, después de estar en su primer gobierno, terminan con apenas un 7,5% de respaldo popular.

Por qué el PS y el PPD, que para estos efectos y en este período somos una misma fuerza ante la ciudadanía, hemos representado lo que podríamos llamar una "lúcida impotencia", es decir, advertíamos los errores, los declaramos, estábamos convencidos de tener una mejor aproximación sobre qué se debía hacer, tratamos de intervenir con más o menos decisión desde el Gobierno y el Parlamento para mejorar la conducción del período y aun así no logramos alterar el curso de las cosas y somos parte de la derrota. Todo ello es también la pregunta sobre qué fallas y vacíos hay en el marco teórico de esa impotencia, qué fallas hay en la propia renovación socialista que expliquen la crisis de estos años y la fragmentación que hay al interior del bloque socialdemócrata. Es la pregunta, también esquivada, sobre por qué -a pesar de sus éxitos- se agotó el ciclo de la Concertación, por qué esa añoranza ya no le hace sentido

a la ciudadanía y qué tendencias no estamos viendo que nos impiden reconstruir la mayoría que en algún momento logramos forjar y sostener.

La tradición social cristiana, representada por varias décadas por la DC, también necesita dar cuenta de su dispersión y de por qué se pulverizó de esta manera, por qué su raíz cristiana es desplazada por otros partidos confesionales -católico conservadores y evangélicos- y por qué en estas décadas dejó de resolver en su seno las contradicciones que antes podía armonizar o equilibrar entre los diversos sectores de la sociedad chilena que representaba. Que parte de sus antiguos miembros se mueven hacia las corrientes neoliberales, que los acerca a la derecha, y otros al populismo, que los acerca más a la izquierda radical que a la socialdemocracia, es solo el epifenómeno. Es, más a fondo, una incapacidad doctrinaria, política y de disposición de espíritu para conciliar posiciones e intereses que alguna vez, aunque fuera con muchas dificultades y tensiones, lograba articular.

En rigor, aunque lo parezcan, estas no son preguntas del pasado con la carga de ser hechas desde una crisis del presente. El mapa de nuestra fragmentación y la minoría a la que nos relegó la ciudadanía es expresión de una desorientación estratégica, de una incapacidad de atrapar el futuro y, por lo tanto, de representar una alternativa consistente.

Por eso perdimos, eso es lo que debemos tratar de dilucidar.

El Estallido Social como “Crisis Orgánica”

A más de seis años del estallido de octubre de 2019 todavía no hay un juicio asentado sobre su naturaleza y contenido. Eso no ocurre solo en el terreno de la disputa política respecto de cómo calificarlo para fines simbólicos, si como un “estallido social” por la izquierda o como un “estallido delictual” por la derecha, sino también entre aquellos que quieren desentrañar el fenómeno, su origen y características. Incluso, no hay una apreciación compartida al interior de la izquierda ni al interior de la derecha sobre sus rasgos y las tendencias que encerró.

Esas divergencias, y su multiplicidad, no son solo reflejo de cómo cada cual se aproxima a los hechos ni qué visión o intereses hay detrás de ellas, sino que también están ancladas en las propias contradicciones y ambivalencias que el estallido contenía.

Un fenómeno de esta envergadura e intensidad nunca es unívoco, nunca contiene una sola lectura. Dejar de atender esa diversidad y, dicho con mayor precisión aún, no considerar esas contradicciones, es la primera fuente de errores estratégicos.

El estallido fue la expresión de malestar acumulado, de indignación frente a persistentes desigualdades, de agotamiento ante sucesivos casos de abuso y corrupción y, como telón de fondo, de la pérdida de esperanza en el progreso -del país, pero también a nivel familiar y personal- que se arrastraba más nítidamente desde la crisis global de 2008... y que todavía subsiste. La magnitud de las movilizaciones de las primeras semanas, la energía con la que se contagiaban demandas y consignas, la fuerza con la que se instalaban juicios y sentidos comunes, la propia

necesidad de expresar en nuevas palabras o consignas el estado de ánimo predominante, la alegría en medio del nervio que existía respecto a que algo podía y debía cambiar y el hecho, más o menos inédito en Chile, de que la violencia aguda de esas primeras semanas no produjo esta vez miedo en la clase media, tenían una fuerza y significado político que nadie podía negar.

Era un momento histórico y precisamente por eso no había que idealizarlo.

La falla de la idealización radica en creer que se está frente a una versión del “fin de la historia”, que lo que rodea los acontecimientos es su inevitabilidad, que hay una suerte de destino más o menos prefigurado, que para algunos es una oportunidad y para otros una fatalidad. De hecho, ahí es donde convergen el entusiasmo y el miedo, porque ambas emociones -muy predominantes en las crisis- creen que hay un punto de no retorno, que en un caso debe ser consagrado y en otro resistido. Ambas, sin embargo, dejan de ver las contradicciones, las ambivalencias, los matices, las tendencias en disputa, la dinámica de las fuerzas, la fragilidad subyacente en cada maniobra, los marcos de sentido común que se mueven, que están en disputa, que giran.

Dicho de otro modo, deja de mirar la naturaleza trágica de las crisis.

Una parte importante de la izquierda, sobre todo del PC y sectores del FA, interpretó que el estallido social constituía el nacimiento de una nueva hegemonía, nítida y robusta; un mandato popular inequívoco que debía ser reconocido institucionalmente, a través de la caída del gobierno de Piñera o de una Asamblea Constituyente. La resistencia o

relativización de ese mandato carecía en sí mismo de legitimidad, era el desconocimiento a una voluntad popular ya claramente expresada. Cualquier advertencia sobre las incertidumbres que existían o sobre los riesgos que podían sobrevenir, o cualquier expresión de prudencia y cautela, era considerada como pesimismo o cobardía, como una vacilación o falta de decisión, como una rémora de los miedos de la transición u otra expresión de ese reformismo sempiterno que no entendía la naturaleza profunda del cambio producido el 18 de octubre. Se hizo famosa la expresión “no entienden nada” o “no tienen calle”, siempre como antesala de la descalificación de cualquier punto de vista distinto, por muy tenue que fuera.

Ya había una realidad constituida, que precisamente daba fundamento a un poder constituyente originario, esto es, que el poder legítimo de la soberanía popular había vuelto a la ciudadanía y no debía ni tampoco ya podía ser mediado por el Gobierno o el Congreso. La impugnación del PC y otros grupos radicalizados al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 nacía de esa convicción: las fuerzas políticas que lo suscribieron carecían, a su juicio, de legitimidad para definir el proceso constituyente, el cual debía recaer -sin intermediación alguna- en una Asamblea Constituyente que pasara a detentar el nuevo poder soberano.

Esa aproximación, que contagiaba y se extendía a sectores de la centroizquierda, estaba llena de emociones contenidas entre aquellas generaciones que habían sufrido derrotas anteriores y también llena de ilusiones por la singularidad del momento, sobre todo en las nuevas generaciones, que nunca habían vivido una crisis política, social e institucional de esta envergadura. Eso creó un clima que desconocía o le restaba valor a toda una escuela

de izquierda sobre las crisis revolucionarias, que en gran medida se remonta a *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*.

Marx trata con mucho detalle las etapas de la revolución de 1848 en Francia, desmonta la idea de que las clases actúan coherentemente, describe cómo la crisis evoluciona a partir de fuerzas fragmentadas. Trata las ilusiones, los autoengaños y su noción de la “falsa conciencia” no como mera ideología, en sentido peyorativo, sino como fuerzas reales que determinan las conductas de los actores². Trata explícitamente el miedo como una fuerza política autónoma, irreductible a cálculos racionales de interés y, en una distinción clave en todo el texto, advierte sobre el riesgo de no leer adecuadamente las características y el contenido concreto y real de la crisis que enfrentan: “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”³. A partir de todo eso, y más, comparándolo con otros procesos similares, sostiene que hay momentos en que “la revolución se mueve de este modo en un sentido ascensional” y que en otros un conjunto de factores determina que “la revolución se mueve en sentido descendente”⁴.

Para Lenin, clave en la vieja escuela comunista, la formulación del problema era esencialmente la misma. En su texto previo a la revolución rusa, *La Bancarrota de la II Internacional*, afirmaba claramente que “no toda situación revolucionaria desemboca en revolución”. Para él, una

² "Así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo y sus intereses efectivos, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son" (*El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* en *Karl Marx, Antología, Selección e introducción de Horacio Taurus*, pág. 178).

³ *Ibidem*, pág. 151.

⁴ *Ibidem*, pág. 174.

situación revolucionaria no era el resultado de la voluntad ni del descontento aislado, sino que consistía en una configuración objetiva de poder en la que el orden existente pierde su capacidad de gobernar, que las masas dejan de aceptar pasivamente su condición y que eso genera una activación política de amplios sectores que antes no se involucraban en las luchas. Son los momentos en que se produce una grieta estructural y objetiva en la sociedad, muy marcada por el hecho de que las relaciones de producción dejan de ser funcionales al desarrollo de las fuerzas productivas, vale decir, cuando deja de haber progreso y la vida cotidiana se afecta de una u otra manera. Sin embargo, para Lenin esa crisis de poder solo se convertía en revolución si existía una fuerza organizada y con capacidad estratégica para disputar la conducción del Estado, resolviendo a su favor la contradicción que el sistema vigente ya no puede contener. Nunca bastaba la crisis para tener éxito⁵.

A su vez, para los efectos de ponderar con más distinciones y matices esa dinámica, es muy importante detenerse en la noción de “crisis orgánica” que Gramsci desarrolló leyendo críticamente a Marx y a Lenin. Él también sostiene que se trata de una fractura histórica profunda, que se produce cuando las relaciones económicas y sociales entran en crisis. En eso no se separa de ellos, parte desde ahí. Su singularidad, sin embargo, es que para Gramsci no hay condiciones “puramente objetivas”, sino que ellas están intermediadas por la hegemonía, por una crisis de legitimidad más extendida. Las clases dominantes pierden su capacidad de generar un consenso básico en la sociedad y, por eso, dejan de ser dirigentes y pasan a ser solo dominantes. Se produce una separación entre los

⁵ Ver “La crisis política general y la creación de una situación revolucionaria” en *Jorge Insunza Becker, Escritos Políticos e Ideológicos*, Tomo III, Editorial Ariadna.

gobernantes y los gobernados, que afecta a todos los partidos tradicionales, y el propio orden vigente pierde su capacidad y sostén, porque se trata de una crisis que cala en el sentido común, en lo que se estima razonable y posible. Pero, al mismo tiempo, en una “crisis orgánica” las clases y fracciones subalternas tampoco han logrado construir una alternativa hegemónica propia, capaz de ser el reemplazo. No basta la voluntad o la audacia si no hay lo que él llamó un “bloque histórico” que sostenga el cambio. En ese sentido, la crisis no es solo un momento (una “situación revolucionaria”), sino que puede ser una fase de inestabilidad prolongada, un *interregno*, que puede evolucionar como revolución o como regresión o también puede estancarse, como una crisis que no se resuelve. Su reflexión apuntaba a que el desenlace depende de la capacidad de una nueva fuerza histórica para constituirse en dirección política, intelectual y moral de la sociedad.

El estallido es, en ese marco, una crisis orgánica clásica: una profunda crisis de legitimidad, que en nuestro caso era una crisis de la hegemonía neoliberal, una crisis del reformismo del modelo de la Concertación, una crisis de gestión eficiente del modelo intentado por Piñera y, a su vez, la ausencia de una alternativa hegemónica, por la fragmentación de las fuerzas, las demandas dispersas y la incapacidad de articular un proyecto coherente y consistente.

El estallido expresó con enorme fuerza lo que ya no era posible, pero no forjó la organización ni constituía un proyecto ideológico y político con capacidad de delinear lo que vendría después.

Es decir, el estallido fue una crisis de legitimidad, pero no dio lugar a una nueva hegemonía.

¿Cómo se expresaron y evolucionaron estos rasgos?

La pregunta importa, porque había un acervo teórico y práctico en torno a estos períodos de crisis que fue desestimado, en parte por el desuso de las conversaciones ideológicas en la izquierda, otro tanto por desprecio más o menos consciente a algunas de las tradiciones que la nutrió y, sobre todo, porque el clima emocional de esos meses ahuyentó la reflexión crítica y tendió a despreciar la necesaria ponderación de la correlación de fuerzas.

Piñera y Boric como gobiernos breves

Hay un hecho singular, asumido como tal transversalmente, pero no calibrado en los términos del *interregno* de Gramsci: los gobiernos de Piñera y Boric fueron gobiernos breves, perdieron tempranamente sus bases de sustento: Piñera el 18 de octubre de 2019 y Boric el 4 de septiembre de 2022. Son expresiones paradigmáticas de poderes que dejan de ser gobernantes y pasan a ser solo dominantes.

En los primeros días del estallido Piñera estaba en un estado catatónico, no tenía política ni un equipo funcional a la crisis. A través del Estado de Emergencia delegó *de facto* el poder a las Fuerzas Armadas, pero incluso ellas no eran capaces de hacer cumplir el toque de queda dictado. Como se ha registrado por varios de sus colaboradores, la noche del 12 de noviembre de 2019, el día de un paro nacional convocado por un arco amplio de organizaciones sociales, Piñera quiso desplegar a las Fuerzas Armadas, pero ellas mismas lo desestimaron por lo cruento que podía ser y el riesgo que significaba para ellas verse envueltas en otra sangrienta represión, que a su vez repitiera el ciclo de condenas por violaciones a los derechos humanos. En

rigor, solo sobre la base de ese vacío de poder real fue posible el acuerdo constitucional del 15 de noviembre posterior. Piñera nunca se recuperó de esa debilidad estructural: a pesar del acuerdo constitucional, sus opositores lo siguieron impugnando y denigrando, presentando acusaciones constitucionales contra él y sus ministros, incluyendo a Andrés Chadwick, a pesar de que ya había renunciado al Ministerio del Interior. A su vez, la base sociológica de la derecha lo abandonó, llegando apenas a un 6% en la encuesta del Centro de Estudios Públicos de enero de 2020, como consecuencia del estallido social, la crisis de seguridad, la pérdida de rumbo y la desarticulación de sus bases de sustentación.

La pandemia inmediatamente posterior reconfiguró el escenario, pero no en un sentido distinto. Al contrario, fue complementario, por la ruptura del orden social que una crisis de esa naturaleza provoca. Muchos momentos históricos similares marcan ese rasgo. En su *Historia de la Guerra del Peloponeso*, Tucídides trata la peste que asoló a Atenas desde los patrones que en nuestro caso agudizaron la crisis orgánica. Mirado en perspectiva, ninguno de nosotros lo enfocó de ese modo: Piñera creyó que la pandemia podía ahogar las energías del estallido; desde la centroizquierda insistíamos en soluciones sanitarias, sociales y económicas tecnocráticas, como colchón racional y moderador de la crisis; y, en cambio, el contagio de la reacción populista fue arrastrando poco a poco a todos los sectores, al punto que en varios momentos los parlamentarios de la derecha abandonaron abiertamente a Piñera. Esos patrones de Tucídides se traducen, en síntesis, en que aquello que supera a las fuerzas humanas no es contemplado desde la serenidad sino desde la angustia vital, que el orden social pierde su eficacia real, que el sentido de autoridad se afecta -decía- desde la pérdida de

temor a los dioses y a la ley, porque la sobrevivencia ordena las intuiciones y emociones, hay una natural desconfianza hacia el conocimiento establecido, la ira necesita culpables y prevalece el desorden e interés de corto plazo. Vale decir, la angustia que rodeó la pandemia se movió entre los imperativos de la sobrevivencia, el refugio en la familia o en los círculos más próximos; mientras tanto, la pérdida de autoridad, ya seriamente deslegitimada, avivó la dispersión política y las reacciones populistas.

El ciclo de Boric empalma con el estallido desde su calidad de “tribuno radical”, del líder estudiantil que se había transformado en un diputado antisistema, pero que al mismo tiempo había buscado una salida institucional a la crisis: en contra de su partido, había suscrito el acuerdo del 15 de noviembre. Esa dualidad le permitió derrotar a Jadue en las elecciones primarias de julio de 2021 y formar una mayoría para derrotar a Kast en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021. Sin embargo, no construye ni logra lo que Gramsci llamaba el “equilibrio de compromiso”, que a su juicio requería la conformación de un “bloque histórico”, de una mayoría que se transforma en hegemonía. No lo hace en la formación de su gobierno (prevalece la tesis de los círculos concéntricos del ministro Jackson, con partidos de primera, segunda y tercera categoría en el gabinete), no lo busca como articulación de un acuerdo constitucional viable para la Convención y tampoco lo despliega como agenda de gobierno que permitiera el éxito del Apruebo en el plebiscito de salida. Boric baja al 35% de apoyo en la encuesta Cadem del 29 de abril de 2022 y nunca sale estructuralmente de ahí. En ocasiones llegó al 25% y 24% de aprobación por las crisis de seguridad y, en general, mantuvo una desaprobación cercana al 60%, que no se redujo -como en otros períodos presidenciales- al término de su mandato. Los sectores

radicalizados de distinto tipo se sintieron traicionados (por el fracaso del nuevo retiro de fondos de las AFP en abril de 2022, la división en torno a normas maximalistas de la Convención, la contención del gasto aplicada por el ministro Mario Marcel para aplacar una inflación mucho más difícil de manejar por la inercia de los retiros y la guerra en Ucrania, los estados de excepción en la Araucanía) y los sectores moderados no creían su moderación o que eso fuera una convicción real (la plurinacionalidad simbolizada en el fracaso de Izkia Siches en Temuicui, la crisis de seguridad agudizada por los asesinatos de Carabineros, las puestas en escena simbólicas para sus adeptos, la ambivalencia en las negociaciones). La derrota del plebiscito de salida cristalizó su parálisis estratégica y a partir de ahí pasó a administrar, pero no transformar.

Este es el cuadro que Gramsci llamaba un "empate catastrófico", una situación en que ninguna fuerza puede imponer su proyecto, pero todas tienen poder suficiente para bloquear al adversario.

La crisis de legitimidad en la ciudadanía

La separación entre los gobernantes y los gobernados no es solo entre la ciudadanía activa y las elites, sino también con la ciudadanía pasiva; que es pasiva por serenidad, indiferencia, desesperanza o desilusión. Esos no son sinónimos ni expresiones del mismo fenómeno, sino emociones fundadas en experiencias que derivan en esa relación de distancia o crítica respecto de los asuntos públicos; que en la vida cotidiana se expresan como quiénes cambian de señal cuando dan noticias políticas, que se aburren o se irritan con las discusiones, que miran o escuchan con una mezcla de tedio, escepticismo y desconfianza a figuras de cualquier partido y que en las

elecciones son aquellos que se abstienen o votan nulo o blanco.

La ciudadanía activa que salió a las calles fue real y masiva; transmitía entusiasmo y esperanza o severidad e indignación. La pregunta natural era y es ¿qué hace que gente normal, relativamente tranquila, salga a la calle a expresar su indignación? o también ¿por qué gente que mantenía un sordo malestar de un momento a otro desató su ira? Eso no tiene respuesta en las teorías conspirativas ni en la manipulación de fuerzas oscuras, como todavía cree parte importante de la derecha, sino en el suelo fáctico que anida o deriva en estos fenómenos de masas.

Al mismo tiempo, otros sectores querían un cambio, pero no lo expresaban con la vitalidad o la agitación de los manifestantes de esos días. Compartían el deseo de transformaciones, se sentían identificados con las demandas que surgían o incluso se entusiasmaban con algunas de las movilizaciones o al menos las entendían, pero su estado de ánimo era más calmo o prudente.

Hubo muchos signos de esa ambivalencia.

En la primera semana del estallido, a las seis y media o siete de la mañana, en un despacho en directo de los noticieros, un obrero de la construcción esperaba un bus para ir a su trabajo. Apoyaba las movilizaciones, pero estaba preocupado porque no había buses para llegar a tiempo a la obra. Quería cambios, pero su vida cotidiana requería un mínimo de normalidad. En enero de 2020, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) convocó a un boicot de la PSU y logró suspender la rendición de la prueba en varios recintos. El reclamo de los jóvenes afectados, todos de sectores medios o populares,

era que ellos querían ir a la universidad, que rendir la prueba no era una contradicción con las demandas sociales que ellos también apoyaban. En las zonas más populares hubo movilizaciones masivas, pero en los días siguientes también lamentaban -sin retirar su respaldo al estallido- que se hubieran quemado los supermercados o las sucursales de los bancos. En otros lados, también de sectores medios y populares, no solo en las comunas ricas, las comunidades se organizaron para defender sus barrios de posibles saqueos.

El contenido de la “revuelta” de esas primeras semanas era disperso, pero giró hacia una mayor convergencia. De hecho, a causa de la propia pérdida de iniciativa del gobierno de Piñera, la agenda fue evolucionando rápidamente desde el listado de demandas y reformas inmediatas que debían implementarse a su traducción en un contenido político, que fue la nueva Constitución. A pesar de la narrativa posterior al triunfo del Rechazo, la idea de una nueva Constitución no fue un invento elitista, sino que condensó el imaginario de cambio en un cambio político. El drama de que ese juicio ciudadano se haya diluido por la farra de la Convención Constitucional no significa que esa síntesis no haya existido y se legitimara en la sociedad. Todas las encuestas de la época coinciden en el amplio respaldo que concitaba la idea de una nueva Constitución.

Paralelamente, sin embargo, se desatendió casi por completo el factor de la ciudadanía pasiva, de esa ambivalencia de la crisis. Muchas de las conversaciones de entonces tenían una lectura lineal, absolutamente mecánica de cómo podía comportarse, pensando básicamente que iba a seguir -más o menos- la misma tendencia de las elecciones con voto voluntario. Eso ocurría tanto en la

izquierda como en la derecha. En las negociaciones del acuerdo del 15 de noviembre la derecha se opuso a que el plebiscito de entrada fuera con voto obligatorio, porque tenía aprensiones de cómo votarían esos nuevos electores, lo que elevaba la incertidumbre que ya existía con el plebiscito. La izquierda y la centroizquierda tenían confianza en que el clima a favor de la nueva Constitución también alcanzaba a esos sectores, y querían que esa parte de la ciudadanía se sumara al proceso.

Posteriormente, la interrogante por ese fenómeno de pasividad ciudadana tampoco se lo trató con seriedad tras los resultados del plebiscito de entrada de octubre de 2020. Ahí, a pesar del clima de opinión positivo que rodeó ese proceso, de la clara tendencia en favor del Apruebo y de la Convención Constitucional *versus* una fórmula mixta en la que podía participar el Congreso y, asimismo, de que se trataba de una elección sencilla y rápida, la participación fue igual de baja que en las elecciones de los años anteriores. Medida en votos válidos llegó apenas a un 51% del electorado. El contraste con el plebiscito de 1988, entre el Sí y el No a Pinochet, que era una elección similar y que podía considerarse al mismo nivel de relevancia histórica, era enorme. En esa ocasión los votos válidos representaron al 89% del electorado.

Era un dato esencial, que se relativizó por completo.

El estallido había movilizó a una parte importante del país, era un fenómeno en sí mismo, pero también había dejado intacta la distancia política de otra mayoría significativa. La indignación activa era relativamente equivalente a esa mezcla de desesperanza e indiferencia.

El entusiasmo del momento generó aquí su propia ceguera.

Una crisis del sentido común dominante

La crisis expresa el agotamiento del sentido común neoliberal, de sus promesas; lo que no significa mecánicamente que sea una crisis terminal o que su ethos haya sucumbido o haya sido reemplazado por otro. Como señaló Pablo Torche en los días del estallido, éste tenía algo de “un estallido neoliberal contra el modelo neoliberal”.

Este es probablemente, ahora, uno de los mayores riesgos del gobierno de Kast, porque su relato niega esa crisis. Una parte importante de la derecha cree, efectivamente, que el estallido fue un alzamiento delictual, un ejercicio antidemocrático para derrocar a Piñera o que, en el mejor de los casos, fue una falla de gestión política de Piñera, que era evitable o posteriormente manejable. Se resiste a pensarla en términos de que se trató de una crisis estructural o, en el lenguaje de la derecha, una crisis político-institucional propiamente tal.

Importa volver a un punto ya descrito: Gramsci entendía la hegemonía como la capacidad de una clase o una fuerza dominante de hacer que su visión del mundo parezca natural, universal y de sentido común para el conjunto de la sociedad.

En ese sentido, esta es la crisis de la ética del esfuerzo individual, porque resulta insuficiente o es burlado por el abuso o la corrupción; del mercado como regulador justo, porque recrudecen las disputas geopolíticas de los mercados, la fragilidad de las pymes y la inestabilidad del empleo, o porque se vuelven evidentes las capturas del Estado; de la privatización de los servicios públicos, porque las AFP entregan bajas pensiones, las Isapres no contienen los costos de la salud ni otorgan suficientes

garantías, la educación privada no está resolviendo los problemas de calidad y empleabilidad; del crecimiento como sinónimo de progreso, porque se estancó, los salarios no suben como antes o bajan por la inflación o porque hay perdedores o zonas de sacrificio. Es un relato del país y de la vida de las personas que deja de ser convincentes.

La ruptura de ese imaginario también alcanzó medularmente a la Concertación, porque sus reformas al modelo neoliberal ya estaban agotadas, no lograban superarlo. El pacto de la transición, de alto crecimiento y equidad social, se había resquebrajado. Las políticas sociales no resolvían la vulnerabilidad de los nuevos sectores medios, lo que se profundizó por el bajo crecimiento después de la crisis de 2008. Los hogares estaban endeudados, en muchos sectores de la economía el trabajo era precario, había aumentado la tercerización, el sector servicios no tenía la misma pujanza de antes, la crisis de la educación era una crisis de la promesa de movilidad social, los profesionales bajaban sus expectativas de ingresos, los pequeños emprendedores también dependían del crédito o sufrían por el menor crecimiento. Los mecanismos de integración estaban dejando de funcionar como antes. Ya sin las tasas de crecimiento de Aylwin y Frei, Lagos y Bachelet lograron estructurar un sistema de protección social; no obstante, la fragilidad del modelo subsistía.

En sus dos gobiernos, Piñera representó la aspiración de que podía recuperar el crecimiento y por esa vía ser factor de estabilidad y seguridad. Era la añoranza de los años de alto crecimiento o la idea de que aquellos sectores que habían progresado, que estaban en los sectores más dinámicos, que habían pasado del empleo al

emprendimiento o que sus profesiones requerían reformas liberales para desplegarse, podían resurgir. Eso se desvaneció porque no lograba resultados equivalentes a las expectativas, porque significaba sacrificios que no tenían retribución proporcional a los méritos hechos o seguía excluyendo a amplios sectores. La crítica de que el estallido ocurrió en el período de Piñera por su falta de previsión o de manejo político, tan extendida entre los que estábamos en la oposición, eludía el carácter más hondo y prolongado de la crisis que enfrentaba.

El estallido fue la certificación pública de ese agotamiento, pero -de nuevo- sin formar un nuevo proyecto que dibujara un sentido común dominante.

Ausencia de dirección capaz

Si se observa con detenimiento todo el proceso de estos años, ni en el estallido, tampoco en las movilizaciones posteriores, en los momentos claves de la Convención Constitucional ni en el gobierno de Boric, hubo una dirección hegemónica estable.

El estallido contenía, aún en su dispersión, un anhelo de reformas profundas -en educación, salud, pensiones, vivienda, medioambiente- que tenía coherencia como masa crítica, pero no como proyecto articulado. Lo que en las calles parecía una virtud, por su pluralidad de expresiones, la horizontalidad de los distintos movimientos, la ausencia de una conducción orgánica, que de hecho resistía la presencia de los partidos políticos, se convirtió después en un problema político cuando esas energías debían traducirse en instituciones y políticas.

Un fenómeno muy repetido en la Convención Constitucional es que cada movimiento identitario, o los grupos que se formaron para defender una agenda específica, tendía a tratar sus propuestas de norma como un elemento esencial para la sociedad, que debía ser garantizado de manera integral en la Constitución. No bastaba el enunciado de un principio o un derecho, sino que -por el contrario- consideraban que su garantía real solo iba a ser posible si se lo definía con las características de una ley. Esa lógica es la que marcó la tendencia a constitucionalizar no solo derechos fundamentales, sino programas completos para su cumplimiento. En el dominio político, ese esencialismo restaba espacio para compromisos, acuerdos o concesiones, porque ello significaba una renuncia muy cara.

Paulatinamente, eso elevó la fragmentación, restó alianzas, elevó los temores de diversos sectores y marcó la imposibilidad de transformar ese arco en un “bloque histórico”. La energía del momento era real; su traducción institucional, en cambio, resultó autodestructiva.

Lo que estos tres planos remarcan, tomados en conjunto, es que el estallido fue la expresión de una crisis histórica profunda, pero no su solución.

Expresó con fuerza la demanda de un cambio, abrió una ventana de oportunidad política que no se veía hace décadas y exigió a la izquierda una responsabilidad que de nuevo no supo asumir. En gran medida, ello ocurrió así porque no comprendió -y a ratos no quiso ver- que el proceso cargaba en su interior las contradicciones que lo limitaban. Reconocer esas contradicciones no es una concesión al pesimismo ni a la derecha. Es simplemente la condición para entender con realismo el terreno en que la

Convención Constitucional y el gobierno de Boric debían ejercer el poder.

El estallido abrió un *interregno* sin cerrarlo... y aparecieron sus propios monstruos: el esencialismo identitario que fragmenta en lugar de articular, el populismo de izquierda y de derecha que explota el miedo y el resentimiento y, finalmente, la reacción conservadora, que todavía no sabemos si solo tratará de restaurar el viejo orden o si se va a reinventar para ocupar el vacío.

El arco dramático de la crisis, sintéticamente, es el siguiente: el estallido, el colapso del gobierno de Piñera, la entrega de la Constitución para salvar su estabilidad, el amplio respaldo al Apruebo en el plebiscito de entrada, la derrota de todos los partidos tradicionales y la multiplicidad de nuevas fuerzas en las elecciones de la Convención Constitucional, la euforia del maximalismo, la recuperación electoral de la derecha y el reemplazo en ella que representó la primera mayoría de Kast en la primera vuelta de 2021, la pretensión del FA de transformar a Boric en la figura que encabezaría las grandes transformaciones, la ausencia de un bloque histórico para conducir la Convención, sostener el gobierno y enfrentar la campaña del plebiscito de 2022, la derrota con el 62% para el Rechazo y apenas un 38% para el Apruebo, el estancamiento de las reformas estructurales, la parálisis política transformada en sucesivas concesiones y el desplazamiento de la hegemonía en la derecha hacia la ultraderecha. Boric llegó al poder como la promesa de cerrar el *interregno*, de convertir la crisis orgánica en una transformación, pero gobernó con un enfoque y en condiciones que hacían esa promesa casi irrealizable. No se trata de un problema personal, sino histórico concreto.

La Revolución Descendente o Una Hegemonía Invertida

La pregunta más candente que la izquierda debe responderse a sí misma es cómo el Apruebo pasó de un 78,27% en el plebiscito del 25 octubre de 2020 al 38,14% en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. Es una pérdida de 40 puntos porcentuales en menos de dos años.

La explicación de que ello se debe al cambio del voto voluntario por el voto obligatorio no es suficiente ni consistente. Es reduccionista o una forma de evasión de responsabilidad por los errores políticos y de conducción. Hay una incidencia, desde luego, pero no se explica por sí misma. Las encuestas captaban tendencias de toda la población, no solo de los que votaban, y en ellas el apoyo a la nueva Constitución rondaba en los mismos porcentajes del plebiscito. Las encuestas posteriores recogen una pérdida de apoyo real al Apruebo entre los votantes habituales y los que antes se abstenían.

Esa pérdida de respaldo recae en la dinámica de los hechos que marcaron la Convención Constitucional y los primeros meses del gobierno de Boric.

A su vez, que después del plebiscito de salida, después del abrumador resultado del Rechazo y a pesar de la creciente incorporación al gobierno del Socialismo Democrático, no se haya logrado revertir ese resultado en las elecciones del Consejo Constitucional de mayo de 2023, ni en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 y tampoco en las presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025, muestra el carácter estructural de la derrota y, como suele ocurrir en ellas, la resistencia al

examen autocrítico, la persistencia de puntos ciegos y la tendencia de que el apego al poder del momento condiciona y limita el giro necesario para enfrentarlas.

Todo eso es lo que requiere -del modo más sucinto posible- una evaluación crítica de este período y sus etapas y cómo, en cada una de ellas, la Convención Constitucional y el gobierno de Boric fueron ahuyentando del progresismo y de la izquierda a amplios sectores de la sociedad.

En ese sentido, este período es un caso arquetípico de lo que Marx llama una “revolución descendente” en *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* o de lo que en sus *Cuadernos de la Cárcel* Gramsci define como una “hegemonía invertida”. Es decir, cómo un momento revolucionario o reformista pierde poder y cómo esa pérdida de poder determina su derrota.

Toda periodización es relativamente arbitraria y tiene muchos vasos comunicantes con las otras, pero para efectos analíticos podemos explorar cinco fases más identificables:

1. Entre julio y diciembre de 2021, esto es, entre la exaltación maximalista tras la instalación de la Convención Constitucional y el equilibrio que se reestablece en las elecciones parlamentarias y presidenciales, que derivan en un equilibrio de poder que es a la vez un equilibrio de legitimidades;
2. Entre enero y abril de 2022, cuando se expresa más nítidamente el momento jacobino de la Convención Constitucional, su radicalización, y la lógica de fuerza que imponen sus sectores maximalistas;

3. Entre mayo y el triunfo del Rechazo de septiembre de 2022, la fase que se caracteriza por la impotencia de revertir una derrota inminente y la negación de la crisis estratégica que generaba;
4. Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, la fase en que el gobierno de Boric cree que se trató de una derrota táctica y no estratégica, en que todas las fuerzas políticas tradicionales viven la inercia de un proceso constituyente que ya se había diluido y en el que emergen lo que Gramsci llamaba “los monstruos”, esto es, los signos de descomposición de las fases en las que “el viejo orden muere y el nuevo no acaba de nacer”;
5. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, como la larga agonía de una pérdida de poder ya consumada y la confusión estratégica que genera.

Fase julio-diciembre de 2021

La Convención Constitucional reveló desde el inicio las dificultades estructurales para conformar un bloque hegemónico con capacidad de construir una mayoría social y política y concebir su rol como articulador de un nuevo orden institucional. El punto no se remite a la puesta en escena de los grupos radicales ni a la gradual pérdida de legitimidad que eso fue acumulando, que sin duda fue un factor determinante, sino que alude a cómo las fuerzas de la Convención incubaron lo que Gramsci llama el “equilibrio catastrófico”.

Si se revisa con detalle la primera votación de la Convención, para la elección de su Presidencia y Vicepresidencia, se aprecia que hubo cinco grupos que actuaron de manera más o menos compacta: Chile Vamos, con 37 votos; los Independientes No Neutrales, con un voto duro de 11 votos, pero que en algunos momentos

logró sumar 20; el bloque FA-PS, que habían aislado al PPD y a la DC, en una primera señal de alineamiento hacia el futuro gobierno, con 39 miembros que votaron completamente alineados en las cinco votaciones (las dos por la presidencia y las tres por la vicepresidencia); el PC, que a sus 7 miembros sumó a 6 de los 10 convencionales indígenas del norte, que se separaron explícitamente de los 7 convencionales mapuches; y la Lista del Pueblo, que al principio alineó 20 convencionales que votaron igual en cada ocasión, pero que llegó a sumar 26 para la vicepresidencia de Rodrigo Rojas Vade. Entre los demás, incluyendo en eso a los representantes de partidos tradicionales (1 de la DC y 3 del PPD) y a convencionales de los movimientos sociales, sus votaciones fluctuaron con cierto sentido político práctico y otros, en cambio, fueron la primera expresión de la mera dispersión o el puro desorden.

Las señas de esa primera votación marcaron los primeros meses: el aislamiento completo de Chile Vamos, que no logró articular alianzas y ni siquiera mucho diálogo con otros sectores, en una posición de minoría que significaba que por primera vez desde el inicio de la transición no tendrían capacidad de veto; que el PS y el FA ensayaron una alianza bastante articulada, limitando la influencia del PC, precisamente cuando se estaba en los días previos a las primarias entre Boric y Jadue; y que hubo una especie de “doble bisagra”, porque dos fuerzas expresaron voluntad de bloqueo, con capacidad de condicionarse mutuamente: los Independientes No Neutrales, que con los votos que llegó a obtener Patricia Politzer podían impedir llegar al *quorum* de los 2/3 para aprobar algunas normas; y una parte de la Lista del Pueblo, los 26 que se disciplinaron con Rojas Vade, que remarcaron su voluntad de identidad propia y de hegemonizar la agenda radical.

En menos de dos meses ese cuadro cambió: la Lista del Pueblo se llenó de contradicciones y disputas de protagonismo, al punto de que, incluso antes de que se denunciara el fraude de Rojas Vade sobre su estado de salud, ya habían renunciado 9 miembros de su bancada. Se terminaron disolviendo, pero fue reemplazado por una nueva coalición radical: a fines de septiembre, en las votaciones del Reglamento, cuando se debatía si mantener la regla del mandato constitucional de aprobar las normas por un quorum de 2/3 o rebajarlo a los 3/5, el PC logró romper el aislamiento relativo que tenía al comienzo y articuló 63 votos en torno a esa iniciativa de establecer un quorum de 3/5, esto es, se configuró el bloque que desde la izquierda tenía 1/3 de la Convención, con capacidad de impedir la dictación de normas sin su consentimiento. El PC no siempre pudo ejercer la conducción de ese bloque y de hecho, para mantener su unidad, muchas veces debió ceder a posiciones más maximalistas, pero reunió a su alrededor a los comités Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, la mayoría de los convencionales de Escaños Reservados y otros independientes.

Eso redujo la influencia de los Independientes No Neutrales, que al final -más allá de materias muy evidentes y de negociaciones parciales- terminó sumándose a otorgar la mayoría de 2/3 que las normas requerían.

Hacia fines de agosto de 2021 las encuestas Cadem y Critería registraron bajos resultados para la Convención: Cadem marcó un descenso en la confianza en la Convención desde el 58% a un 51%, mientras que la desconfianza subió desde el 40% al 46%, mientras que Critería tenía datos más duros, porque solo un 30%

aprobaba la labor de la Convención *versus* un 47% que la desaprobaba.

La Convención Constitucional había perdido impulso en la ciudadanía y la atención se desplazó hacia la disputa presidencial y parlamentaria que comenzaba. Sus debates mantenían una mezcla de nuevas *performances* identitarias, discursos en un tono poético y nostálgico, reivindicaciones genéricas de derechos, sin asomo de una estrategia o un diseño que permitiera un acuerdo amplio. La definición sustantiva de la nueva Constitución entró en una borrasca y ello derivó en que la incertidumbre sobre su proceso, que hasta ese entonces tendía a situarse básicamente en ciertos círculos de élite, se trasladó hacia sectores más extendidos de la ciudadanía.

No había una definición respecto de cuáles serían las jerarquías de las normas fundamentales, cómo iba a concebir los sistemas de equilibrios de poder o las garantías esenciales que la nueva Constitución establecería. Aunque se declaraba que los derechos fundamentales eran sistémicos, progresivos e interpretables, es decir, que ninguno era por sí solo un derecho absoluto, la retórica de los convencionales se mantenía en la lógica contraria, esto es, que cada derecho se esgrimía como general y absoluto. La consecuencia política de esa lógica era que las negociaciones y la búsqueda de acuerdos se empezaban a construir sobre la base de una agregación de demandas, a las tuyas sumo las mías, y menos por concesiones mutuas que permitieran delimitar un acuerdo general.

No había un equilibrio de compromisos; y sin esos equilibrios no hay bloque histórico, no hay construcción de hegemonía.

Esa pérdida de legitimidad y ese vacío de conducción, aunque fuera en una fase temprana de la Convención, fue determinante en los resultados presidenciales y parlamentarios: permitió la primera mayoría de Kast en la derecha y que la derecha recuperara prácticamente toda la votación que había perdido seis meses antes: pasó del 20,56% en mayo al 39,57% en noviembre y, en especial, logró empatar el Senado: gobierno y oposición tendrían 25 senadores cada uno.

En sí mismo, ese era un cambio esencial en el escenario que no fue tratado como tal, en gran medida por el triunfo de Boric en la segunda vuelta. Hubo un legítimo entusiasmo por su 55,87% en la segunda vuelta, pero se olvidó su 25,83% de la primera vuelta y ese equilibrio en el Congreso.

En especial, sobre todo entre aquellos teóricos del poder constituyente originario que estaban en la Convención Constitucional, se negaron a ver los resultados de noviembre y diciembre de 2021 como un tipo especial de dualidad de poderes, tan propio de los momentos revolucionarios o de crisis orgánica. En ese sentido, como describíamos en la caracterización de este período, ese nuevo equilibrio era también un equilibrio de legitimidades, esto es, la Convención Constitucional y el Congreso tenían su propia capacidad de forjar hegemonía en la sociedad.

La Convención Constitucional estaba debilitada, pero todavía era la portadora del valor otorgado a la idea-fuerza de que el país requería “un nuevo acuerdo” o que la Constitución podía volver a ser “la casa de todos”. Asimismo, en ese entonces, el apoyo a la nueva Constitución todavía se movía en una clave anti-élite. El

sentimiento anti-partidos estaba vigente; y aún lo está. En parte, ese era un rasgo muy vivo detrás de la segunda vuelta presidencial entre Boric y Kast, porque ambos desplazaban en sus sectores a los partidos tradicionales. Incluso, en cierto sentido, uno de los factores que afectaba a la propia Convención es que, como poder, ellos también ya habían pasado a ser una parte de la élite. Vale decir, tenían espacio, pero limitado.

El Congreso, a su vez, seguía siendo portador de la política tradicional, pero con la renovada legitimidad de una elección ciudadana, que en este caso tenía una representación más reciente, actualizada, de la soberanía popular.

Inevitablemente, aunque fuera por poco tiempo -pero era el tiempo suficiente respecto de los plazos de la Convención y del plebiscito de salida- se instaló la interpretación de que las elecciones de noviembre de 2021 constituían una nueva legitimidad contrapuesta a la de la Convención. La idea-fuerza de que la Convención Constitucional tenía una “legitimidad superior” a la del Congreso era una tesis válida para la etapa del estallido o previa al estallido, pero ya había perdido vigencia. El Congreso que asumía en marzo de 2022 ya no tenía esa *capitis diminutio*.

Lo que estaba en juego en esa dinámica era cómo ambas instituciones -la Convención y el Congreso- fortalecían o elevaban su legitimidad una respecto de la otra y, en especial, si la Convención Constitucional se iba a transformar en la base ética y política de un acuerdo que permitiera superar la grave crisis política e institucional de los últimos años o solo seguiría siendo su caja de resonancia, en algunos casos amplificando sus efectos.

De ello dependía de que el plebiscito de salida, con voto obligatorio, además, fuera el momento simbólico del cierre de la crisis o fuera otro hito de una crisis que se prolongaría. Sin embargo, al interior de la Convención Constitucional y de la propia concepción inicial del gobierno de Boric, eso nunca se vio así. En realidad, no se quiso ver ese riesgo ni ponderar sus efectos, porque significaba un giro en la lógica predominante.

Era la hora de liderazgos pragmáticos, pero no había masa crítica para ponerla en acción.

En la derecha, la división de Chile Vamos y la conformación parlamentaria de Republicanos empezó a condicionar la disposición a los acuerdos. Los voceros de Chile Vamos en la Convención, Rodrigo Álvarez (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Hernán Larraín (Evópoli) tenían esa disposición, pero sin contraparte y con cada vez mayor resistencia interna, encabezada por Marcela Cubillos y Constanza Hube, que empezaban a desplegar la campaña del Rechazo.

A pesar del triunfo de Boric, el pacto Apruebo Dignidad no existía como tal en la Convención. El FA y el PC actúan por separado, en una abierta disputa por la hegemonía, articulando alianzas para alcanzarla. El FA actuaba en base a un acuerdo con el Colectivo Socialista y a ello sumaban al Colectivo del Apruebo (DC, PPD e Independientes) y a los Independientes No Neutrales, que a esas alturas ya habían perdido capacidad de autonomía y su propia voluntad de poder. En determinadas votaciones llegaban a constituir 1/3, que bloqueaba o moderaba algunas materias. Trataban de ser los grandes articuladores de un acuerdo, pero con las dificultades de ser la fuerza del candidato presidencial, Gabriel Boric, y la inhibición de

llegar a acuerdos con la derecha, que se había transformado en una línea roja infranqueable. A su vez, el tercio que había logrado armar el PC, condicionado por las divisiones internas de ese bloque y por la dispersión y radicalidad de los convencionales que articulaba, se enfrentaba constantemente a la disyuntiva de buscar acuerdos o tensar sus posiciones maximalistas hasta el cierre de las negociaciones. En general, esto último es lo que hizo.

La debilidad de la ex Concertación se agravó, por el bajo resultado de Yasna Provoste en la primera vuelta presidencial y porque, a pesar de su equilibrio con Apruebo Dignidad en la Cámara de Diputados y su mayor influencia en el Senado, decidió entrar al gobierno de Boric en una posición subordinada.

Tenía una posición de poder significativa, pero sin capacidad hegemónica ni vocación para ejercerla. A esas alturas, se incubaban dos fenómenos en la elite de la ex Concertación. En primer lugar, teníamos un diagnóstico de los riesgos que se incubaban, pero en realidad solo aproximaciones genéricas de una solución compartida. No había un consenso fino -como el que se requiere al momento de redactar una Constitución- sobre si favorecíamos una Constitución mínima o una Constitución programática, aunque fuera más moderada que la de los maximalistas. Eso favoreció, claramente, el peso del FA en ese bloque. En segundo lugar, en esa fase se impuso el complejo ante los ultras, porque cada posición distinta era tímida y siempre con la sombra de que, al final, esa mayoría maximalista podía triunfar, que a pesar de los errores podía ganar el plebiscito. Se trataba de una nueva versión del temor a quedarse abajo del tren de la historia.

En síntesis, esa fase se cierra con espacio político y con condiciones de legitimidad para un acuerdo constitucional, pero ello requería que todos los actores ponderaran sus posiciones relativas de poder como lo que son, relativas. No ocurrió, porque los sectores radicales, articulados por el PC, pero no siempre conducidos por él, seguían creyendo que tenían una posición de poder incontrarrestable; porque los sectores moderados renunciaron a su liderazgo o fueron incapaces de contrarrestar la hegemonía maximalista de esos meses; y porque la derecha -humillada en la Convención, pero ratificada en su poder de equilibrio frente al que sería el futuro gobierno de Boric- empezó a desplazarse hacia el Rechazo, construyendo y legitimando su propia radicalización.

Fase enero y abril de 2022

Visto en retrospectiva, este es el momento decisivo, cuando se consuma la derrota.

La encuesta Cadem comenzó a medir la correlación entre el Apruebo y el Rechazo solo a partir del 26 de enero de 2022. En ese momento el Apruebo tenía una amplia ventaja, de 56% contra un 32% del Rechazo. Vale decir, a pesar de las críticas por las performances identitarias del día inicial, de los convencionales paseándose con corpóreos por la Sala de la Convención, de la irritación por el caso Rojas Vade -que derivó en su renuncia- y de la pérdida de impulso antes descrita, había una mayoría consistente que seguía esperanzada en un acuerdo constitucional. Aunque no es replicable linealmente, pero sí como tendencia general, a esas alturas el Apruebo había perdido 22 puntos porcentuales, pero seguía siendo

mayoría. Y de ese descenso, solo unos 10 puntos se habían desplazado al Rechazo y lo demás hacia los indecisos.

Una cosa era la Convención Constitucional y otra era una nueva Constitución.

Sin embargo, la primera inflexión de esa tendencia se produce en febrero, pocas semanas después, cuando se inician las primeras votaciones en el Pleno de la Convención.

Estas partieron con una controversia sobre el Sistema de Justicia, precedida semanas antes por una dura declaración de la Corte Suprema contra las propuestas de limitar el período de los jueces y las críticas posteriores de otras personas sobre el mecanismo de evaluación y designación de jueces. Era un debate abierto, con intervenciones de voces legitimadas, que instalaban una duda razonable sobre qué era lo mejor. En general, aunque se trataba de un aspecto relativamente técnico, captó la atención de la opinión pública sobre cómo se iba a procesar esa diferencia.

En vez de darse un tiempo adicional o abrir una deliberación especial que permitiera un acuerdo, lo que prevaleció fue realizar la votación y “pasar la aplanadora”. A partir de ahí, y no antes, cuando era un debate interno entre ellos, la Convención perdió el aura de esperanza en torno a que el espíritu de los independientes y de las figuras ciudadanas que lo componían se iban a comportar de manera distinta a los políticos tradicionales, que iban a lograr crear un clima de acuerdos que superara las divisiones del Congreso y que iban a representar un liderazgo nuevo, integrador, capaz de producir consensos.

El Apruebo bajó al 47% en las mediciones del 11 y 25 de febrero, luego tuvo otro descenso a 44% y 42% en las encuestas de 4 y 11 de marzo, respectivamente. En todas esas ocasiones, a su vez, el Rechazo no tenía un cambio proporcional, seguía en el rango del 33%, 35% o 37%, es decir, la caída del Apruebo no se desplazaba al Rechazo, sino a quiénes preferían no responder o declarar que no sabían.

Un factor inevitable de considerar, a su vez, es que esas primeras mediciones eran todavía con Piñera en el poder. Las dos primeras semanas de Boric en el gobierno no alteraron esas cifras. El cambio se produce a partir de la encuesta Cadem del 1 de abril de 2022: el Rechazo pasa al 46^o% y el Apruebo cae al 40%, para no recuperarse nunca más.

Este momento de inflexión condensa varios factores que se aceleraron mutuamente.

El primero es que, a diferencia de los meses anteriores, cuando el maximalismo todavía era abstracto o parecían disputas que luego podrían resolverse, el comienzo de las votaciones empezó a transformar en realidad los riesgos que distintos sectores empezaban a advertir. Es cuando el maximalismo de la Convención agota su capital de legitimidad, erosiona su nexo de sentido común con la ciudadanía y coloca en el horizonte el escenario de su derrota.

La dinámica de la Convención entró rápidamente en crisis. El inicio de las votaciones agudizó las divisiones: quienes estaban dispuestos a hacer concesiones para después tener respaldo para sus propias propuestas se quedaron sin margen real de negociación. Las reglas de procedimiento

permitieron que las materias ya aprobadas por 2/3 pasaran a ser inamovibles, lo que provocó que las negociaciones se volvieran más rígidas y tensas y, de hecho, se produjeron divisiones en casi todas las bancadas. La retórica de la horizontalidad derivó en que nadie otorgaba autoridad a figuras ordenadoras y se redujeron los espacios formales e informales de negociación.

Eso se sustentaba, además, en otros micro-fenómenos. A diferencia de estar ya en el gobierno, el FA, el PC y el PS no actuaban como coalición ni asumieron el imperativo de garantizar la conducción de la Convención. Asimismo, en esta fase Boric y su Equipo Político no quisieron o no se atrevieron a intervenir. Los convencionales maximalistas, los ex miembros de la Lista del Pueblo y de los Movimientos Sociales Constituyentes, mantenían su unidad sobre la base de apoyar todas las agendas particulares de sus integrantes. Una dinámica similar, aunque con más racionalidad estratégica, se produjo en el bloque de los pueblos indígenas, que luego de meses de disputas comenzaron a ordenarse tras sus planteamientos comunes, apoyando a otros grupos solo sobre la base del respaldo a los suyos. En el caso de las corrientes de centroizquierda, incluyendo en ella al Colectivo del Apruebo (ex Concertación) y a los Independientes No Neutrales, no superaban su dispersión: una parte de ellos se sumaba a la hegemonía de algunos planteamientos radicales, otros actuaban desde la buena fe o desde el “buenismo”, tratando de evitar que se los asociara a la derecha. Y, por último, en ese contexto, los sectores moderados de la centroderecha solo cosechaban derrotas y asumieron que el giro hacia el Rechazo era más viable que el intento de moderar la Convención.

El segundo, y muy gravitante, fue el cambio de gobierno, la salida de Piñera y la entrada de Boric.

El episodio de Temucoicui, cuatro días después de asumir, cuando la ministra del Interior Izkia Siches cree poder entrar a la zona como ninguna otra autoridad lo había podido hacer antes, volvió real la aprensión respecto de lo que podía ocurrir en el país si se declaraba a Chile como un Estado Plurinacional. Un concepto abstracto, representativo de la virtud del reconocimiento esperado por los pueblos originarios, tomó cuerpo y vida, asociado a los mayores temores que expresaba la derecha y sectores moderados de la centroizquierda. Las declaraciones del lonco Víctor Queipul, sosteniendo que la ministra debía pedir permiso para entrar a una zona declarada “territorio liberado”, le dio entidad y carácter a esa objeción.

La inflexión de la encuesta Cadem del 1 de abril, cuando el Apruebo pierde la mayoría, es el efecto directo de esta situación. Fue una especie de bomba de profundidad, porque el impacto inicial capturó la atención, su repetición mediática por varios días y semanas sedimentó un juicio crítico y cristalizó como un nuevo sentido común sobre lo que la plurinacionalidad significaba.

En abril, inmediatamente después, y también muy al comienzo del gobierno, se abre un nuevo debate sobre un retiro de fondos de las AFP. El gobierno se divide, porque el ministro Marcel rechaza la iniciativa y advierte sobre las dificultades del control de la inflación, mientras que en silencio La Moneda preparaba su propio proyecto, más limitado, sin consulta con Marcel, que terminó del peor modo. Se rechaza el proyecto de los parlamentarios e inmediatamente después también se rechaza el del Ejecutivo. El gobierno sucumbe a la presión populista,

debilita a su ministro de Hacienda, crea expectativas de una alternativa a los sectores entusiasmados con los retiros y el doble bloqueo queda como otra reyerta de la clase política.

En pocos días se había producido un cambio en el estado de ánimo del país.

A ello se sumó un hecho imprevisto, que el gobierno de Boric demoró en procesar. La invasión de Rusia a Ucrania provocó un impacto global en los precios del petróleo y de los alimentos, que en Chile agravó los problemas de inflación que la economía traía por efecto de los retiros de fondos de las AFP. Hacia fines de abril la inflación ya era una preocupación ciudadana, que se expresa especialmente como un temprano deterioro de las expectativas económicas. En las encuestas de esos días, las personas declaraban una peor situación económica personal y, consultados sobre las perspectivas hacia el futuro, visualizaban que ello no mejoraría en los próximos meses o antes de un año. El escenario real era que todos los indicadores económicos iban a empeorar en los meses en que la Convención cerraba su labor y comenzaba la campaña del plebiscito.

Eso no tuvo relato político, sino uno básicamente tecnocrático, y por cierto la gente lo vivió desde su experiencia, no desde las explicaciones razonables del problema.

El descenso de Boric en las encuestas fue inusualmente brusco y *de facto*. La suerte del Apruebo siguió la suerte de Boric, así como antes la suerte del plebiscito de entrada y de la elección de constituyentes siguió la suerte de Piñera.

El tercero, que es determinante en esta fase y para todo el período que analizamos, es que sectores concretos de la sociedad se alejaron paulatinamente del Apruebo.

La primera resistencia descrita, de los jueces a la limitación de sus períodos, se extendió a diversos actores del sistema judicial. La que podríamos llamar “gran familia judicial” se sintió directamente amenazada por la Convención y por el tono amenazante, de revancha, que transmitían varios convencionales. Los que antes eran abogados prudentes y sensatos se transformaron en verdugos excitados con la guillotina de la que estaban a cargo. La agria discusión sobre el régimen político movilizó especialmente la queja corporativa del Senado. Figuras con respaldo ciudadano que querían una nueva Constitución se transformaron en enemigos activos del proceso y empezaron a movilizar sus redes territoriales por el Rechazo, algunos abiertamente y otros en el contacto uno a uno. Vale decir, sectores influyentes de la política institucional se pasaron a una oposición activa. Los sectores maximalistas despreciaban lo que consideraban era una resistencia elitista, pero también menospreciaban la influencia que todos ellos conservaban en la sociedad. Creyeron que era un problema moral, en circunstancias que se trataba de una cultura institucional y, obviamente, de intereses de una fracción de la clase media profesional, que podía ser un aliado del proceso y lo transformaron en su enemigo.

La concentración de los convencionales maximalistas en la Comisión de Medio Ambiente significó varias semanas de agrios debates sobre el sentido y alcance de sus propuestas, que eran insistidas o modificadas muy parcialmente tras rechazos iniciales del Pleno, o incluso después de esas votaciones eran redactadas de un modo aún más radical para tratar de forzar una negociación, al punto que a

mediados de abril un grupo de convencionales ecologistas realizó una “funa” contra el Colectivo Socialista, llegando incluso a tratarlos de “traidores”, individualizando a cada uno de los que no votaron como ellos.

El rol de esa Comisión de Medio Ambiente tuvo un papel mucho más relevante en la derrota de lo que se ha consignado posteriormente, porque ahí es donde fueron más evidentes las contradicciones de clase que movilizó la Convención.

¿Por qué? Veamos algunos ejemplos.

- En febrero de 2022, la Comisión aprobó la extinción de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, sustituyéndolos por autorizaciones temporales del Estado. La medida apuntaba a una de las deformaciones más graves del modelo neoliberal chileno. El mercado del agua establecido por el Código de Aguas de 1981 había permitido la acumulación especulativa de derechos de aprovechamiento, que afectaba a pequeños y medianos agricultores y a importantes sectores rurales y urbanos de la población. Lo que quería ser una medida contra la oligarquización del agua, se transformaba en una norma que volvía más precarios aún los derechos de miles de pequeños y medianos agricultores. El problema fue su lógica maximalista: la extinción inmediata de los derechos al entrar en vigor la nueva Constitución -sin compensación ni gradualidad, sin distinción entre grandes especuladores y pequeños usuarios- los afectaba directamente. Al extinguirse la propiedad y transformarse en una simple autorización temporal, esos agricultores perdían la certeza jurídica sobre su actividad productiva. A su vez, al quedar sujeto a

autorizaciones temporales del Estado, muchos visualizaron el riesgo de quedar sujetos a decisiones discrecionales o a que otros con más influencia pudieran acceder al agua en perjuicio de ellos. Podía terminar siendo el reemplazo de una oligarquía por otra, sujeta a ese poder discrecional. No era un retorno al Código de Riego de 1953, que otorgaba la garantía del vínculo del agua a la tierra, sino un nuevo invento estatista. Además, rompía una práctica ya asentada, porque muchos de esos pequeños y medianos agricultores usaban sus derechos de agua como garantía para acceder a créditos bancarios o ya los tenían hipotecados. Esa inmediatez de la norma los llevaba a una crisis financiera también inmediata.

Al mismo tiempo, la jerarquía de prioridades aprobada colocaba en cuarto lugar -después de la preservación de ecosistemas, el consumo humano y los usos ancestrales indígenas- a la "ganadería y agricultura local de pequeña escala". Es decir, el pequeño agricultor quedaba en el lugar más bajo de la jerarquía de acceso al agua, por debajo de derechos ecosistémicos que en momentos de escasez hídrica, que ya era severa en varias regiones, podían imponerse sobre su actividad productiva.

El esencialismo de la Comisión confundía al gran especulador hídrico con el pequeño regante y aplicó a ambos la misma solución sin ninguna distinción de clase ni de fracciones de clase. Mirado históricamente, la alianza construida por la Reforma Agraria de Frei Montalva y Allende entre los campesinos y los pequeños propietarios agrícolas fue socavada por esta votación. Por eso no fue extraño, después, que el Rechazo obtuviera sus porcentajes más altos precisamente en las zonas rurales de las regiones de

Coquimbo, del Maule, Biobío y en las zonas agrícolas de otras regiones. Especialmente simbólico fue que en la comuna de Petorca, una de las más afectadas por la sequía de la región de Valparaíso y la que representaba más las movilizaciones contra la desigualdad en el acceso al agua, el Rechazo ganara con el 56%.

- En el sector minero ocurrió algo similar, la Comisión de Medio Ambiente logró unificar a la pequeña minería artesanal con la gran minería transnacional. La propuesta de pasar de concesiones judiciales a autorizaciones administrativas temporales afectó el modelo de operación de los pirquineros y mineros artesanales y de las asociaciones de pequeña minería, que durante más de cien años han operado bajo el sistema de concesiones judiciales, precisamente porque ese sistema les garantiza más imparcialidad y protección ante los poderes fácticos regionales. El pirquinero que descubre un yacimiento puede constituir su concesión judicial de manera objetiva, sin pasar por una autorización discrecional de un funcionario que podría ser capturado por los grandes intereses. Pasar a un sistema de autorizaciones administrativas significaba que la pequeña minería quedaba expuesta exactamente a la captura que el sistema actual impide. Una solución ideológica, que curiosamente cree en la asepsia del Estado en sus decisiones, al margen de cualquier consideración del carácter de clase de ese mismo Estado, unió a pirquineros y a ejecutivos de grandes mineras en contra de la nueva Constitución.

Algo similar ocurrió antes y después de la Convención, por una ley dictada en el gobierno de Piñera y que el gobierno de Boric no resolvió, que eleva el costo de las patentes mineras, también sin distinguir entre pequeña,

mediana y gran minería, que pasó a ser un tributo expropiatorio para los pequeños mineros. La lógica es la misma, que en la Convención se expresaba como abstracción ideológica y en los gobiernos como tecnocracia de escritorio.

- También en febrero, la Comisión aprobó una norma que establecía y regulaba la restitución de tierras a las “naciones preexistentes” al Estado, asociando ese derecho a su cosmovisión e identidad cultural. La propuesta incluía los derechos “a la tierra, territorios, recursos y bienes naturales”. Para esos efectos, tomando la experiencia de Nueva Zelanda, se creaba una Comisión Especial (“plurinacional y paritaria”) que se encargaría de “desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de tierras, aguas, territorios indígenas y espacios sagrados”. Si eran zonas de propiedad fiscal, el Estado debía entregarlos a título gratuito en un plazo de dos años; y si eran privadas, la Conadi debía adquirirlas, también en un plazo de más o menos dos años.

La norma también decretaba “la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia,

y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado”.

Obviamente, en todas las regiones hubo muchas especulaciones sobre su alcance, a quiénes afectaba y quiénes se preparaban para adquirir esas propiedades y actividades. Este es un ejemplo del tipo de norma que deja de tener el carácter de un derecho fundamental (la restitución de tierras usurpadas) y pasa a tener la forma de una ley, con especificaciones que activan múltiples contradicciones, que al ser llevadas a la Constitución tienen una mayor rigidez y las vuelven más difícil de modificar.

Todas estas iniciativas y propuestas empezaron a incubar resistencias, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor fuerza en el imaginario de la gente, antes de que la derecha articulara su estrategia de radicalización y agregara su propia lista populista de amenazas -como ocurrió con la campaña por la expropiación de las viviendas- destinadas a elevar la polarización

Por todo esto, es la fase cuando el espíritu jacobino pierde el poder.

Aquí vale la pena detenerse de nuevo en Gramsci, porque inicialmente él tenía distancia del jacobinismo, al considerar que se fundaba en la acción voluntarista de una minoría, sin tener una auténtica vocación de mayoría. Solo después, cuando estudia la revolución francesa, complejiza su apreciación con una observación útil en nuestro caso. Su objeción no es moral, sino política. Asume que el jacobinismo había tenido la virtud de transformar esa minoría organizada en una fuerza capaz de sostener la revolución e impedir su regresión. Valora su ímpetu y su

audacia, pero al mismo tiempo recalca que esa virtud contenía su límite. El jacobinismo podía ser eficaz para conquistar el poder, pero no para sostenerlo y estabilizarlo. Puede tener fuerza en la fase de crisis, pero pierde impulso cuando esa tensión declina. Y, luego, a consecuencia de ello, como le cuesta establecer un nuevo orden, empieza a aislarse de la mayoría que antes ayudó a formar.

El maximalismo de la Convención fue lo que la inviabilizó.

No estuvo dispuesta a compromisos que permitieran sostener y ampliar una mayoría. Creían que llegar a acuerdos era una debilidad o incluso una traición, sin considerar que los compromisos -en el sentido que Gramsci los concebía y que luego Berlinguer los transformó en política- no son el resultado de una debilidad, sino la vía de las transformaciones. No era una táctica, sino una estrategia democrática.

Al contrario, creyeron que la exaltación de su propio entusiasmo era el estado de ánimo todavía vigente en la ciudadanía. Y lo mismo predominó en el gobierno de Boric: creyeron que su triunfo era una base suficiente, el diseño de Jackson asumía que la superioridad moral de su agenda impedía a la oposición resistirse a ella y que, a pesar de las dificultades -siempre solo circunstanciales- no iban a alterar la mayoría política y social ya consolidada a favor del Apruebo.

Las encuestas que advertían lo contrario eran un paréntesis. No es que estuvieran equivocadas, sino que representaban una foto momentánea, no constituían una tendencia. El gobierno y una buena campaña lo podían corregir.

Fase mayo a septiembre de 2022

Si los riesgos en abril ya eran evidentes, ¿por qué no hubo capacidad de reacción? o ¿qué condicionó aquello que ahora consideramos una incapacidad?

La Convención Constitucional era la vía para resolver la crisis de legitimidad que representó el estallido, pero inevitablemente estaba en medio de la crisis y era parte o expresión de la crisis. Nunca fue ni podía ser un ente al margen de ella. Cualquier proyección ideal sobre qué debía o no debía hacer pasa a ser metafísica. En ese sentido, era completamente normal que en materias complejas o en negociaciones que condensan múltiples intereses hubiera momentos de alta tensión y puntos de quiebre que parecían irreversibles. De hecho, en toda negociación -de cualquier tipo- muchas veces los acuerdos surgen en un minuto en que todo parece ya inviable o en que la falta de voluntad rigidiza todo. En ese sentido, esa coyuntura de la Convención era previsible, no escapaba a esa recurrencia.

La singularidad de la Convención, sin embargo, por su composición y por la propia crisis sistémica que representaba, es que agregó otro factor de incertidumbre: la mayoría de los convencionales no tenía prácticas políticas o parlamentarias, esto es, en una de sus dimensiones, no asumían las deliberaciones como una negociación. Más aún, no tenían la noción de que el valor de las negociaciones es llegar a un acuerdo, y no solo imponer una posición. Ello exige reconocer la legitimidad de transar y ceder para cuidar lo esencial o un mínimo óptimo y que eso solo es posible -siguiendo a Humberto Maturana- desde la validación de los otros “como un legítimo otro”.

Por diversas razones, en algunos casos políticas e ideológicas (como veremos más adelante) o en otros por la cultura que se incubaba en los movimientos identitarios, tanto en los de izquierda como en los de derecha, el ejercicio que prevalecía era el de la exposición o la búsqueda de una verdad. Eso se creía auténticamente, como propósito y como posibilidad. Era un momento en que se desplegaba la política de las convicciones, en que cada cual -muy legítimamente- parte de la base de que su posición tiene un fundamento ético y expresa una realidad sustantiva. Esa verdad podía alcanzarse a través del diálogo, como espacio de iluminación que daría lugar a un consenso natural sobre que lo que es bueno y justo, o que ella nacería de la exposición sincera, racional y emocional, de los argumentos. Por eso, si se observan las intervenciones iniciales de cada convencional en el Pleno, en octubre de 2021, el tono es poético y algo nostálgico, grandilocuente y genérico, lleno de declaraciones sobre un amplio catálogo de derechos fundamentales que se debía garantizar de un modo perentorio y absoluto.

Cada concesión, en ese marco interpretativo, es una renuncia muy cara o éticamente inaceptable. Eso no excluye la definición de estrategias y maniobras, es decir, movimientos para convencer, esperar a que madure un acuerdo o ver cómo imponerlo, pero lo ordena de otra manera.

Los convencionales de izquierda radical sin partido, que se organizaban en varios colectivos y armaban alianzas puntuales en algunos temas, seguían creyendo que los resultados del plebiscito de 2020 y de las elecciones de constituyentes de 2021 habían fundado un nuevo poder en la sociedad chilena y que, por lo tanto, estaban en condiciones de imponer su hegemonía. Ella se volvería a

expresar en el plebiscito de salida. Ese era una especie de principio de realidad y, por lo tanto, las encuestas de esas semanas eran una distorsión de los hechos o una confusión temporal que se iba a despejar en la campaña.

En general, el PC no tenía ese diagnóstico y tampoco se movía desde esa esperanza. Su apreciación era más pragmática, aunque funcional a esa retórica. Creía que la mayoría alcanzada en la Convención permitía fijar banderas claves de su agenda y que el proceso todavía podía concluir con una mayoría en el plebiscito de salida, aunque ésta fuera con apenas el 50,01%. Reconocían que eso representaba una dificultad, que constituía una debilidad relativa del proceso y que después tendrían que enfrentar fuertes presiones por reformas a la Constitución y que, incluso, después deberían ceder a varias de ellas. Sin embargo, su expectativa era que en ese escenario tendrían una posición de poder que cambiaba esencialmente las condiciones de los últimos 50 años. No importaba ganar por poco, lo que estaba en juego no era una amplia mayoría ni un consenso constitucional, sino consolidar posiciones en temas medulares de su agenda.

La centroizquierda reaccionó muy tarde, ya había dado su respaldo a normas que eran muy difíciles de revertir y no tenía una posición de poder para modificarlas. Podía impedir los 2/3 para algunas normas a votar en la fase final, pero no tenía cohesión ni iniciativa para un reemplazo que generara un nuevo consenso. La subordinación de la mayoría de los convencionales del PS al FA ya había operado en sentido contrario. Y, a su vez, en un hecho determinante, la propia centroizquierda se dividió, entre los que querían salvar el proceso constituyente, tratando de hacer reformas para darle viabilidad, y lo que optaron por su derrota, desplazando la responsabilidad a la izquierda

radical que antes los había tratado tan mal. Obviamente, esa era otra forma de creer que no tenían responsabilidad en la crisis de legitimidad que atravesaba el país o que la recuperación de la legitimidad perdida era un retorno al antiguo orden que encabezaron. Era otro tipo de negación; y otro tipo de pequeñez.

La centroderecha tenía su propia división. Todos asumían que su pobre resultado en la elección de constituyentes se había revertido en las elecciones parlamentarias, que mantenían una fuerza en la sociedad que bordeaba el 40% y que, sobre esa base, podían alcanzar la mayoría que se empezaba a formar en torno al Rechazo. Pero también asumían que esa tesis contenía una gran fuente de incertidumbre. La mayoría de los convencionales de la centroderecha seguían buscando algunos acuerdos, establecían puentes con la centroizquierda para contener lo que estimaban era muy delirante o intentaban moderar el debate, aunque no se recogiera su disposición. Pensaban que el ciclo de la Constitución de 1980 ya se había cerrado y que si ganaba el Rechazo debía gestarse un nuevo acuerdo para una nueva Constitución, idealmente hecha en el Congreso. Otro bloque, en cambio, pero que no era más que de 8 a 10 convencionales, creían que solo les cabía la defensa irrestricta de los principios conservadores y neoliberales que articuló la Constitución del '80, porque se trataba de una batalla política e ideológica estratégica.

Todo eso, en su conjunto, impuso un rudo juego de fuerzas.

La expresión más cruda de esto, uno de los momentos en que la desconfianza entre los sectores de la izquierda y la centroizquierda se volvió más hostil, fue el doble intento de limitar el rol del Congreso en la implementación de la

nueva Constitución. El primero fue la tesis del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, respaldada por el entonces ministro Jackson, de establecer en las normas transitorias un mandato al Ejecutivo para aplicar las nuevas normas constitucionales a través de Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios (DFLA), que implicaban saltarse al Congreso. Para estos efectos, la Convención Constitucional reemplazaba al Congreso en la delimitación de esos DFLA y le otorgaba ese poder al gobierno de Boric. Obviamente, fue rechazado. El segundo, tras el fracaso de ese intento, fue la propuesta de la Comisión de Normas Transitorias de establecer un quorum de 2/3 para cualquier reforma constitucional en el período del Congreso que estaba vigente, esto es, hasta el año 2026. Es decir, no entrarían en vigencia las normas de reforma constitucional establecidas en la nueva Constitución, sino esa regla especial. El argumento era que el Congreso carecía de legitimidad para dismantelar la nueva Constitución y que se debía permitir que la nueva Constitución entrara en plena vigencia antes de cualquier reforma. Tampoco prosperó, pero agravó las desconfianzas, con efectos simbólicos que no podían ser relativizados: por décadas la lucha democrática había sido en contra de la regla de los 2/3 para la reforma constitucional de capítulos enteros de la Constitución de 1980.

Había quienes realizaban una defensa teórica o genérica sobre el *quorum* de los 2/3, porque -por ejemplo- es el *quorum* de reforma de la Constitución de Alemania y otros países. Sin embargo, el problema no era abstracto, sino concreto. Era respecto de las fuerzas de las corrientes políticas en Chile y de la historia vivida. La regla de los 2/3 de la Constitución de 1980 tenía una racionalidad práctica: la derecha se pensaba como 1/3 y necesitaba poder de

veto. Lo que quería era poder bloquear la convergencia entre la izquierda y el centro socialcristiano. En las negociaciones del 15 de noviembre de 2019, Fernando Atria y otros apoyaron activamente la regla de los 2/3 de la Convención que planteaba la derecha porque asumían que ellos podían tener 1/3 dirimente. De hecho, una de las críticas más duras del PC a ese acuerdo se fundaba en el *quorum* de 2/3 que tendría la Convención, porque iba a permitir el veto de la centroderecha. Ahora, en cambio, el FA y el PC convergían en establecer los 2/3 para limitar las facultades del Congreso y su posibilidad de ser un balance de poder en la fase de implementación. Es decir, buscaba establecer un poder de veto.

Era un problema político y no teórico. Su daño en el clima de confianzas, a su vez, dejaba de situarse en el plano de las elites y pasaba a la opinión pública.

En algunos de los *focus group*⁶ que se realizaron en esos meses apareció la expresión “yo no aprobé para esto”. El sentimiento que se incubó es que la ciudadanía esperaba cambios, incluso profundos, y que la Convención podía ser la vía para destrabar años de estancamiento en el Congreso. Cada quiebre o disputa de este tipo era una desilusión de esa expectativa.

La idea de la refundación del país se vació de contenido. La nueva Constitución había hecho sentido como la convergencia de cambios que incidían en su vida (pensiones, salud, educación y otros), pero que quedaron en un segundo plano por otros temas. La frase “no quiero refundar mi país, me gusta Chile, estoy orgulloso de ser

⁶ Realizados por Jorge Selume, que posteriormente fue el estratega de la campaña del Rechazo.

chileno”, empezó a ser usada como un sentimiento de identidad nacional movilizado por sectores conservadores.

Lo mismo ocurrió en los sectores rurales, donde el Rechazo alcanzó los más altos niveles de respaldo. En esos mismos *focus* algunas personas señalaban que “hablan de la gente del campo, pero no conocen el campo”. Asociaban las iniciativas constitucionales sobre el cuidado de los animales como propia de personas de las ciudades: “¿la gente en Santiago, que tiene a un perro encerrado en un departamento de 50 metros cuadrados me dice a mí que trató mal a mis animales? Aquí los animales están libres, bien alimentados, los cuidamos como parte de la familia”. Se sentían atacados, lo que expresaban era un dolor y, luego, rápidamente, una indignación. Para ellos, rechazar la Constitución se transformó en resguardo de su forma de vida.

El paso de la prohibición del aborto en la Constitución de 1980 a la legalización del aborto en la nueva Constitución, en vez de dejarlo como un legítimo debate abierto en la sociedad que podía tratarse en una ley y no en la Constitución, se transformó en un ataque a la espiritualidad religiosa, que radicalizó especialmente a los sectores evangélicos y católicos conservadores.

Por último, en la curva de las encuestas Cadem que hemos consignado, hubo un episodio determinante. A principios de junio de 2022, el Apruebo tuvo mejores cifras porque hubo una evaluación positiva del primer Mensaje Presidencial de Boric. El Rechazo se mantenía en un 45%, mientras que el Apruebo subió al 42%. Eso cambió irremediabilmente a partir del asesinato de un carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda a mediados de junio. Inmediatamente después el Rechazo subió al 51% y el

Apruebo bajo al 33%. Esa tendencia nunca se alteró sustantivamente.

Siguiendo la analogía de la revolución francesa, el triunfo del Rechazo fue el *Termidor* de la fase jacobina del estallido, de la Convención y del inicio del gobierno de Boric, pero no fue el resultado de una maniobra o de una conspiración de la derecha, sino el producto de la lógica interna de la "revolución descendente". La derecha ganó, pero en realidad antes de eso la izquierda se derrotó a sí misma.

Subsistía la crisis política e institucional, no se había resuelto la pérdida de legitimidad sistémica del país, pero su solución ya no sería en los términos de la mayoría radical que predominó en la Convención Constitucional.

Fase septiembre 2022 a diciembre 2023

El triunfo del Rechazo del 4 de septiembre de 2022 fue mucho más amplio de lo esperado. Obtuvo un 62% *versus* el 38% del Apruebo. Era una derrota estratégica, que sin embargo fue leída como una derrota táctica.

El gobierno de Boric creyó que se trataba de un retroceso reversible, cuya responsabilidad recaía en los errores de la Convención y en debilidades del gobierno, pero no de su concepción. Guillermo Teillier precisó esa interpretación señalando que “el triunfo del Rechazo es una derrota electoral, con visos de una derrota política, pero no es una derrota estratégica”⁷. A su vez, en la centroizquierda creíamos -y me incluyo entre ellos- que subsistía la legitimidad del plebiscito de entrada, que debíamos impulsar una nueva Convención 100% electa, pero con

⁷ Guillermo Teillier, entrevista en La Tercera, 2 de octubre de 2022.

plazos más breves y en base a otras reglas, que el Congreso debía definir. Asimismo, creíamos que la derrota del Apruebo era una derrota de la izquierda radical y que en este nuevo cuadro podíamos recuperar el liderazgo perdido en los años anteriores. La centroderecha, que seguía siendo la fuerza eje de la oposición, creía que a pesar del amplio triunfo del Rechazo la posición de la derecha todavía era frágil, que la crisis institucional del país debía dar lugar a una solución constitucional, aunque ahora bajo sus términos y su control.

Ninguna de esas lecturas era correcta, pero cada cual tenía fundamentos para sostenerla.

Lo que se configuraba era el *interregno* prolongado que describía Gramsci.

En general, la diferencia entre el carácter táctico o estratégico de una derrota es su relación con un ciclo histórico. En este caso, si era táctica, el Rechazo abría una nueva etapa del proceso constituyente, con actores, reglas y correlaciones de fuerzas distintas, pero continuaba. En cambio, si era estratégico, el Rechazo certificaba que el momento constituyente -esa energía particular que hace de la Constitución el objeto de las esperanzas colectivas- se había diluido. No se trataba solo de que el texto de la Convención hubiera fracasado, sino de que la Convención -en su derrotero- había vaciado de contenido la propia idea de una nueva Constitución. Cuando hablamos de la "gran farra" de la Convención Constitucional, nos referimos -en realidad- a que sus protagonistas agotaron el momento constituyente: le restaron legitimidad y fuerza, y lo vaciaron de sentido y contenido. Si se observa en esos términos, la derrota del A Favor en el plebiscito de diciembre de 2023, aunque esta vez fuera en contra del proceso hegemónico

por los Republicanos, ya no era sobre la Constitución, sino respecto de un clima político y emocional del país que ya había dejado de tener esperanzas en el cambio constitucional.

Precisamente, en el *interregno* prolongado no hay cierre. El viejo orden neoliberal ha perdido la autoridad para dirigir -ya no es hegemónico en el sentido estricto del término- pero las fuerzas que lo desafiaron probaron, en dos procesos sucesivos, su incapacidad para construir la alternativa. Para Gramsci, ese momento es el claroscuro, el del poder sin proyecto y del proyecto sin poder, que es cuando surgen los monstruos, como síntomas mórbidos de la crisis: la inseguridad como crisis de autoridad del Estado, el populismo de extrema derecha que capitaliza el miedo, la parálisis de la agenda legislativa que convierte a las instituciones democráticas en su propia caricatura y, finalmente, un segundo proceso constitucional que se transforma en la farsa de la que ya había sido su tragedia. La historia avanza, pero lo hace hacia atrás.

¿Qué momentos marcan este período? y ¿cómo el gobierno de Boric vacía su poder?

Primero, el cambio de gabinete dos días después de la derrota, el 6 de septiembre de 2022, es un cambio de conducción, pero sin un nuevo acuerdo político entre las fuerzas que sostenían al gobierno y sin un diagnóstico compartido sobre qué había fallado y por qué. Esa discusión de fondo se evitó deliberadamente por Apruebo Dignidad y se eludió por el Socialismo Democrático, creyendo que *de facto* iban a ir ajustando la orientación del gobierno.

Fue, en lo esencial, un reordenamiento de personas que dejaba intacto el problema de fondo: el gobierno de Boric operaba con dos coaliciones, que no se concebía como un “bloque histórico”.

Boric había llegado al gobierno bajo el impulso del estallido, lo que Maquiavelo describía como la *Fortuna* y Hegel asociaba al *espíritu de la época*, pero la derrota del Apruebo demostraba que no estaba desplegando la *virtù* necesaria para convertir esa fuerza en hegemonía. No porque él o su gobierno fueran insuficientes en términos personales, sino porque las condiciones gramscianas para resolver una crisis orgánica no estaban dadas, esto es, la formación de un bloque histórico, que es social y político; la articulación de una alternativa en redes capaces de dar una conducción mínimamente coherente, que es lo él traducía bajo la idea de los “intelectuales orgánicos” de un proceso de cambios; y, consolidar un sentido común popular disponible para el cambio. El estallido las anunció, pero no las produjo.

El resultado era un gobierno que seguía partido en dos y un Boric moviéndose en la ambivalencia. Eso elevó la incertidumbre de múltiples actores, restó espacio de diálogo real con la oposición, afectó la credibilidad de los ministros del Socialismo Democrático y alejó a sectores de Apruebo Dignidad que se sentían desilusionados. Al respecto, el director de la encuesta Critería, Cristián Valdivieso, sostuvo que el 30% de apoyo más o menos estable hacia a Boric en realidad era un 30% distinto al comienzo que en las fases intermedias y tardías de su gobierno.

En definitiva, el cambio de gabinete no resolvió esa contradicción, solo la administró.

La figura de “un gobierno y dos coaliciones” pasó a ser una condición permanente. Boric sumó al Socialismo Democrático por las necesidades de la segunda vuelta y, ya electo, se preocupó de sumar especialmente al PS, pero no porque hubieran construido un proyecto común o hayan transformado esa alianza en un pacto de gobierno *post* elecciones, al modo que se realiza en los regímenes parlamentarios⁸.

Segundo, el primer monstruo de ese *interregno* prolongado fue la crisis de seguridad.

La oleada de violencia que sacudió al país en los años 2022 y 2023 -el crimen organizado en el norte, el estado de emergencia permanente en el sur, los homicidios en zonas urbanas, la sensación generalizada de que el Estado había perdido el control sobre territorios y poblaciones- no fue solo un fenómeno policial, fue un monstruo político: la manifestación más concreta y cotidiana del agotamiento de la autoridad del Estado.

La demanda de seguridad no era una demanda conservadora, en el sentido de un retorno al orden autoritario, sino la demanda de certeza, estabilidad y tranquilidad.

⁸ La noción de un “proyecto común” puede adquirir muchas formas: un consenso estratégico más o menos profundo, donde pueden coexistir énfasis, tiempos o modos de transformarlos en políticas públicas; o una visión mínima pero suficiente como para fijar objetivos y un programa capaz de unificar a la coalición; o como un pacto de gobierno en base a programas propios de las fuerzas, que luego acuerdan mínimos comunes para el período. La Concertación fue un proyecto progresista que, con matices, se movió entre el primero y el segundo, hasta que se agotó como fase o como contenido, pero no como modo de aproximación a la coalición. Nunca exploró el tercer modelo, que es el usual en de los regímenes parlamentarios. El gobierno de Boric no logró configurar ese proyecto y, en ese sentido, no logró reemplazar ni reeditar un nuevo proyecto progresista.

La contradicción entre los acuerdos de seguridad de la ministra Carolina Tohá con la oposición y los indultos presidenciales de fines de diciembre de 2022 decantó rápidamente en una crisis. La ambivalencia de Boric era la expresión empírica de que las dos coaliciones del gobierno no compartían el mismo diagnóstico ni la misma jerarquía de prioridades. El gobierno, que intentaba construir credibilidad en materia de seguridad, firmaba simultáneamente su propia fuente de incertidumbre. La ciudadanía que ya desconfiaba de la política encontraba en esa contradicción la confirmación de sus sospechas: las nociones de “acuerdo”, “sentido de Estado”, los “consensos país” y la “mirada de largo plazo” eran expresiones vaciadas de contenido, un discurso sin correlato en la acción.

Todo un arsenal de conceptos había perdido fuerza; ya no significaban lo que antes lograban representar.

Tercero, el rechazo a la reforma tributaria -en marzo de 2023- fue la primera derrota legislativa estructural del gobierno y, en términos históricos, la más significativa, porque afectaba el núcleo del proyecto transformador al que Boric aspiraba.

Importa diseccionar el camino de esa derrota, porque tiene varias facetas.

El equipo político del gobierno, en este caso a cargo del Socialismo Democrático, porque la decisión recayó principalmente en los ministros Mario Marcel, Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá, erró seriamente su apreciación de la correlación de fuerzas. Pensó que podía repetir una mayoría mínima en la Cámara de Diputados para llegar al Senado con un mayor poder de negociación. El triunfo del

Rechazo no solo había fortalecido a la derecha, sino que también había profundizado el desorden y la descomposición de las fuerzas con las que contaba el gobierno. La derrota final del proyecto se debió a la abstención de un diputado electo por el Partido Radical (Andrés Jouannet, que después presidió Amarillos y ahora se integró al gobierno Kast) y, en especial, por la decisión de tres diputadas de salir de la Sala como protesta contra el gobierno: Pamela Jiles, Mónica Arce y Viviana Delgado, esta última a causa de una discusión con un ministro.

En un segundo plano, ese error de apreciación contenía otros dos razonamientos que confabularon contra el proyecto. Uno, parte del acomplejamiento del Socialismo Democrático frente a las críticas de la izquierda radical fue asumir la tesis de que la Concertación siempre había cedido antes de dar las peleas, esto es, que en vez de presentar un proyecto con sus ideas, los negociaba antes para evitar una derrota en el Congreso. Esa crítica se instaló como una verdad -obviamente muy discutible- y esta pasó a ser una ocasión para demostrar que no se quería resucitar esa lógica. El otro, en realidad el anverso del anterior es que ese diseño de ganar en la Cámara de Diputados para después negociar mejor en el Senado era el tradicional en los años de la Concertación, sobre todo cuando había senadores designados. Sin embargo, desde las elecciones de noviembre de 2021, cuando el Senado quedó empatado, esa apuesta debía asumir sus debilidades. El punto es que, después del triunfo del Rechazo, la derecha tenía una base de legitimidad para relativizar el peso de esa presión. Esa lógica había perdido sentido, como se demostró en todas las negociaciones posteriores.

Sin embargo, en realidad esta derrota había comenzado mucho antes.

El diseño teórico del ministro Jackson de creer que las transformaciones del gobierno empezarían de verdad después de que se aprobara la nueva Constitución, también desperdició el *momentum* inicial que todo gobierno tiene para sus proyectos fundamentales. Después, cuando ya era evidente que el Apruebo iba camino a una derrota, el gobierno creyó que la presentación de la reforma tributaria podía ser un punto de inflexión en su favor, que la sola presentación iba a configurar una nueva polarización entre una derecha que resistía la reforma y una amplia mayoría social que la iba a respaldar.

Nada de eso pasó. La reforma no movió las encuestas y el debate inicial no fue un clivaje relevante de esos días o, dicho en términos clásicos de la izquierda, no se transformó en una de las contradicciones principales del momento. Fue otra ilusión.

Hasta ahora, no ha habido una reflexión de la izquierda sobre el porqué de esa irrelevancia. O, dicho de otro modo, por qué esta vez la reforma tributaria no creaba a su alrededor las condiciones que impedirían a la derecha oponerse a ella.

Es una variante de la pérdida de hegemonía que es imprescindible entender y precisar, en términos económicos, sociales y culturales. En sentido estricto, la reforma tributaria es parte de la crisis de legitimidad del período.

En una aproximación más larga, la dictadura introdujo reformas tributarias estructurales. El sistema previo a 1973, que la Unidad Popular no se propuso modificar, porque concentró su política en rescatar para el Estado los excedentes de los sectores estratégicos y las grandes

empresas, estaba orientado al desarrollo industrial, con componentes corporativistas, a través de incentivos sectoriales, regímenes tributarios diferenciados y altos aranceles proteccionistas, a lo que se sumaban impuestos a la renta y al patrimonio, que buscaban un efecto redistributivo, mientras que los impuestos indirectos eran un sistema fragmentado y distinto respecto de bienes de consumo. En la reforma de 1975 eso cambia radicalmente: el IVA pasa a ser el principal impuesto del sistema, se reducen los impuestos directos a las empresas y comienza una reducción paulatina de aranceles, hasta llegar al 10% en 1979. La reforma de 1984, a su vez, como reacción a la profunda crisis de 1981-82, establece nuevos beneficios al impuesto a la renta para incentivar el ahorro y la inversión: integra el impuesto personal y de las empresas, elimina la doble tributación y establece un incentivo para las utilidades reinvertidas. Era una reforma claramente orientada hacia la acumulación de capital.

La Concertación no modificó esa arquitectura base, sino que hizo sucesivos ajustes: el gobierno de Aylwin aumentó el impuesto corporativo de 10% a 15%, elevó la progresividad de los impuestos personales y aumentó el IVA, que en una medida populista la dictadura había bajado para la campaña del plebiscito de 1988, desde el 20% al 16%; el gobierno de Frei subió un punto el impuesto a las empresas, elevó algunos impuestos específicos e introdujo medidas anti evasión y anti elusión; el gobierno de Lagos hizo reformas en la misma línea, aumentó el impuesto corporativo, subió impuestos en la Ley de Rentas para fortalecer el Fondo Común Municipal, aumentó el IVA, fortaleció las medidas fiscalizadoras del SII y, tras fracasar el proyecto de royalty a la minería, estableció el impuesto específico a la gran minería. Finalmente, sobre la base de los positivos resultados

fiscales del super ciclo del cobre y a pesar de impulsar una sustantiva reforma previsional, el gobierno de Bachelet I no hizo una reforma tributaria.

¿Por qué importa esta apretada síntesis?

El diseño tributario de esos años de la Concertación siguió un patrón liberal-progresista, que se estructuraba en torno a un activo pacto procrecimiento, a la estabilidad y gradualidad de las políticas macroeconómicas y a una expansión también gradual, pero sostenida, de un Estado Social. No llegó a ser un Estado de Bienestar socialdemócrata, pero sí un Estado que expandía los derechos sociales. Siguiendo las distinciones de Marx en el *Brumario* y de Gramsci en sus *Cuadernos*, esa política no fue una alianza homogénea, pero sí relativamente estable que potenció a los grandes grupos económicos exportadores, de la minería, el sector forestal y la agroindustria, como también de la banca y el retail; de las clases medias profesionales y técnicas, por la estabilidad de las políticas y las reformas; y de los sectores populares, por el aumento en el empleo y sus ingresos y por el impacto de la inversión social y las políticas sociales. Los “intelectuales orgánicos” de este bloque fue la tecnocracia económica de los ministerios, el Banco Central, las instituciones reguladoras, las universidades y los centros de estudios.

Vale decir, durante más de dos décadas, el régimen político y económico chileno descansó en un equilibrio relativamente estable entre crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y expansión gradual del gasto social. Pero ese consenso, que tenía fisuras de fines de los 90, expresada en la creciente abstención y descenso electoral de la Concertación, se resquebrajó en la década del 2010. La desaceleración del crecimiento posterior a la

crisis global de 2008, el aumento de las expectativas sociales y la persistencia de desigualdades estructurales erosionaron gradualmente la legitimidad de este pacto. Sin un alto crecimiento, ya no era capaz de sostener su legitimidad social ni absorber las crecientes expectativas de movilidad social, sobre todo de las clases medias emergentes y de las nuevas elites que fueron formando. Por eso, siguiendo las tesis de las crisis cíclicas de Peter Turchin, el modelo estalla primero por las movilizaciones estudiantiles y se extiende a otros sectores.

Piñera fue la expectativa de recuperar las esperanzas en el modelo desde su promesa del crecimiento económico. Bachelet II fue la expectativa de resolver las fallas del modelo desde un sistema de protección social.

Es decir, en este cuadro general, la reforma tributaria de 2014 fue el intento de superar esa crisis de legitimidad. Desde esa perspectiva, fue una ruptura con el consenso 1990-2010: elevó el impuesto a las empresas, desintegró el sistema y modificó las normas de reinversión de utilidades. Sin embargo, la reforma también afectó indirectamente a otras fracciones económicas, como los sectores medios ligados a las pequeñas y medianas empresas, muy dependientes de los ciclos de inversión, y los profesionales y emprendedores, que percibieron mayor complejidad e incertidumbre tributaria. A su vez, por el bajo crecimiento estructural y la fuga de capitales que la reforma estimuló, la reforma recaudó menos de lo esperado. Su resultado social y político es que los sectores populares no vieron sus beneficios, sintieron su efecto en el empleo y los salarios, esto es, no tuvieron un mejoramiento sustantivo de su vida cotidiana.

Esto está en la base del estallido social del 2019, con un agravante que incide en la derrota de la reforma tributaria del gobierno de Boric: la resistencia inicial de Piñera a acuerdos económico-sociales post estallido, el desplazamiento de sus soluciones a la nueva Constitución, la crisis económica y social de la pandemia y el fracaso de los consensos políticos para su manejo y, después, para el acuerdo constitucional, instalaron un juicio ciudadano muy duro respecto a que después del estallido estaban peor que antes, que su vida era más difícil.

En este contexto, entonces, la reforma tributaria de 2022 cayó en un suelo infértil de expectativas y, tras el fracaso de la Convención, no tenía capacidad de construir un imaginario de soluciones a su alrededor. Su fracaso en marzo de 2023 era sobre la base de hechos consumados: las reformas tributarias eran parte de la crisis; y lo siguen siendo.

Su debate será cada vez más respecto de qué sectores se benefician o potencian con ellas, que prioridades de desarrollo establece, que equilibrio social es capaz de sostener y qué expectativas sociales va a cubrir o va a dejar insatisfechas, abriendo posibilidades de crisis. Asimismo, la izquierda no puede eludir -a propósito, como veremos, de otras reformas- que el desplazamiento de esas expectativas es cómo los beneficios sociales tienen una comprensión más individualista que colectiva. Algunas políticas que ha impulsado la izquierda han horadado su carácter solidario, debilitando el fundamento de las reformas tributarias que impulsa.

Vale decir, no podemos eludir que la reforma tributaria perdió fuerza en la sociedad y, solo sobre esa base, perdió fuerza en el Congreso.

Cuarto, la caída de la reforma tributaria también derivó en la parálisis de la reforma previsional.

Si la reforma tributaria marcó los límites externos que enfrentaba el gobierno -la mayoría de la oposición en el Congreso y la resistencia que se incubió- la parálisis de la reforma previsional expuso su límite interno: la contradicción entre el programa y las condiciones que la izquierda había creado.

Boric llegó al gobierno con la promesa de eliminar las AFP. Era una de las demandas más sentidas del ciclo de movilizaciones que lo había llevado al poder. Pero era también, paradójicamente, la reforma que la propia izquierda había erosionado.

Los retiros de los fondos de las AFP también juegan aquí un rol decisivo, porque no fueron una ruptura con la lógica neoliberal de la seguridad social. Al contrario, fueron su confirmación más eficaz. La demanda se articuló desde la propiedad individual, no desde el principio de solidaridad colectiva que debería sustentar un sistema previsional alternativo. Y, más importante aún, los retiros se transformaron en una práctica social valorada por la ciudadanía. El modelo forjó ahí, como nunca antes, su propia legitimidad. En un sentido marxista clásico, formó un tipo de conciencia asentada en el valor individualista. Ningún discurso posterior podía revertir lo que una práctica social exitosa había instalado.

El resultado fue una trampa estructural: el gobierno intentaba dismantelar las AFP después de que sus partidos habían ayudado a consolidar la conciencia de la propiedad individual de los fondos. La propuesta de reforma se encontró con que una parte significativa de la ciudadanía

que había apoyado el estallido no estaba dispuesta a ceder lo que había ganado con los retiros, a cambio de una promesa de solidaridad futura que el Estado no tenía credibilidad para garantizar.

El cronograma de la tramitación lo ilustra con crudeza. El debate fue lento y farragoso. La visión del Ejecutivo era que esperaría mejores condiciones económicas para abordar su votación y asegurar una mayoría que evitara el riesgo de lo ocurrido con la reforma tributaria. Hacia fines de 2023, la conclusión que comenzaba a imponerse era tan severa como inevitable: la reforma previsional podía ser la única reforma estructural del gobierno de Boric, pero iba a ser una “reforma mínima”, esto es, que no cumpliría la promesa de eliminar las AFP y, en lo más sustantivo, que el sistema de pensiones seguiría alimentando el mercado de capitales.

En el lenguaje de *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, lo que se anunció como la transformación central del modelo se había convertido en su gestión administrada. La farsa también reemplazaba aquí a la tragedia.

Quinto, a medida que las reformas tributaria y previsional perdían impulso y el resultado de las elecciones del Consejo Constitucional de mayo de 2023 desplazaban la hegemonía en la derecha desde Chile Vamos hacia Republicanos, cada reforma que planteaba el gobierno debió someterse a concesiones sustantivas.

Es lo que ocurrió con el royalty a la minería, que bajó su aspiración de recaudación desde el 0,8% al 0,45% del PIB, la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas a cambio de normas de flexibilidad laboral largamente solicitadas por la derecha, la reforma a las

Isapres que terminó siendo pagada por los propios afiliados.

Un caso más estructural de estas contradicciones, y de los retrocesos que debió ejecutar el gobierno de Boric, es el que se produjo entre el ambientalismo radical y los trabajadores de algunos sectores productivos. El caso más paradigmático es el que se produjo con la industria salmonera en las regiones del sur.

Boric y el ministro Nicolás Grau habían declarado desde el inicio del gobierno que la industria del salmón debía salir de las áreas protegidas. Era una promesa que respondía a un riesgo ambiental real, porque muchas concesiones salmoneras operan dentro o en las zonas colindantes de áreas protegidas, con impactos en su biodiversidad. El problema es que, al mismo tiempo, la industria salmonera emplea directa e indirectamente a miles de personas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con ingresos que representan la principal fuente de sustentación de sus familias y de otras actividades en esas mismas zonas. Cuando en mayo de 2023 se discutió en el Congreso una norma que restringía las operaciones en áreas protegidas, los trabajadores del salmón -los operarios, los buzos, los técnicos- y el clúster de servicios y proveedores del sector, se movilizaron masivamente desde el Biobío hasta Magallanes en defensa de sus fuentes laborales. No eran trabajadores capturados ideológicamente por la empresa, eran trabajadores que evaluaban el impacto de la norma sobre su sustento cotidiano.

El gobierno quedó atrapado entre su promesa ambiental -que respondía a su base electoral urbana e ilustrada- y la realidad de los trabajadores de las regiones. El resultado fue la parálisis: el gobierno terminó sin cumplir la promesa

ambiental -los salmoneros siguen en las áreas protegidas- ni resolver las tensiones medioambientales de esas zonas. La posibilidad de resolver aquí los dilemas propios de un “bloque histórico” gramsciano se desvaneció.

En todos estos casos, el problema de estos retrocesos no era la falta de voluntad política, como tantas veces el FA acusó a la Concertación, sino la consecuencia de gobernar una crisis orgánica sin hacerse cargo de las contradicciones reales que existen en la sociedad. Un gobierno con bloque histórico puede hacer concesiones tácticas, porque tiene la fuerza social y cultural para sostener el sentido de sus reformas, más allá de los avatares parlamentarios. Un gobierno sin bloque histórico fracasa o debe hacer concesiones estructurales, ya no solo tácticas, porque cada derrota lo debilita más y lo acerca más al terreno del adversario.

El *interregno* tiene su propia dinámica, y una de las más crueles es que los gobiernos tienen menos margen de maniobra de lo que sus programas suponen. Viven más en el manejo de crisis que en el despliegue de sus proyectos, padecen de mayor confusión estratégica y los grandes relatos tienden rápidamente a generar desilusión, porque se desvanecen ante la complejidad de lo real.

Gramsci llamó transformismo al proceso por el cual las clases dominantes absorben y neutralizan los desafíos de los sectores subalternos. No opera solo como la derrota de las propuestas transformadoras, sino mediante su absorción y neutralización. El lenguaje del cambio es adoptado por el sistema, sus formulaciones se vuelven negociables, sus contenidos se procesan hasta quedar irreconocibles, y al final el programa que llegó al gobierno como promesa de transformación sale del proceso

legislativo como confirmación del *statu quo* con nueva retórica.

No se trató de una traición subjetiva, sino de una lógica objetiva: el “profeta desarmado” de Maquiavelo no puede sostener sus propuestas por la sola fuerza del discurso cuando las condiciones estructurales le son adversas.

Sexto, en este contexto general, ya hacia fines de 2023, el Consejo Constitucional se transformó en la farsa de lo que ya era farsa

La Convención Constitucional de 2021-2022 fue la tragedia, un proceso que tuvo a su disposición las condiciones objetivas para producir una nueva Constitución legítima y amplia. Las dilapidó en una combinación de soberbia simbólica, esencialismo identitario y ceguera estratégica. El Consejo Constitucional de 2023 fue la farsa, un proceso que ni siquiera llegó a tener a su disposición esas condiciones, porque el momento constituyente ya estaba agotado antes de que comenzara y porque el liderazgo de los Republicanos pensó que podía ejercer una restauración conservadora.

La distinción es decisiva.

Una cosa es que en las encuestas la gente mayoritariamente dijera estar de acuerdo con una nueva Constitución; otra, muy distinta, es que esa preferencia constituyera en sí misma un momento constituyente, esto es, que en el imaginario de la sociedad la Constitución condensara u ordenara las esperanzas de un conjunto de cambios. El plebiscito de septiembre de 2022 no fue la derrota de un texto defectuoso que podía corregirse en un segundo

intento. Fue la certificación de que el momento constituyente se había agotado desde adentro.

El Consejo Constitucional inició su trabajo en un clima de crispación que nunca logró superar. Los resultados del 7 de mayo de 2023 habían elevado la influencia del Partido Republicano y condicionado la búsqueda de acuerdos de Chile Vamos: la derecha que llegó al Consejo no estaba dispuesta a construir una Constitución de acuerdo, sino a imponer una Constitución de mayoría. Las tendencias de las encuestas anticipaban el fracaso antes de que el proceso terminara. Y el texto que finalmente emergió fue, con razón, percibido por la mayoría de la ciudadanía como un retroceso, no como un avance.

La derrota del 17 de diciembre de 2023 cerró el llamado “momento constituyente”, pero sin resolver la crisis de legitimidad. Es más sorda, por el agotamiento y la desilusión que se produjo, pero sigue latente. El país volvió a la Constitución de 1980 no porque hubiera recuperado legitimidad, sino porque las fuerzas que querían reemplazarla no habían logrado, en dos intentos, construir la mayoría social necesaria para hacerlo.

Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de Boric vivió la ilusión de una derrota táctica reversible mientras administraba, sin nombrarlo, el fracaso de un ciclo histórico. No fue una experiencia singular: los gobiernos que llegan al poder en períodos de crisis orgánica tienden a subestimar la profundidad del problema que intentan resolver, porque las condiciones que los llevaron al poder -en este caso, la energía del malestar, la demanda de cambio, la apertura de una ventana de

oportunidad- parecen más perdurables de lo que en realidad son.

Boric pasó a representar lo que podríamos llamar un “cesarismo débil”, una variante de lo que Marx y Gramsci describieron. Marx trata al bonapartismo como el resultado del vacío de poder que la crisis revolucionaria no logra resolver, mientras que Gramsci lo amplía para describir que en esos momentos de equilibrio tan precario, cuando ninguna fuerza puede imponerse sobre la otra, surge una figura que se levanta como árbitro por encima de los partidos. Pero, en su caso, no era solo para encarnar la regresión, sino que podía haber un “cesarismo regresivo”, como lo había sido Luis Bonaparte y lo era Mussolini, o un “cesarismo progresivo”, el propio César y Napoleón. Sin embargo, aquí Boric quiso pero no pudo eruirse como un arbitrador. El “cesarismo débil” es el de quienes ocupan esa posición sin tener la fuerza suficiente para ejercerla: arbitran sin capacidad de resolución, concentran expectativas sin poder satisfacerlas, y en vez de ser un agente del cambio devienen en un símbolo desgastado.

Ese cesarismo débil, los monstruos de la inseguridad y la inmigración, la derrota tributaria, la parálisis previsional, las concesiones estructurales y el fracaso constitucional no son seis fenómenos independientes. Son manifestaciones de un mismo problema: el *interregno* persiste porque ninguna de las fuerzas en pugna tiene la capacidad de cerrarlo. El viejo orden neoliberal no puede restaurarse en su forma original, porque su hegemonía fue socavada en octubre de 2019, pero el nuevo orden que el estallido anunció no tiene todavía un bloque histórico, un proyecto hegemónico ni los intelectuales orgánicos capaces de construirlo.

En ese vacío, la política pierde potencia; el poder pierde poder. Es la percepción de que la política, tal como existe, es insuficiente para los problemas que enfrenta.

Aunque ahora Kast y los Republicanos no estén emocionalmente preparados para verlo, ese significado de su derrota de diciembre de 2023 es probablemente el mayor adversario del gobierno que inicia.

Fase enero 2024 a diciembre 2025

La derrota del A Favor en diciembre de 2023 se consideró el equilibrio de la derrota del plebiscito de 2022 y que, en ese sentido, los malos resultados del oficialismo en las elecciones del Consejo Constitucional de mayo de 2023 eran coyunturales. De nuevo, se evitó el análisis de la debilidad estratégica del gobierno de Boric y el giro que ello exigía. Eso no podía dejar de traer consecuencias.

Las derrotas se procesan o se suprimen. Lo primero produce autocrítica, reorientación, renovación del proyecto. La segunda produce melancolía: ese estado emocional que Freud describía como el duelo que no se hace, la pérdida que no se asume, la libido que sigue atada a un objeto que ya no existe. El período que va de enero de 2024 a diciembre de 2025 es, más profundamente, la historia de una melancolía colectiva: la del gobierno, la de la coalición, la de la izquierda en su conjunto, incapaces de asumir la pérdida y, por tanto, incapaces de reorientarse hacia lo que el momento exigía.

El empate entre los dos plebiscitos derrotados se transformó en la coartada perfecta para no hacer el diagnóstico que la realidad demandaba y, más aún, convirtió ese error de diagnóstico en política de gobierno:

no hubo giro estratégico, no hubo autocrítica sustantiva, no hubo recomposición del proyecto.

El gobierno continuó su marcha en la misma dirección y en el mismo carril, mientras el terreno bajo sus pies se desplazaba en sentido contrario. La agonía que define el período no es la de una derrota que llega de golpe; es la de una pérdida ya consumada que se prolonga en el tiempo porque nadie quiere nombrarla.

El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte comienza con una observación sobre la memoria histórica de las clases revolucionarias: cómo invocan el pasado para darse coraje en los momentos críticos, cómo se disfrazan con las ropas de los héroes de otras épocas para escenificar las batallas del presente. Lo que Marx criticaba no era la memoria en sí, sino el uso de la memoria como sustituto del análisis. Las clases que no quieren ver lo que está pasando se refugian en lo que ya pasó.

El gobierno de Boric cayó en ese error, casi literalmente, palabra por palabra.

La derrota del plebiscito de 2022 -el verdadero *Termidor* del ciclo- había sido procesada como un retroceso táctico, no como la clausura de un ciclo histórico. La derrota del Consejo Constitucional en 2023 fue leída, simétricamente, como la confirmación de que el partido estaba empatado. En ese relato, la segunda derrota neutralizaba la primera; el proceso podía continuar, las reformas podían avanzar, el gobierno podía llegar a su término con un balance razonablemente positivo. Era la melancolía transformada en política, la incapacidad de asumir la pérdida disfrazada de apuesta estratégica.

Los datos eran inequívocos para quien quisiera leerlos. La izquierda tenía un retroceso sistemático en los sectores populares; no resolvía sus dificultades entre los votantes despolitizados; los sectores medios resentían la inseguridad económica, social y delictual; y Boric no rompía el 30%, que a veces bajaba al 24% o subía momentáneamente al 35%. Nada permitía pensar que esa tendencia fuera a modificarse para las elecciones municipales y regionales y luego para las presidenciales y parlamentarias. El gobierno no tenía un instrumento ni un diagnóstico para revertir esa tendencia.

La ilusión del empate tuvo otra consecuencia, quizás más grave: bloqueó la pregunta sobre el giro que la situación exigía. Si la derrota constitucional era táctica, la respuesta correcta era táctica: ajustar el mensaje, mejorar la comunicación, esperar que la correlación mejorara. Si la derrota era estratégica, la respuesta debía ser estratégica: revisar el proyecto, recomponer el bloque social, preguntarse qué tipo de izquierda era posible y necesaria en el Chile que había emergido del ciclo.

El oficialismo eligió la primera respuesta para un problema que exigía la segunda.

¿Qué efectos más estructurales produjo este enfoque?

Primero, la agenda estructural se volvió simbólica.

El gobierno perdió la capacidad de transformar, pero conservó la capacidad de comunicar. No es un fenómeno inusual: los gobiernos que agotan su fuerza transformadora antes de terminar su mandato suelen llenar el espacio vacío con gestualidad. Decretan cosas que no pueden financiar, anuncian reformas que no tienen mayoría parlamentaria

para aprobar, inauguran obras cuya continuidad no pueden garantizar. Es la política como teatro: se representa el rol de gobierno reformista mientras el sistema opera sin grandes modificaciones. El lenguaje programático, al perder su poder de acción, se convierte en su propia parodia.

El relato de que estamos mejor, o que el país se normalizó, resulta un buenismo voluntarista, entre ingenuo y básico. El problema de esa narrativa no es solo comunicacional, sino que describe una patología del período. No era que el gobierno estuviera comunicando mal sus logros reales, era que los logros comunicados no correspondían a la experiencia concreta de la mayoría de la ciudadanía. El escepticismo que dominaba el estado de ánimo colectivo no era irracionalidad ni manipulación opositora, era la respuesta sensata de quienes juzgaban la política desde su experiencia, no desde los mensajes de un gobierno.

La reforma previsional -el único proyecto estructural que sobrevivía al naufragio de la agenda transformadora-completó en este período su metamorfosis. Su contenido final no guardaba relación con el mandato original. El transformismo gramsciano había operado hasta el final: la derecha no derrotó la reforma por la fuerza, la reformó hasta hacerla irreconocible. Y el gobierno, que ya no tenía fuerza política para resistir otro fracaso, lo presentó como un logro.

El PC y el FA asumieron con entusiasmo el lenguaje de la vieja Concertación que antes tanto criticaban. Celebraron como un triunfo una reforma al sistema que al fin de cuentas lo validaba. La contradicción estructural del progresismo desde los años 90, aquella entre gestión técnicamente eficaz del sistema y la transformación del

mismo, se resolvía de nuevo en favor de la gestión. El gobierno de Boric había llegado con la promesa de resolverla en favor de la transformación y el resultado fue que no logró ni una cosa ni la otra con suficiente eficacia: fue demasiado transformador para los que pedían estabilidad y demasiado gestor para los que pedían cambio. El espacio entre esos dos mandatos, vacío de proyecto propio, fue el espacio donde se instaló la lenta agonía.

Segundo, la economía se instaló como otro “monstruo” del interregno.

El estancamiento que caracterizó los años 2023 y 2024 no fue solo la consecuencia de la inflación heredada, de las tensiones geopolíticas globales, del enfriamiento de la inversión o del deterioro del clima de negocios, fue también el resultado de gobernar sin un proyecto de desarrollo propio: sin una visión de en qué tipo de economía quería convertirse Chile y qué papel debía jugar el Estado en ese proceso.

A pesar de sus grandes promesas, en este caso más del FA que del PC, la tecnocracia progresista seguía siendo incapaz de disputar el proyecto de transformación productiva del país; y tampoco ser eficaz en la gestión del desarrollo y sus conflictos.

Las restricciones fiscales que el gobierno enfrentó durante este período eran el reflejo de una contradicción más profunda: la izquierda había llegado al poder con un programa de expansión del Estado de Bienestar que requería una reforma tributaria que no había podido aprobar. Sin esa reforma, el financiamiento del programa dependía de condiciones macroeconómicas favorables que el ciclo no acompañó. La reactivación nunca tomó cuerpo

y solidez, incluso a pesar de algunos mejores indicadores externos. Y cuando la recuperación comenzó a insinuarse, el gobierno ya no tenía el capital político para convertirla en argumento electoral.

El malestar de la ciudadanía se fundaba en esa incapacidad del Estado para abordar los problemas concretos de la vida cotidiana: el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral, el acceso a la vivienda, la calidad de la salud pública. Instrumentos clásicos se habían vuelto impotentes en la conducción económica; muchas políticas sociales sufrían una esclerosis que afectaba la resolución de los problemas o contribuía a la frustración. La reducción de los costos de la vida no provenía de las políticas públicas; al contrario, muchas veces las encarecían. Esa brecha entre la promesa pública y la experiencia privada era el caldo de cultivo del escepticismo que se consolidaría como estado de ánimo dominante hacia el final del período.

Tercero, las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 confirmaron la condición de minoría del gobierno. Aunque tenía a su haber triunfos en comunas y regiones simbólicas, la suma de sus fuerzas dispersas llegó solo al 41%.

Si en mayo de 2023 la derrota del oficialismo podía atribuirse al clima del proceso constitucional y al desgaste del primer año de gobierno, en octubre de 2024 ese argumento ya no era razonable: el proceso constitucional había terminado, el gobierno llevaba casi tres años de mandato y los resultados reproducían la misma tendencia con una consistencia que solo podía leerse como estructural.

El mapa territorial de la derrota era elocuente. La izquierda perdía terreno en sus propios bastiones: en las comunas populares del Gran Santiago, en las regiones mineras del norte, en los municipios donde la Concertación había construido su hegemonía durante décadas. El voto popular, que había sido la base social de la izquierda desde la inclusión masiva del padrón en los años 50 y 60, continuaba su desplazamiento hacia otras opciones. No era un fenómeno de coyuntura: era la acumulación de un proceso de largo plazo que el ciclo del estallido había interrumpido temporalmente, pero no revertido.

Desde el punto de vista gramsciano, la pérdida del voto popular es el reverso exacto de la construcción del bloque histórico. Si la hegemonía se edifica articulando los intereses de distintos grupos sociales bajo la dirección de una fuerza política, su derrumbe ocurre cuando esos grupos abandonan esa articulación. Los sectores sociales que abandonaban al oficialismo no lo hacían por razones ideológicas abstractas, lo hacían porque no percibían que el gobierno estuviera resolviendo los problemas concretos de sus vidas.

El reemplazo del universalismo histórico de la izquierda por políticas identitarias no había logrado construir mayorías; por el contrario, había alimentado la exclusión de quienes no se reconocían en esos marcos. Segmentos enteros de las nuevas generaciones se habían alejado de la izquierda y el progresismo, sobre todo en los sectores populares y de clase media, por su precarización laboral, la dificultad de acceder a una casa propia y el endeudamiento educativo. Tenían frustración o bajas expectativas de las políticas públicas.

En ese contexto, las elecciones primarias de la izquierda - que parten en marzo de 2025- fue presentada como un éxito de la unidad. No incluía a la DC, pero había una expectativa de que podía sumarse a quién ganara, sobre todo si era Carolina Tohá. Después de la dispersión de los años anteriores, la coalición lograba acordar un mecanismo, pero ese logro táctico nuevamente ocultaba la ausencia de un proyecto compartido, de una estrategia de campaña con bases programáticas claras, de una comprensión común de por qué se había perdido y qué debía cambiar. En términos maquiavélicos, era un acuerdo sobre el Príncipe sin un acuerdo sobre las armas: se elegía al conductor sin armar la fuerza que debía conducir.

Los signos de esa debilidad eran visibles desde antes de que comenzara la campaña. Había un alto número de indecisos, mucha volatilidad en la intención de voto y luego una baja participación ciudadana en las primarias. Esos tres indicadores, tomados en conjunto, describían un electorado que no visualizaba una alternativa de futuro. En rigor, las primarias pasaron a ser la disputa por la herencia de un ciclo que había terminado.

Las figuras de la primaria ilustraban, cada una a su modo, esa melancolía freudiana del período. Tohá quiso ser una síntesis o al menos un puente entre la Concertación y Apruebo Dignidad, y las primarias marcaron la derrota de ese intento: su campaña no logró recuperar la votación de la centroizquierda y, en la etapa final, se desfundó en el votante de izquierda. La amplia victoria de Jara apeló a sus rasgos de personalidad y estilo, esto es, a ser una nueva Bachelet... y le fue bien, aunque todavía sin alcanzar su transversalidad. Esa formulación -una candidata que aspira a reproducir el fenómeno sin tener las condiciones que lo

hicieron posible- resume con precisión el problema del período entero: se buscaba el resultado sin el contexto, el triunfo sin el bloque histórico que lo había sustentado.

El resultado de las elecciones primarias produjo una candidatura que era, al mismo tiempo, una alternativa legitimada en el ejercicio del gobierno y la demostración más clara de sus límites. El 26,85% de Jeannette Jara en la primera vuelta es ostensiblemente bajo para el arco de fuerzas de izquierda y centroizquierda que la apoyó. Luego, que ella lograra en la segunda vuelta el 41,84%, evitando el peor escenario, fue más un alivio que un triunfo simbólico. Obviamente, a pesar del anticomunismo que pesaba sobre ella, de las debilidades del gobierno de Boric y de que en las últimas elecciones el oficialismo rondaba entre el 38% y el 41%, ese casi 42% tenía mérito. Pero esa resistencia digna no es la base de una recuperación, es el techo de una candidatura sin bloque histórico. Además, parte importante del voto que le permitió llegar a ese resultado no era orgánico ni ideológico, era el voto Parisi que se desplazó hacia ella en la segunda vuelta. Un electorado oscilante, crítico y sujeto a las coyunturas.

Cuarto, el fenómeno más relevante en la izquierda es su fragmentación, el retrato de su confusión estratégica.

Los resultados parlamentarios de la izquierda en noviembre de 2025 constituyen una suerte de epitafio de todo este período: el FA es el principal partido con apenas el 7,5%, le siguen el PS con el 5,4%, el PC con el 5,01%, el PPD con el 4%, los Liberales con el 2,21% y el PR con otro 2,1%, mientras que en otra lista y con más candidatas la Acción Humanista obtuvo 2,53 y, finalmente, varias otras fuerzas de izquierda más autónomas o radicalizadas - ecologistas, humanistas y grupos como Igualdad o el

partido de Artés- sumaban en conjunto otro 7,55%. La suma de esa atomización llega a un 33,9% para toda la izquierda, con una dispersión solo comparable a la que hubo en los años 40 y 50 y en los años 70 y 80, bajo la dictadura.

Esa comparación histórica debe ser tomada en serio.

A fines de los 40, la izquierda se fragmentó por las disputas y divisiones que la cruzaban, mientras el Partido Radical mantenía la hegemonía. Eso permitió que después el gobierno de González Videla desatara la persecución contra el PC, porque no había capacidad de contención desde la izquierda. En los años 70 y 80, la fragmentación era el resultado de la derrota histórica de la Unidad Popular y la brutal represión de la dictadura. En 2025, la fragmentación es el resultado de la confusión estratégica: de haber llegado al poder sin bloque histórico, de haber gobernado sin proyecto transformador eficaz, de haber perdido sucesivas elecciones sin hacer el duelo de cada derrota ni extraer las lecciones de cada fracaso.

Estos resultados parlamentarios constituyen una derrota electoral que son la expresión de una crisis más profunda: es orgánica, es de proyecto y es teórica.

Una incomprensión del poder

La derrota de la Convención Constitucional y los sucesivos retrocesos del gobierno de Boric respecto de sus reformas estructurales son, como hemos descrito en distintos pasajes anteriores, efectos de una pérdida de poder. Pero ¿en qué sentido lo son? o ¿por qué aluden a la cuestión del poder o por qué tratarlas como tal?

La naturaleza de lo que llamamos “poder” es siempre algo muy ambiguo o una síntesis singular de muchas variables, algunas de las cuales suelen ser frágiles y cambiantes. El poder es un intangible, no una cosa, aunque desde la antigüedad hasta hoy se lo trata de identificar con algo físico. Todas las mitologías lo representaron a través de una fuente que se puede tener u obtener, y hasta hoy se tiende a pensar que algo o un factor determinado es una fuente de poder en sí misma: un capital, una posición social, una mayoría determinada. Hay una singular resistencia a asumir su intangibilidad. Pero, al mismo tiempo, el poder existe. No es un ente, pero es. Que sea un intangible no elimina su existencia. Y, a su vez, “la gracia” del poder es que representa una posibilidad de futuro.

Sobre esa base, para los efectos de la apreciación sobre qué factores o variables condicionan los cambios de poder, qué incide en su movilidad, por qué se requiere siempre una revisión concreta de las correlaciones de fuerza, sirve tener distinciones abiertas y flexibles respecto de las principales fuentes de poder y cómo se relacionan entre ellas. Solo para los efectos de caracterizar esas variables, podemos distinguir entre las fuentes fácticas, simbólicas y de liderazgo del poder.

El poder fáctico, que remite a “lo que es”, es decir, a factores tangibles o medibles de poder (PIB, población, capital, reservas *versus* deudas, votación o respaldo popular, composición parlamentaria, peso específico de medios de comunicación o de figuras en las redes sociales, tamaño de universidades, redes de centros de estudios, y otros), que es lo que ya está presente, definiendo posibilidades, a veces como oportunidades o a veces como amenazas. Todas son variables reales, pero también interpretables, esto es, la facticidad no es una mera recolección de hechos, sino también un juicio de esas oportunidades y amenazas, una apreciación de su potencial, de cómo el poder que representan constituye, condiciona o transforma la realidad. Vale decir, ningún poder fáctico es absoluto ni es solo en sí mismo. Está sujeto a otros poderes fácticos, a sus condiciones de legitimidad y a cómo el liderazgo lo articula, lo fortalece, lo conserva o lo desvanece. Tampoco es solo en sí mismo, en el sentido que -como en las leyes de la física- tiene espacio y energía, centros de gravedad que atraen y repulsan, tiene inercias o se mueve bajo las reglas de la termodinámica; en ningún caso es estático.

El poder simbólico o la legitimidad, es el que se mueve en torno los valores dominantes, al clima intelectual o emocional de una época (lo que Hegel llamó “el espíritu de los tiempos” y Herder el “espíritu del pueblo”, como fuente de la tradición), la fortaleza de las identidades y estilos o aquello que influye en el estado de ánimo de la opinión pública o de segmentos específicos de la ciudadanía. El poder simbólico es una fuente de poder en sí mismo porque, aun siendo un intangible, puede socavar o neutralizar las fuentes fácticas de un poder, porque la legitimidad o fortaleza moral de un líder, grupo, sector, país o bloque, puede limitar sus capacidades o su potencial. La legitimidad, asimismo es un espacio de contención de

los liderazgos, respecto de sus campos de acción o sus márgenes de maniobra, de lo que pueden o no pueden hacer, al punto que su pérdida de legitimidad puede ser la pérdida total de sus bases de poder. Y, viceversa, la legitimidad y su potencial de reconocimiento o valoración normalmente se transforma en un poder fáctico, adquiere realidad a partir de su capacidad de reproducción.

El poder del liderazgo, a su vez, es ese conjunto de virtudes, habilidades, sensibilidades y cualidades que tienen personas o instituciones, o también culturas o países, que Maquiavelo las sintetizaba en la noción de la *virtù*, por su capacidad para articular fuerzas, modificar las circunstancias, reinterpretar el sentido común dominante o representar en sí mismos un cambio de poder. Es el rol fundamental otorgado a la acción en las tragedias clásicas. No reemplaza las fuentes fácticas o simbólicas, pero sí las articula, las encausa o las modifica. Isaiah Berlin ubicaba aquí la variable que mejor contrarrestaba la fatalidad o el determinismo histórico, y la noción misma de la historia y lo humano como una ciencia sujeta a leyes que permitirían predecir los acontecimientos. Su aproximación al “juicio político” de los líderes es que era aquello que les permitía integrar múltiples factores cambiantes, captar relaciones invisibles, anticipar reacciones humanas, comprender las condiciones del ambiente que los rodea, de un modo que tiende a ser sintético, cualitativo y concreto, más cercano a la sabiduría que al conocimiento, al arte que a la técnica.

Sobre la base de estas distinciones, luego, hay varios episodios y definiciones cuyas dificultades y errores se concentran básicamente en una incompreensión del poder en esta mezcla de distinciones.

Veamos por qué.

La crisis de Temuicui

La decisión de la ministra Izkia Siches de ir a Temuicui condensa singularmente esta falla, con al menos tres efectos que se transformaron en irreversibles. Ella creyó que la legitimidad que tenía su origen aymara y su calidad de representante de un gobierno que levantaba las causas indígenas eran suficientes frente a los loncos que reivindicaban su liderazgo en un “territorio liberado”. No calibró que esa autonomía mapuche se funda en una crítica al Estado y no a un gobierno, que la premisa nacionalista de los grupos más radicalizados había evolucionado hacia un Estado separado de Chile y, sobre todo, que detrás de esa autonomía territorial se ha construido un tipo de poder feudal, con sus propias fuentes de financiamiento, jerarquías de autoridad y liderazgo. Ella nunca pensó que eso significaba un desafío al poder de ese grupo y, en cambio, el lonco asumió o intuyó mejor que ella el efecto simbólico de reconocer autoridad al Estado de Chile en su territorio. La aproximación idealista falla no por sus intenciones, sino por su apreciación de la relación de poder en juego.

Lo que primero resultó irremediable, como describimos previamente, fue el daño a la idea de un Estado Plurinacional que estaba aprobando la Convención Constitucional en esos mismos días. Fue una pérdida de legitimidad, que se transformó fácticamente en una pérdida de respaldo al Apruebo. El segundo daño, también simbólico o de legitimidad, fue la pérdida de autoridad de la propia Izkia Siches, que nunca se recuperó. Seguía siendo una figura atractiva, conservaba su fuerza y empuje, mantenía relativamente intactas las redes de apoyo que la habían llevado a encabezar el gabinete, pero ese intangible

de autoridad socavó irremediablemente sus posibilidades de liderazgo en el gabinete y frente al sistema político.

El tercer daño irreparable, más invisible en ese minuto, pero decisivo, es que ahí murió la refundación de Carabineros. La imagen de que frente a los disparos de los comuneros de Temucoicui la ministra de Interior solo podía ser protegida por ellos y, simbólicamente, que frente a los riesgos de una sublevación que quisiera seguir atacándola, debía refugiarse en la Comisaría de Ercilla, sepultó la impronta que el gobierno quería imponer a su mando sobre la institución. Solo desde ahí pudo recomponer su tranquilidad, lo que le quedaba de autoridad, y salir a hablar con el país. Pasaron a ser sus protectores, como lo demostrarían después con el trato en sus viajes, la atención especial a su hija y los desplazamientos con su marido.

Ese hecho simbólico se transformó en un acto de poder de Carabineros. En gran medida, su sabiduría institucional radica en esa comprensión íntima y humana de su poder. Su vida cotidiana con las situaciones límite de las personas, su vínculo con múltiples expresiones de la naturaleza humana, de la ambigüedad entre el bien y el mal de las personas con las que debe tratar a diario, les otorga una mirada muy terrenal. Deben imponer la ley y el orden, pero en el mundo real, no en la abstracción de los libros.

Que al término de su gobierno Carabineros le otorgara la condecoración de “Alguacil Ilustre” al presidente Boric cierra el arco de lo que esa seña de poder representa.

El crimen organizado como fenómeno de poder

La izquierda chilena -en todas sus vertientes, desde la anarquista hasta la liberal progresista- tiene un serio déficit, acumulado por años, para transformarse en una fuerza creíble de que es capaz de combatir el crimen. A pesar de sus esfuerzos, el gobierno de Boric no logró revertir ese juicio en la sociedad. No era así antes y no ha sido así en otros países. De hecho, en los socialismos reales el orden era severamente impuesto. Es un déficit político chileno, no universal ni estrictamente ideológico.

Revisando los materiales de Gramsci aparece inevitablemente la delicada cuestión de la mafia, desde una perspectiva de la estructura de clases y de la propia formación del Estado moderno en Italia, que tiene variables interesantes para una revisión crítica de este déficit.

Una explicación previa.

En su escrito “Algunos temas de la cuestión meridional”, Gramsci plantea que la mafia no es una anomalía ni una patología social derivada del atraso del sur italiano. Para él, era una forma específica de cómo se organizaba la emergente burguesía en regiones donde todavía no había construido su hegemonía. El sur italiano, llamado *mezzogiorno* o mediodía, no solo era mucho más pobre que el norte industrial, sino que ahí la burguesía agraria no ejercía un control directo sobre el campesinado, sino que lo hacía a través de intermediarios. La mafia era parte de la estructura productiva, tenía poder económico y político, ejercían como mediadores y como fuerza de coerción. No era un Estado paralelo, pero cumplía un rol donde el Estado era débil o ausente.

Esto fue distinto en Chile, porque la Hacienda era un tipo de organización colonial en que el patrón tenía una relación directa, paternal o abusiva, pero directa, entre él y los campesinos. Los capataces eran parte de la estructura que ejercía esas funciones de intermediación, pero funcional o directiva, no como estructura autónoma.

Esta lectura tiene consecuencias teóricas y políticas. Para Gramsci, la mafia no es simplemente violencia privada. Es un tipo de violencia funcional al orden, pero que también opera como organización del consentimiento. Era parte de una estructura hegemónica. Y, precisamente, era más fuerte donde no existía una sociedad civil moderna fuerte y organizada, a través de sindicatos, cooperativas, organizaciones sociales y partidos políticos. En ausencia del Estado y de esa cultura civil propia de las fuerzas progresistas que nacían con la industrialización capitalista, el bloque dominante de las zonas atrasadas operaba a través del clientelismo, el corporativismo y la violencia. Llenaban el vacío del Estado con un orden, pero un orden que reproducía la subordinación. La mafia era, en este sentido, un tipo de sociedad civil que reemplazaba al tipo de sociedad civil moderna.

Esto también fue distinto en Chile, el desarrollo capitalista chileno no fue intermediado por organizaciones mafiosas, sino que fue constituido o derechamente construido desde el Estado. La Corona organizó la Hacienda y la República protegió o impulsó a sus sucesivas oligarquías. Desde Diego Portales hasta la CORFO, ya fuera vía su industrialización o su privatización posterior. El proyecto neoliberal de la dictadura, que ideológicamente proclamaba la reducción del Estado, fue en realidad una refundación estatal del capitalismo. Asimismo, durante la dictadura la violencia fue ejercida por el Estado, no fue

delegada a organizaciones intermedias con autonomía territorial.

En términos gramscianos, el bloque histórico chileno integró la coerción dentro del Estado, no la externalizó en formas parasitarias. La burguesía chilena no necesitó de una mafia porque tenía al Estado. Y cuando el Estado democrático pasó a representar a los sectores populares, usó a las Fuerzas Armadas para derrocarlo.

Esta diferencia ayuda a observar la naturaleza del poder que forja el fenómeno del crimen organizado en Chile.

No es productivo, no tiene vocación de élite hegemónica ni tiene un proyecto país, como lamentablemente ocurre en otros países. Sin embargo, no por ello es menos grave o estratégicamente complejo. Es un fenómeno más asociado a la debilidad o a la ausencia del Estado; y ha construido un tejido económico, social y cultural a causa de las debilidades del desarrollo neoliberal y la crisis de legitimidad política que existe.

Es otra expresión de la crisis orgánica y debemos tratarla como tal. Eso es lo que impide que sucesivos gobiernos, de izquierda y derecha, no sean capaces de enfrentarla. Su identificación como tal permite observar los límites de la política ejecutada por el gobierno de Boric y las fragilidades de la que va a desplegar el gobierno de Kast.

Es imprescindible distinguir rasgos y, precisamente, sus fuentes de poder.

El primero es el narcotráfico internacional, como una industria informal que ocupa el lugar de las débiles economías formales. La expansión del Tren de Aragua y

otros carteles de la región es la colonización de espacios donde el capitalismo neoliberal creó mercados, pero debilitó la sociedad civil, donde la integración social a través del consumo no llegó o se agotó, donde la violencia se constituye como instrumento de acumulación primitiva. En ese sentido, el crimen organizado es una expresión de capitalismo salvaje, esa es la fuente fáctica del contra poder que construye.

El segundo factor es el propio estallido social y sus secuelas: la crisis de legitimidad del Estado, la degradación de la presencia policial en las zonas populares, el vacío institucional que siguió a las promesas incumplidas. Eso crea condiciones objetivas para que organizaciones con capacidad de proveer orden -aunque sea un orden violento y predatorio- avancen territorialmente donde el Estado se retiró o nunca estuvo.

La tercera variable, que la derecha se ha resistido a asumir, es la penetración del lavado de activos en la economía formal. Es una industria criminal en expansión, por el tamaño de la economía informal que debe mover su capital y por la extensión de sus actividades criminales.

El mayor desafío político y democrático del crimen en Chile es su carácter de contrapoder al Estado: busca controlar territorios, establecer de facto una autonomía para sus operaciones, regular conductas en zonas determinadas, administrar justicia a través de las ejecuciones sumarias y el sicariato, y ofrecer empleos en la economía informal donde el Estado y el mercado formal han fracasado. En la literatura sobre crimen organizado latinoamericano, esto se denomina gobernanza criminal: una forma de regulación social que compete con el Estado en lugar de simplemente cooptarlo.

El gobierno de Boric heredó este problema, que se venía acumulando desde hace varios años, aunque se agravó en los últimos, pero lo enfrentó con ingenuidad.

Esa ingenuidad tiene una veta ideológica, pero que es también de clase.

En *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* Marx esboza un punto que Gramsci después desarrolla, al establecer la diferencia entre los intelectuales que creen representar a las clases subalternas porque las compadecen y los intelectuales que las representa porque comparten su concepción de mundo. Boric, en esto muy acompañado por el FA y el PC, pertenecen en general a los primeros. Son intelectuales de clase media alta, formados en las universidades, cuya relación con el mundo popular estaba mediada por el paternalismo, en muchos casos de raíz católica, donde las figuras del pueblo sufriente, del pueblo digno, del pueblo resistente, no calza con que parte de ese mundo popular se ha corroído, en parte por la propia sociedad neoliberal, abusa de su poder con los mismos de su clase y ha degradado sus valores, haciendo sufrir a sectores y familias del mundo popular, que lo vive con desesperación.

Esa aproximación desatiende los fenómenos de poder del crimen organizado, de cómo articula un poder fáctico desde la informalidad, de cómo gesta su legitimidad desde el nihilismo y la exaltación del discurso anti-élite, de su aspiración a forjar a su alrededor una cultura que los reivindique o relativice su degradación y, por cierto, de liderazgos que organizan y encarnan ese contrapoder.

Esta incomprensión tiene expresiones propias en casos sensibles de los últimos años.

Primero, en torno a la cuestión mapuche.

La izquierda universitaria construyó durante décadas el relato del pueblo mapuche como sujeto de resistencia anticolonial, lo que obviamente es una verdad histórica. Sin embargo, ese relato no distingue entre las demandas legítimas de reconocimiento y restitución de territorios y la captura de esa causa como un manto de legitimidad por parte de organizaciones que construyen un tipo de poder feudal en sus zonas de influencia, con control territorial y presencia del crimen organizado, hasta ahora asociado fundamentalmente al robo de madera y el narcotráfico. En términos políticos, en el primer caso la vía es el diálogo con el Estado para construir alguna forma de acuerdo y, en cambio, en el segundo son actores con poder que necesitan la debilidad del Estado para reproducirse y que, paradójicamente, oprimen también a las propias comunidades que dicen representar. No responden a una deliberación comunitaria ni a la formación de una sociedad civil progresista.

Hacer esa distinción significa reconocer que dentro del campo popular existen contradicciones irresolubles, que no todo lo que se presenta como resistencia subalterna lo es y que el romanticismo anticolonial puede ser funcional a las viejas formas históricas de dominación feudal.

Segundo, en torno a la cuestión migratoria.

Tratar la inmigración exclusivamente como una cuestión de derechos humanos -lo cual es legítimo y tiene fundamento- ignora la economía política de las migraciones irregulares: quién organiza el tráfico, cómo se financia, qué estructura de deuda y coacción vincula a los migrantes con las organizaciones que los trasladan, y cómo

esas organizaciones se instalan luego en los territorios de destino para reproducir su poder. Dicho en otros términos, el Tren de Aragua no llegó a Chile por la debilidad de nuestras fronteras, sino que llegó porque existe una cadena de poder criminal que convierte la migración en capital y porque explota la vulnerabilidad de los migrantes como un recurso productivo. Confundir la defensa del migrante con la permisividad hacia esas cadenas de poder no es progresismo, es solo otra forma de abandono de esos migrantes.

Tercero, en torno a la marginalidad urbana.

La estructura narco en las poblaciones no es un fenómeno cultural exótico que requiere comprensión antropológica ni es el grito desesperado de los excluidos que merece compasión antes que respuesta política. Es, ante todo, una forma de dominación sobre los sectores populares más vulnerables: los que no pueden pagar extorsiones, los jóvenes reclutados como soldados desechables, las mujeres atrapadas en redes de violencia, los vecinos que no pueden denunciar porque viven con temor. Eso no puede tener una mirada piadosa, requiere una acción fuerte del Estado, llenar ese vacío.

Lo contrario significa una delicada inversión de roles: la izquierda que se reclama portadora de los intereses del mundo popular termina siendo más conservadora que el mundo popular en su lectura del problema. En la taxonomía de Marx en *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, la pequeña burguesía cree representar a la clase popular, pero a la hora de la verdad no entiende ni sus intereses ni sus miedos ni sus formas de vida, y termina representándose a sí misma.

El Frente Amplio es, por su composición social y en su cultura política, una expresión de las capas medias ilustradas que tiende a cultivar un paternalismo compasivo. El Partido Comunista, por su parte, tiene una historia y una presencia orgánica real, pero también fosilizó ciertas categorías analíticas que le impiden ver con claridad las nuevas formas de dominación en el mundo popular.

El resultado de todo esto fue un proceso que podríamos llamar el Termidor de la ingenuidad.

Cuando Boric decretó el estado de excepción en la Macrozona Sur, primero a contrapelo y después en forma permanente durante todo su período, cuando adoptó el severo discurso de la seguridad tras graves casos en la Región Metropolitana y cuando endureció las políticas de migración, lo hizo sin marco teórico ni proyecto político: simplemente adoptó la agenda de la derecha porque no tenía la propia. La moderó, resguardó principios liberales y, sobre todo en la Araucanía, desplegó políticas de diálogo social. Sin embargo, en lo esencial respondió al contrapoder criminal con el único recurso disponible para un Estado que no está en condiciones de construir hegemonía: la coerción directa.

Este retroceso no fue homogéneo ni simultáneo. Fue gradual, y en cada paso se manifestó el mismo patrón: ante el fracaso de la aproximación piadosa, el gobierno recurría al endurecimiento de su respuesta. Boric llegó al poder con categorías construidas en el ciclo de las movilizaciones estudiantiles y en la experiencia del estallido social, que eran categorías válidas para ese momento y para esa realidad, pero insuficientes para gobernar un Estado en condiciones de crisis orgánica.

Por último, como indicaba al comienzo de este subtítulo, este déficit de la izquierda en seguridad no siempre fue tal y, sobre todo, nunca se fundó en ese paternalismo piadoso. El movimiento obrero que se transformó en fuerza política asumía que debía ser al mismo tiempo una fuerza formativa, política y moral. La piedad tiene un rasgo elitista, de quien se considera superior y con poder de conceder el perdón. La exigencia de quién quiere elevar sus estándares desde la misma condición de clase no parte de esa base, sino del rigor. La severa escuela de Recabarren, que además buscaba proteger a los líderes sindicales de los vicios o corrosión que podía afectar su legitimidad o capacidad de lucha, se fundaba en esta aproximación.

En ese sentido, el reemplazo de los partidos tradicionales de izquierda por las iglesias evangélicas en muchos de los que eran sus bastiones históricos tiene aquí una raíz histórica. Es una de las vetas del abandono de la izquierda de ese rol de formación social, que siempre fue ética y política. Es una base popular que ha encontrado otro derrotero de formación moral y que reacciona racional e instintivamente contra el crimen.

El crimen organizado ha crecido y se sostiene por ese vacío hegemónico del Estado y, al no llenarlo desde la construcción de una hegemonía desde abajo, fue ocupado por la retórica de la ultraderecha. Si esa retórica resulta ser una política consistente todavía está por verse, pero eso no cubre esta fragilidad de la izquierda ni las causas que la condicionan.

El caso del Tratado TPP11

El debate y las divisiones que rodearon el tratado TTP-11 son un buen retrato de la ausencia de una definición sobre

el poder real y por qué la izquierda no ha logrado resolver los nudos de una política industrial para el país. Lo que era una oportunidad se transformó en otra derrota.

El debate sobre el TPP-11 no era, en su fondo, una disputa técnica sobre aranceles o mecanismos de arbitraje. Era una disputa sobre poder. En ese sentido, el primer error del gobierno de Boric consistió en no leer el mapa de fuerzas que el tratado articulaba.

El TPP tenía una base de sustentación económica concreta y diversa: el sector frutícola y vitivinícola que podía acceder de mejor manera a mercados de Asia-Pacífico, el sector pesquero y acuicultor que tendría rebajas arancelarias en Vietnam y Malasia, el sector forestal que podía potenciar su acceso a Japón y Canadá, las empresas de servicios que tendrían la posibilidad de participar en las licitaciones públicas de esos once países. Esa base sectorial se traducían en un poder fáctico directo: respaldo parlamentario de las zonas más beneficiadas, apoyo activo de los gremios empresariales -en muchos casos gremios regionales- e inversionistas nacionales e internacionales. La proyección al Asia Pacífico que consolidada era, además, un núcleo geopolítico estratégico para Chile.

Esa coalición de intereses no era una abstracción ideológica, era un poder fáctico identificable, en sectores productivos y volúmenes de exportaciones. Un gobierno con lectura estratégica habría convertido esa base en un activo político propio: el tratado como un instrumento del proyecto transformador, no como una concesión al capital. Que no lo haya hecho no es solo un error de comunicación, es una incomprensión de la naturaleza del poder.

El subsecretario José Miguel Ahumada convenció al presidente Boric de retrasar la ratificación del tratado para hacer modificaciones en puntos que él sostenía eran importantes para el interés y la soberanía nacional. Su tesis descansaba en una crítica al TPP original, que tenía fundamento: los capítulos de propiedad intelectual diseñados por Estados Unidos restringían el ingreso de medicamentos genéricos, las cláusulas de arbitraje inversionista-Estado que amenazaban la autonomía regulatoria del país y reproducía una lógica de inserción exportadora en materias primas, sin una política industrial que la complementara.

Ese diagnóstico sobre los desafíos estructurales de la economía chilena es en gran parte correcto. Se funda en un propósito razonable y legítimo, pero tratado en abstracto, de *paper*.

La objeción del Socialismo Democrático a esa postura, que había impulsado el tratado en el gobierno de Bachelet II, es que ese diagnóstico no correspondía al texto del TPP que estaba sobre la mesa el año 2022. Con la salida de Estados Unidos el año 2017, las cláusulas más invasivas de propiedad intelectual fueron suspendidas. A su vez, el capítulo de arbitraje quedó en condiciones más favorables para Chile que los mecanismos equivalentes ya vigentes en los tratados de libre comercio bilaterales que el país tenía. Vale decir, el texto final tenía mejores resguardos que los propios acuerdos que Chile ya había ratificado sin mayor polémica.

Los resultados posteriores del tratado confirmaron esa apreciación. En su segundo año de vigencia, las exportaciones chilenas al bloque del TPP11 tuvieron un crecimiento de dos dígitos y el bloque se consolidó como

un gran destino exportador del país. La hipótesis de Ahumada sobre las ganancias marginales del tratado no resistió la evidencia empírica.

A ese error de lectura del mapa de fuerzas favorable al tratado, se sumó el hecho de que ninguna de las dos posiciones al interior del gobierno logró traspasar los límites de la élite tecnocrática y política para convertirse en debate activo de la sociedad civil.

El Socialismo Democrático tenía razón sobre el TPP11, pero nunca construyó un relato que permitiera articular a los trabajadores del sector exportador, a los viñateros de diversas regiones, a los pescadores del sur, a las empresas medianas, y reconocerse como ganadores del tratado. Esa posibilidad de estructurar un bloque histórico fue reemplazada por una racionalidad tecnocrática, relativamente ausente de los territorios donde el tratado tenía efectos reales.

El FA y el PC, por su parte, tampoco construyeron una base de poder social en torno a las objeciones que levantaban. Su posición también era tecnocrática y, en general, se articuló sobre el imaginario de una base productiva que todavía no existía: las nuevas industrias que surgirían bajo el alero de políticas industriales nacientes, los encadenamientos del litio y el hidrógeno verde que estaban en fase germinal, los sectores que se fortalecerían con mayor autonomía regulatoria. A esa base imaginaria se sumaron grupos antiglobalización con una agenda difusa y sectores medioambientalistas con argumentos que aplicaban al TPP original, no al TPP11 vigente.

En definitiva, la disputa se trabó al interior del gobierno entre dos lógicas tecnocráticas sin masa crítica y social. Una

tenía respaldo en la economía exportadora existente; la otra apelaba a una economía transformada que aún no tenía cuerpo. La posición de Boric quedó sin las fuentes fácticas necesarias para sostener su pretensión: no había actores organizados con intereses materiales concretos que presionaran en su dirección. Había argumento, pero no fuerza. Y en política, el argumento sin fuerza es opinión, no poder.

Finalmente, el gobierno de Boric promulgó el TPP-11 y entró en vigencia en febrero de 2023. Lo que podía ser una victoria se convirtió en una derrota.

Lo que debió haber sido la primera señal de que el gobierno comprendía el mapa de poder de la economía chilena -el respaldo activo a un tratado con base sectorial real y mayoría parlamentaria sólida- se procesó durante meses como un conflicto interno que debilitaba la imagen de conducción del Ejecutivo. La estrategia de suscribir *side letters*, concebida para dar cobertura política al retroceso de Boric, no satisfizo a nadie: era prácticamente imposible que tuviera viabilidad y su fracaso parcial confirmó la narrativa de un gobierno sin control de su propia política exterior. Se dilató la ventana de oportunidad hasta que se cerró, y cuando el Senado aprobó el tratado lo hizo con una mayoría que incluía votos de la derecha en una proporción que confirmaba, en el imaginario político, que era un triunfo del campo contrario.

El caso del TPP-11 no es un episodio menor ni una anécdota de política comercial. Es una veta de acceso a algo más profundo: la incapacidad del gobierno de Boric - y más ampliamente de la izquierda chilena en su configuración actual- para leer el poder real, construir sobre él y hacer de la gestión un instrumento de

hegemonía. Sin la construcción de un bloque social que entienda y defina qué intereses resguarda y promueve, sin un relato que dé a ese bloque identidad y dirección, y sin la voluntad política organizada para actuar con unidad cuando el momento lo exige, la racionalidad técnica se disuelve en el ruido.

La reforma previsional o cómo un poder fáctico construye un “bloque histórico”

En alguna de sus intervenciones, el entonces presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo “nosotros no estamos defendiendo a las AFP, me importan poco las AFP”; y era sincero. Asumía la crisis de legitimidad de las AFP y podía desprenderse de esa forma específica de administración privada de los fondos de pensiones. Lo que realmente defiende la derecha es el mercado de capitales y la fuente de recursos que lo alimentan a través de las cotizaciones previsionales. Dicho de otro modo, desde el punto de vista del clásico interés de clase, es más importante la profundidad del mercado de capitales al que las empresas pueden recurrir, que el proveedor específico de ese mercado.

En rigor, la reforma previsional que presentó el gobierno de Boric nunca puso realmente en riesgo esa fuente de poder fáctico del sistema, que -importa precisar- no es solo del modelo neoliberal. Aquí sistema y modelo no son lo mismo, son género y especie. La reforma original de los ministros Jeannette Jara y Mario Marcel cambiaba la estructura de la industria, modificaba variables del negocio, restringía o modificaba las rentabilidades de las entidades, pero no el mercado de capitales. Incluso, los mismos actores podían cambiar posiciones en la industria, pero los destinatarios finales del mercado de capitales iban a seguir

contando con ese servicio. Es más, que parte del aumento de la cotización en un 6% fuera a un mecanismo de solidaridad tampoco alteraba eso, porque esos fondos podían seguir siendo invertidos en el mercado de capitales. Esa era la fuente de la tranquilidad que transmitía Macaya.

Las únicas propuestas que tenían el carácter, pero no el poder ni la viabilidad, de alterar el sistema y, aquí sí, también el modelo, eran la que exponía Manuel Riesco desde el PC, que en su caso era solo de una parte del PC, y la persistente iniciativa de la diputada Pamela Jiles de una ley que permitiera el retiro de los fondos de las AFP, esto es, sacar esos fondos del mercado. Que entren por otra vía al mercado pasa a ser otro problema; es decir, otra de las ilusiones de destrucción del sistema capitalista tan presente en la izquierda.

En ese contexto, era más o menos inevitable que la reforma previsional se metiera en un pantano, se enredara en discusiones técnicas que solo alejaban a la ciudadanía, que ello permitiera a la derecha recuperar paulatinamente la iniciativa para -ya asegurado lo esencial- pasar ahí sí a la defensa de las AFP y que, al final, lo único que pudiera exhibir el gobierno como un triunfo fuera el aumento de la PGU y otros beneficios para algunos segmentos, con cargo a las rentas nacionales, incluido un mecanismo de solidaridad que luego deberá ser pagado por el Estado.

Es obvio, en ese sentido, que la gente valore la reforma, pero que al mismo tiempo esté lejos de sentir que se haya solucionado el problema de las bajas pensiones. A su vez, en la izquierda, sobre todo en la izquierda radical, asumen que se trata de otra derrota, pero sin entender realmente por qué.

El problema no es que Boric ni Jeannette Jara y Mario Marcel los hayan traicionado -aunque probablemente esa habría sido la acusación de Boric si hubiera seguido siendo diputado y no fuera el presidente de la República- sino que el mercado de capitales, representado en este caso por las AFP, ha construido bases de poder que le dan sustento. Al dejar de observarlo y tratarlo como tal, y refugiarse en el discurso moral o como un problema de relato, se volvió políticamente ineficaz, inútil.

¿Qué significa, como reza el título de este subcapítulo, que las AFP han logrado articular un “bloque histórico” a su favor?

No es una ironía, sino una “apreciación concreta de la situación concreta”, en el estricto sentido leninista, tan despreciado por algunos sectores del FA y tan olvidado por el PC. Distingamos.

Primero, la izquierda hereda una desconfianza ideológica respecto del capital financiero, que era y sigue siendo justificada respecto del capital rentista, pero no respecto del capital emprendedor en la economía de la innovación contemporánea.

A nivel global, el cada vez más sofisticado y segmentado mercado de los capitales de riesgo hace algo cualitativamente distinto del capital especulativo: asume la incertidumbre sobre un valor todavía no creado y financian proyectos inciertos, que sin embargo pueden ser muy disruptivos y transformar industrias y mercados. Eso tiene más afinidad con el empresario schumpeteriano que con el rentista. Sin mercados de capital abiertos y diversificados, solo podrían innovar quienes ya tienen capital acumulado,

lo que significaría que la innovación quede reservada a las corporaciones consolidadas o a los herederos de fortunas.

Esto tiene su propio suelo fáctico y fuentes de legitimidad social. La profundidad del mercado de capitales tiene, en términos marxistas clásicos, un conjunto de prácticas sociales que actúan en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. No es solo una abstracción financiera, sino que los operadores interactúan con emprendedores que acceden a nuevos instrumentos y redes de financiamiento, forman comunidades tecnológicas, apoyan lo que se denomina incubadoras o aceleradoras de proyectos, los inversionistas participan o apoyan la gestión estratégica de los proyectos y, dependiendo de las culturas universitarias, estructuran alianzas con empresas.

Esos emprendedores provienen de diversos segmentos de la sociedad, no solo de las elites. En muchos casos son una ruptura de poderes oligárquicos establecidos o su articulación promueve valores o culturas muy diversas.

Cuando el pensamiento liberal describe esto, tiene una ventaja argumentativa real, es decir, una fuente de legitimidad que la izquierda tradicional no logra contrarrestar. De hecho, algunas de las políticas industriales de orientación progresista se sustentan en esa dinámica de mercado. En Chile, es parte de los programas que impulsa la Corfo.

Sin embargo, esta ventaja liberal -incluyendo en este caso a la vertiente liberal progresista- tiene un límite cuando el poder se reconcentra. Hay muchos casos, incluso en las economías de innovación madura, donde las grandes corporaciones terminan adquiriendo las innovaciones exitosas antes de que puedan convertirse en competidores

reales. El capital de riesgo funciona como un sistema de externalización del riesgo de I+D para los incumbentes: la sociedad financia los fracasos y los oligopolios capturan los éxitos. El resultado de esa tendencia es que reproduce la concentración mientras promueve su contrario.

Esa dinámica de poder, que todavía no encuentra una solución teórica y práctica, se transforma en una fuente de desesperanza para la izquierda. Eso deriva, enseguida, en un tipo especial de pérdida de legitimidad.

A nivel global, hay intentos serios en la izquierda para dilucidar y resolver estas disyuntivas de disrupción y posterior concentración de poder, pero en Chile no las hemos traducido como pensamiento propio, aplicado a nuestras condiciones y escala. La apropiación lineal de países desarrollados o economías avanzadas tiende a ser teórica, y por eso frustrante. Es el entusiasmo con el Estado como coinversor con derechos patrimoniales en los activos estratégicos, que ha planteado Mazzucato; la reproducción de regulaciones antimonopolios, que deben ajustarse a las condiciones de una economía pequeña respecto de actores globales cada vez más grandes; o el modelo noruego, del Estado como propietario estratégico que impone condiciones de contenido local, investigación y formación de capital humano como precio del acceso al recurso.

Desde luego, la reforma previsional no rozó ese nudo y ya había agotado su capital político para que fuera una vía de tratarlo.

Lamentablemente, un proyecto que sí podía intervenir en algunas de esas variables de poder real, aun cuando fuera acotado, es el relativo a la Agencia de Financiamiento e

Inversión para el Desarrollo, que no tuvo prioridad ni urgencia legislativa y, de hecho, no logró su aprobación antes del cambio de mando. Asimismo, es el daño fáctico y simbólico que representó la venta de activos de la Corfo para financiar el déficit fiscal de 2025, porque es exactamente lo contrario al impulso de las políticas de inversión que la entidad realiza con pequeños y medianos emprendedores.

Este nudo no está resuelto, y su no-resolución pesa directamente sobre la credibilidad de cualquier proyecto de política industrial. Sin una teoría coherente de cómo el capital financiero puede ser un instrumento del desarrollo y no solo su depredador, la izquierda no puede construir el bloque histórico amplio que requiere para gobernar con mayorías estables.

Segundo, los retiros de fondos de las AFP, que se articuló antes del estallido como un recurso de protección promovido por Atria (FA) y otros abogados, sustentado precisamente en el derecho de propiedad sobre ellos, y después como una demanda en medio de la pandemia ante el regateo de apoyos sociales por parte del gobierno de Piñera, no fueron una ruptura con la lógica neoliberal de la seguridad social, sino su confirmación práctica más eficaz.

Una distinción que cruza *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, precisamente, es que la formación de la conciencia política y social no es un espejo de la realidad ni de las ideas, sino que se nutre de la experiencia vivida y de las relaciones sociales, de lo que construye sentido. La experiencia de los retiros, esto es, sus efectos en el consumo, en el pago de las deudas, en la inversión en emprendimientos, y también en la inmediatez de poder contar con esos ingresos, en el escepticismo sobre el

sistema de seguridad social como garantía de bienestar y el relato pragmático -muy real por el propio fracaso del sistema de las AFP- de que no importaba sacar los fondos porque la pensión sería igual de mala, formó un tipo de conciencia asentada en valores individualistas.

En esa misma línea, una de las fuentes de legitimidad de Franco Parisi en sectores de la clase media es que su vieja asociación a *Felices y Forrados* era una práctica social concreta de cómo las personas podían tomar decisiones respecto de sus fondos u otras inversiones. No es tal o cual idea, sino la experiencia que las rodea.

Esa conciencia no se revierte con un nuevo discurso que plantee la solidaridad *versus* el ahorro individual, es decir, cómo una idea general reemplaza otra idea general. Solo se revierte con una práctica social concreta y exitosa que la desplaza. Si no es superior en términos de mejorar la vida, pierde fuerza y legitimidad. El problema es que esa práctica, por ahora, no existe.

El FA y el PC, y con ellos el acomplejamiento de amplios sectores del PS, el PPD y la DC frente a esa corriente populista, no vieron y no se han hecho cargo de cómo su entusiasmo con los retiros profundizó la cultura neoliberal que combatían.

Una de las advertencias más interesantes de Gramsci contra la autocomplacencia de la izquierda respecto de sus propios relatos, es que el sentido común de las clases subalternas no era homogéneo ni coherente, contenía sedimentos de distintas épocas y distintas hegemonías, muchas veces contradictorios entre sí. Es también la aprensión de Marx en el Brumario respecto de cómo el pasado atrapa las miradas del presente.

Su traducción práctica aquí es que la crisis orgánica del neoliberalismo no liquidó el sentido común neoliberal en las prácticas cotidianas de los sectores populares y medios y, en ese sentido, los retiros más bien las consolidaron. Las AFP tenían y todavía tienen una crisis de legitimidad, pero mantienen arraigo en las prácticas sociales y en el sentido común y, a través del mercado de capitales, su función se conecta con diversos segmentos de la población. Es una disociación, pero por lo mismo es un problema político que tiene su propia densidad.

El alza de los costos de la vida y los mapas de poder

El suelo fáctico del estallido, la base material del malestar social que condensó, se estructura en torno a un persistente bajo crecimiento de una década, la caída o estancamiento de los ingresos de las familias y el alza del costo de la vida, que cada vez más casos asociaban a abusos de mercado: los créditos unilaterales de La Polar, las colusiones de las farmacias, los pollos y el papel confort, las alzas de la luz y el cobro de los medidores inteligentes. A ello se sumaba el costo de la educación, el encarecimiento de las viviendas y, la paja que rompió el lomo del burro, las alzas de la locomoción. Esa pérdida de legitimidad no era una abstracción ni un problema comunicacional, sino que tenía una base objetiva, se estructuraba en torno a una experiencia, en torno a un juicio fundado. La pandemia agravó esa dinámica, por la vulnerabilidad vital que produjo, la masiva pérdida de empleos que provocó, la necesidad de una reacción del Estado que no estaba preparado para esa convergencia de crisis política, económica, social y sanitaria, y las pulsiones populistas que desató en todos los sectores.

En ese contexto, sin embargo, en la izquierda - transversalmente- cometimos dos errores que todavía pesan en la actualidad. Primero, la noción de abuso, esencialmente correcta, se desplazó hacia la moralización de sus causas y se dejó de leer y tratar políticamente la estructura de poder que determina el alza de los costos de la vida. Ese suelo fáctico fue reemplazado por una abstracción, primero ética y luego tecnocrática. Segundo, no leímos adecuadamente el miedo que la mezcla de estas crisis incubaba y, en especial, cómo la angustia que rodeó la pandemia se desplazó hacia la sobrevivencia individual y familiar y elevó el escepticismo e incluso la desconfianza respecto de la capacidad del Estado para resolver la crisis. Recordando la distinción de Tucídides descrita previamente, las pestes o pandemias provocan un colapso del orden social y, por eso, incuban reacciones conservadoras. De hecho, esa es también la veta conservadora del populismo, porque no traza el horizonte de un nuevo orden progresista. Al final, reacciona más a la desesperación que a la construcción de una alternativa.

Volver a identificar ese suelo fáctico es clave y obliga a dilucidar sus fuentes de poder.

No toda alza en el costo de la vida es igual, cada una responde a su propio mapa. Veamos sucintamente tres casos que marcaron la agenda de los últimos años sin que la izquierda lograra intervenir sus bases de sustento ni las variables que permitieran un descenso real y sostenido de la inflación en esos mercados.

En primer lugar, el caso de las tarifas eléctricas.

A pesar de las exitosas reformas de 2015 en este sector, sin las cuales los precios serían exorbitantemente más altos, las

cuentas de la luz siguen subiendo y siguen sin absorber el potencial de precios bajos que Chile tiene. Eso está determinado, coyunturalmente, por la desesperación de las decisiones tomadas en la pandemia y, estructuralmente, por la anatomía del poder en la industria. Es inevitable distinguir, pero también tratar simultáneamente ambas cosas.

Se ha diluido en el tiempo, pero uno de los antecedentes del estallido fue la crisis por el cobro de los medidores inteligentes, que se desató en marzo de 2019. Eso derivó en un congelamiento de las tarifas por vía administrativa, por el mero retraso de los decretos respectivos. Tras el estallido, a fines de 2019, ese congelamiento se hizo por ley, para evitar un alza en medio de la ebullición de esos días. Luego, esta vez por la pandemia, en 2020 se tramitó y dictó otra ley que postergaba el alza de otro segmento del sector. El gobierno de Piñera impuso a las empresas una carga financiera objetiva, pero obviamente sin alterar la estructura de la industria y con compromisos de reembolso en los años siguientes. El gobierno de Boric, en julio de 2022, a menos de dos meses del plebiscito del Apruebo/Rechazo, decidió volver a postergar el alza de las tarifas, que para ese entonces ya representaba sobre el 40% de las cuentas, pero esta vez en condiciones financieras más ventajosas para las empresas, sin las restricciones que el estallido y la pandemia imponían. Esa acumulación de deuda, que llegó a los 6.000 millones de dólares, es lo que finalmente se empezó a pagar a fines de 2024.

Vale decir, la discrecionalidad de la autoridad puede generar un costo a determinados actores, pero no altera el marco de poder que garantiza sus intereses.

Lo estructural, a su vez, es que el costo base de las tarifas actuales y de las que se congelaron a partir de 2019 todavía están determinadas por un conjunto de contratos de las empresas generadoras, anteriores a las reformas de 2015 que elevaron la presencia de las energías renovables, que fueron suscritos a valores muy altos, indexados a los combustibles fósiles y al dólar⁹. Eso explica que, como clientes regulados, sujetos a las licitaciones que deberían protegerlos, los hogares y las pymes paguen entre US\$95-100 el MWh, mientras que los clientes libres, que tienen mayor capacidad negociadora y contratos más flexibles, tengan un promedio de US\$65-75 el MWh. Una paradoja similar ocurre con los PMGD¹⁰, que tienen una regulación orientada a fomentar la participación de pequeños actores en la generación de energía limpia, incluyendo un “precio estabilizado”, esto es, una garantía de precio a US\$80 MWh. Posteriormente, esos proyectos pasaron a ser controlados por fondos de inversión internacionales. Mantienen la estructura de pequeños proyectos, pero se concentran “aguas arriba” y aprovechan el precio subsidiado. Esta arquitectura les permite apropiarse de ingresos garantizados, elevan los costos del sistema y generan una asimetría regulatoria respecto de otros actores del sistema de las energías limpias. En los hechos, el poder no reside en los supuestos “pequeños” actores, sino en quienes controlan el capital, estructuran los portafolios y moldean la regulación, convirtiendo una política de fomento en un mecanismo de transferencia de rentas desde el sistema eléctrico hacia el capital financiero global.

⁹ Ver *Estudio de los Contratos Eléctricos Previos a 2015 Indexados al Precio de los Combustibles en el Mercado Chileno*, Odecu, 2024.

¹⁰ Pequeños Medios de Generación Distribuida, son proyectos de energías renovables de hasta 9MW.

El ministro Diego Pardow no logró intervenir en estas variables y, al final, la solución parcial que logró con el Congreso, a pesar de las resistencias del ministro Marcel, fue establecer un subsidio a la luz eléctrica que amortiguara esas alzas. Vale decir, con cargo a los costos fiscales se seguirán pagando esos contratos abusivos. Pardow advirtió estas distorsiones, pero hizo tímidos planteamientos para abordarlos. Nunca articuló una ofensiva pública -ya muy presionado por la crítica del sector privado por cualquier cambio a las “reglas del juego”- ni tampoco los trató como un problema de poder sistémico, esto es, tampoco construyó un bloque de poder que le permitiera ejercer un contrapeso consistente.

Es un costo estructural que las familias y las pymes seguirán pagando muy caro, afectando el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas.

En segundo lugar, el caso de las farmacias populares.

Uno de los rasgos de la incompreensión del poder es la tendencia a confundir intervenciones visibles con transformaciones reales. Es lo que ocurre con las farmacias populares. Surgieron como una respuesta al alto precio de los medicamentos y, efectivamente, lograron efectos positivos en acceso y en presión competitiva en determinados segmentos. Pero esos efectos, siendo reales, no alteraron la estructura de poder que determina ese mercado.

El núcleo del poder en la industria farmacéutica no está en el punto de venta, sino en la producción, en la propiedad de las patentes, en las cadenas de distribución global y en los mecanismos de fijación de precios. Es ahí donde se configuran las rentas y donde se define el margen efectivo de maniobra de cualquier actor.

Incluso, en el segmento de los medicamentos sin patente, donde deberían existir condiciones para una competencia efectiva, el mercado no funciona en base a precios. Funciona en base a marcas, a la influencia de la prescripción médica y al control de los canales de distribución, de las intermediaciones donde intervienen laboratorios, visitadores médicos, incentivos comerciales y estructuras de información asimétricas. La política de bioequivalencia, diseñada para fomentar la sustitución por medicamentos más baratos, ha tenido efectos limitados precisamente porque no altera de manera sustantiva esa estructura de poder. Intervenir en la etapa final del proceso, sin modificar esos factores, permite mitigar síntomas, pero no altera las causas.

Esta arquitectura de poder tiene consecuencias en los precios que pagan los hogares chilenos. Un estudio comparativo publicado por la Cepal¹¹ que analiza 19.741 unidades comercializadas en las seis mayores economías de América Latina entre 2010 y 2015, sitúa a Chile en el cuarto lugar más caro de la región en precios de medicamentos a salida de farmacia. En los medicamentos innovadores, aquellos sujetos a protección de patente o con posición dominante de mercado, Chile se ubica entre los más caros, superado sólo por Colombia. Esta posición no obedece a condiciones geográficas ni a decisiones de consumo, obedece a la ausencia de mecanismos regulatorios efectivos de fijación de precios y a la debilidad de la política de genéricos. Ninguno de esos factores estructurales es alterado por una iniciativa de escala municipal.

El problema político no es el valor de una iniciativa específica, sino su deriva: la consolidación de un tipo de

¹¹ Álvarez y González, 2020.

populismo simbólico que reemplaza la intervención sobre estructuras de poder por acciones de alto impacto comunicacional. El relato de que eso significa un cambio en el mercado no se corresponde con una alteración efectiva de sus fundamentos. El resultado de todo eso es una sobreestimación de sus alcances y una lectura distorsionada de la correlación de fuerzas.

El problema no radica en la existencia de estas iniciativas, sino en la lógica que las acompaña. Cuando se transforman en prueba de una supuesta capacidad transformadora que no poseen, se instala una forma de acción política que opera como sustituto de la transformación real. La política se desplaza hacia el terreno de la representación del conflicto, más que hacia su resolución efectiva. Opera como un mecanismo de consuelo: produce resultados visibles y legitimidad inmediata, pero evita enfrentar la pregunta decisiva sobre dónde radica el poder.

Comprender el poder real es un ejercicio más exigente: identificar sus fuentes, sus mecanismos de reproducción y los actores que lo sostienen. Supone distinguir entre aquello que es visible y aquello que es decisivo. Sin esa distinción, incluso políticas bien intencionadas pueden derivar en una forma sofisticada de impotencia. Y la política, en lugar de modificar la realidad, se limita a administrarla bajo nuevas narrativas, reforzando -sin proponérselo- las estructuras que dice combatir. En tercer lugar, la educación universitaria.

Entré a estudiar derecho a la Universidad Diego Portales en 1987. En ese entonces la mensualidad de la carrera era de 21.000 pesos, que en marzo de ese año representaban aproximadamente 6,15 UF. Medido en UF, hoy esa mensualidad costaría cerca de 245.000 pesos. En cambio,

la carrera actualmente bordea los 800.000 pesos mensuales. Es decir, en estos años, la inflación de la educación superior ha sido casi tres veces superior a la inflación general.

¿Qué lo explica?

El economista estadounidense Noah Smith ha descrito el mecanismo que opera en estos mercados, distinguiendo variables que conviene revisar críticamente respecto de Chile.

La primera es la que Smith toma de “la enfermedad de los costos de Baumol”¹², esto es, que la educación es intensiva en trabajo humano cualificado y resiste la automatización productiva. Es un área del sector servicios que no tiene el mismo comportamiento de precios que en el sector de bienes. Una sala de 30 estudiantes con un docente no puede duplicar su producción sin una pérdida de calidad. Los salarios de los académicos suben con la economía general, pero la productividad por docente no crece al mismo ritmo que en sectores tecnificados. Esto no es un fenómeno chileno ni un abuso: es la lógica de los servicios intensivos en personas y explica por qué la educación tiende a tener una inflación mayor que la de los bienes en cualquier economía.

La segunda es la estructura del mercado universitario. La educación superior no es un mercado donde la competencia opere sobre el precio, porque la información es profundamente asimétrica. El estudiante no sabe realmente cuál es la mejor oferta de calidad y el título universitario opera como capacidad de empleabilidad. No

¹² William Jack Baumol, 1966.

es un bien de consumo cualquiera. Eso reduce la elasticidad de la demanda: los estudiantes pagan más por instituciones percibidas como de mayor prestigio, sin que ese diferencial se corresponda necesariamente con una diferencia real en calidad de formación. Las instituciones que logran capturar posición de prestigio -real o construida- tienen poder de fijar precios sin presión competitiva efectiva.

La tercera es más propiamente chilena. El modelo regulatorio permitió durante décadas el lucro bajo la cobertura de instituciones sin fines de lucro y careció de mecanismos de control de costos y transparencia financiera. Eso mismo contagió sistémicamente a las universidades públicas. La inflación de aranceles no encontró resistencia institucional.

Uno de los problemas estructurales del Crédito con Aval del Estado -además del ingreso de la banca al sistema y la alta tasa de interés que fijaron- es que amplió masivamente la demanda sin establecer un control sobre los aranceles que las instituciones podían cobrar y sobre la calidad de las universidades y las carreras que impartirían. Las universidades capturaron el subsidio vía precio. La gratuidad del gobierno de Bachelet II intentó corregir esa lógica mediante los aranceles de referencia, calculados por el Ministerio de Educación, como tope para las instituciones que se adhirieran a ella. Era, en la intención, una política de precios. Pero el mecanismo era de adhesión voluntaria, los valores se calculaban sobre costos históricos y carecía de respaldo legal permanente: se implementó por glosa presupuestaria, no por ley. Las universidades privadas resistieron activamente esa arquitectura, emprendieron una fuerte reacción corporativa a través de todas sus redes políticas y comunicacionales, y la adhesión

quedó fragmentada. El resultado fue un mercado dual: control parcial en el segmento adherido, precios libres en el resto.

Cuando se subsidia la demanda en un mercado donde la oferta no se expande proporcionalmente -porque los cupos universitarios, las plantas docentes y la infraestructura tienen restricciones reales- los precios suben para absorber el subsidio. El subsidio no abarata la educación para quien estudia, enriquece a quien la provee. Los estudiantes y el Estado siguen pagando altos aranceles con débiles mecanismos de control de precios y calidad.

El problema, al final, no es sólo económico, sino político. Una parte de la izquierda logró identificar el malestar asociado al costo de la vida, pero no tiene una comprensión concreta de las estructuras que lo generan. Osciló entre la denuncia moral de los abusos y la formulación de soluciones parciales o simbólicas, sin construir una estrategia capaz de intervenir sobre los mecanismos reales de la formación de precios.

Una política progresista no puede limitarse a la redistribución ni a la creación de alternativas marginales. Requiere intervenir en la estructura: revisar contratos, rediseñar regulaciones, alterar incentivos, fortalecer la competencia donde es posible y reconocer, donde no lo es, la necesidad de mecanismos más directos de control o provisión. En otras palabras, requiere una comprensión material del poder.

Sin esa comprensión, la crítica al encarecimiento de la vida queda reducida a una constatación. Con ella, en cambio, puede transformarse en una estrategia.

La captura del Estado como problema estructural de Chile

La tesis de Mario Góngora respecto a que el Estado fue el que creó la nación, también aplica a la formación de su oligarquía. Ella no se construyó en contra del Estado, sino al alero de él. A diferencia de los casos europeos que forjaron la tradición marxista, sobre todo de Inglaterra, donde la burguesía industrial clásica primero acumuló poder de mercado y luego hegemonizó el Estado, en Chile sucesivas elites económicas se consolidaron a partir de derechos otorgados, acceso privilegiado a recursos, regulaciones *ad hoc*, contratos y decisiones del Estado, que luego ejercían influencia desde él. Alfredo Jocleyn-Holt agrega una distinción decisiva, porque a diferencia de Góngora no cree que hayamos construido realmente “un Estado en forma”, sino que el Estado siempre fue una estructura de poder oligárquico.

En Chile los distintos modos de captura del Estado no son un vicio del sistema, están en su formación.

Es la historia de la vieja Hacienda otorgada por la Corona, de la oligarquía que se fortalece en la República, de la industrialización impulsada desde la CORFO, el proteccionismo corporativista que rigió por décadas, las privatizaciones realizadas por la dictadura de Pinochet y las asociaciones público-privadas y las regulaciones promercado que impulsó la Concertación.

El proyecto neoliberal produjo una renovación de la vieja oligarquía, pero también creó una nueva. Parte de su soporte sociológico y cultural es que promovió una nueva clase empresarial. Eso es lo que le permitió a la derecha resolver la crisis de legitimidad y liderazgo que la llevó a su

desplome en las elecciones de 1965, tras el triunfo de Frei Montalva, y a que en las elecciones de 1969 y 1973 obtuvieran apenas un 21%. Tras la dictadura emerge como una fuerza que representa el 40%, lo que mantiene hasta ahora. Esos nuevos grupos empresariales son distintos de la aristocracia terrateniente que sobrevivió a la reforma agraria truncada por el Golpe de 1973. Son conglomerados financieros, industriales y comerciales modernizados, internacionalizados, con gobiernos corporativos más sofisticados. La derecha hizo su revolución¹³, lo que Gramsci llamaba la “revolución pasiva” como solución a la crisis revolucionaria de 1973.

Sin embargo, lo que no cambió es su relación estructural con el Estado. Mutaron sus formas, no su lógica. Esta mutación es lo que la izquierda no ha procesado, y por eso no identifica bien cuáles son sus fuentes de poder y cómo construye hegemonía en la sociedad.

Aquí y en el mundo los mecanismos de captura del Estado se están articulando bajo otra arquitectura.

El primero es la captura regulatoria técnica, que es abierta y pública, legitimada por el propio diseño institucional. En general, las superintendencias y los ministerios sectoriales dependen, para su función regulatoria, de la información que proveen las industrias que regulan. Obviamente, esa es una asimetría sideral, que no se resuelve con quejas ni buenas intenciones. El Estado se vuelve insuficiente y no hay una sociedad civil con capacidad equivalente. Son pocos los casos en que logran ese balance: sindicatos

¹³ Ver *Su revolución contra nuestra revolución, izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*, de Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Julio Pinto, LOM Ediciones.

fuertes, organizaciones de consumidores, grupos ambientalistas, nichos universitarios.

El segundo es la puerta giratoria institucional. No hemos logrado resolver que exautoridades regulatorias migren a las industrias que regularon. Las normas de incompatibilidad post cargo son débiles en plazos y alcances. El efecto es doble: el regulador que aspira a ese destino anticipa los intereses del sector desde que ocupa el cargo; el ex regulador que ya migró lleva consigo capital relacional e información que ningún competidor externo tiene. Este fenómeno, bien documentado en Estados Unidos y Europa opera en Chile con menos capacidad de contención. Es un tipo de oligarquización políticamente transversal.

El tercero es el financiamiento político. Las crisis de 2003 y 2015 derivaron en reformas significativas, pero todavía hay muchos vacíos, como se ha seguido demostrando a través de nuevos escándalos (fundaciones, asesorías, prácticas clientelares, redes de empleo político).

El cuarto es la litigación estratégica. Los grandes grupos económicos han desarrollado una capacidad legal de alta sofisticación para retardar, neutralizar o revertir regulaciones adversas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los Tribunales Ambientales, la Fiscalía Nacional Económica, las Superintendencias y, en el caso de las inversiones extranjeras, los mecanismos de arbitraje internacional son instancias a las que solo tienen acceso eficaz actores con recursos para sostener litigaciones de larga duración. Ese acceso diferenciado al sistema legal es en sí mismo una forma de poder estructural.

Sin entender esta dinámica, no hay proyecto anti oligárquico consistente. Las categorías con que la izquierda enfrentó a la vieja oligarquía están obsoletas y por eso su política, sus prácticas, su relato, su retórica y su tono no logran generar un balance real respecto de esas fuentes de poder.

La Concertación no lo logró hacer y el gobierno de Boric tampoco. Más bien, en algunos casos lo reprodujo y en otros lo profundizó.

¿Por qué?

En primer lugar, el FA y el PC, que se estrenaron en la hegemonía de un gobierno, y también en sectores del PS, el PPD y la DC, existe una tendencia al corporativismo que siempre contiene una lógica de cooptación del Estado.

Algunas de las organizaciones de la sociedad civil no escapan al fenómeno de su oligarquización o a la representación de sus intereses sin consideración del interés general. Su lógica esencialista, expresada con tanta crudeza en la Convención Constitucional, que considera su interés y la concepción de mundo que la expresa como un valor superior, relativiza la legitimidad de otros intereses y enfoques. Por eso, como se pudo observar, hubo tanta discrecionalidad en muchas decisiones de los mandos intermedios del gobierno de Boric. Es también la dinámica que se produjo con el poder que ciertos gremios adquirieron en la agenda del Ejecutivo.

Un caso emblemático de este fenómeno es el fraude de las licencias médicas en el sector público, que no se puede considerar sino como un tipo de captura del Estado. Aunque también ocurre en el sector privado y es parte de

una crisis de valores más amplia, la indignación ciudadana la tradujo como una forma de privilegio y un abuso institucionalizado de una elite con capacidad de apropiarse de fondos públicos que afectan, en este caso, el financiamiento de la salud.

Si la izquierda no detecta ni combate la oligarquización inherente al riesgo corporativista no será capaz de construir un “bloque histórico” consistente. Todo el debate que rodea la contradicción entre la cultura *woke* y la izquierda universalista se enmarca en este problema: el “bloque histórico” es la articulación de contradicciones, es la identificación de cuáles son los intereses generales legítimos, es el procesamiento público de los dilemas y que ellos pueden tener una vía de construcción común en la institucionalidad democrática.

En segundo lugar, el escándalo de las fundaciones es paradigmático de cómo construir poder político desde el Estado; y no fue tratado como tal. Como se eludió, fue un factor de pérdida de credibilidad de Boric y su gobierno.

Se trata de un patrón estructural que excede las generaciones y los proyectos políticos. El problema no es que el FA cometiera los mismos errores que denunciaba, lo que invalidó la superioridad moral que reclamaba. Era un modelo de poder, estructurado como estrategia por Podemos en España y ejecutado como práctica política y social por la C mpora kirchnerista en Argentina. Es lo que antes quiso hacer Pe nailillo en la Nueva Mayor a. Es un dise o de poder paralelo a los partidos, que ocupa su posici n en el Estado para crear, sostener y expandir una red de poder, en algunos casos a trav s de organizaciones de la sociedad civil.

Esto no es nuevo en la historia de la izquierda y la centroizquierda, lo nuevo fue la escala y la velocidad con que se instaló como práctica. En el caso del FA es también una falla de concepción del Estado, como aparato que debe ser reformado para servir al interés general o una fuente de poder orientada a la reproducción del poder propio.

En tercer lugar, el acuerdo entre Codelco y SQM es la legitimación tardía de la captura del Estado más emblemática de la dictadura.

Hay defensores convencidos del acuerdo en la izquierda, tanto en el Socialismo Democrático como en el FA e incluso en el PC. Su razonamiento es que la Empresa Nacional del Litio no tenía viabilidad legislativa, que la implementación más rápida de una estrategia estatal del litio era a través de Codelco y Enami, que el *momentum* del litio como recurso estratégico para la transición energética global podía diluirse y que, en el caso particular de los salares explotados por SQM, una licitación presentaba riesgos técnicos y de negocios, retrasaba el aumento de producción y que, a través de un acuerdo directo, Codelco garantizaba el control de la alianza y elevaba las rentas al Estado.

Máximo Pacheco expuso un argumento impecable. A su juicio, esta era una buena decisión de negocio y que él, como presidente del Directorio de Codelco, debía garantizar que se adoptara la mejor decisión para la empresa. Agregó que las variables políticas no debían ser consideradas por Codelco, sino que debía decidir si era un buen negocio o no.

Tenía razón, pero con ello -precisamente- desplazaba las decisiones políticas al dueño, al Estado, representada por el presidente de la República, por Boric.

El resultado fue darles a los herederos de Pinochet treinta años adicionales de explotación sobre el Salar de Atacama. Ponce Lerou logró construir una base fáctica, empresarial, jurídico-contractual y técnica que le permitió sostener una sólida posición de poder en las negociaciones. Ahora tiene la legitimidad de una sociedad con Codelco, y todo el poder del Estado que eso representa en Chile y en el sector minero, suscrita por el gobierno progresista del presidente Boric.

En todos estos casos, el problema estructural no es -en última instancia- que algunos sean virtuosos y otros corruptos. El problema es que el Estado chileno, tal como nació y como ha funcionado históricamente, produce incentivos sistemáticos para su captura. Ni la Concertación ni ahora el gobierno de Boric han logrado superar esa realidad.

La izquierda no puede construir un proyecto de transformación sostenido si no tiene una respuesta a este problema. Y no puede tener una respuesta si no lo reconoce como tal: no es una anomalía moral y no es solo de la derecha, es una contradicción estructural que la crisis de legitimidad que Chile todavía atraviesa requiere enfrentar.

El gobierno de Boric tuvo la oportunidad de plantear esa agenda con credibilidad -venía de la crítica más radical al modelo- y no lo hizo. No fue falta de voluntad, pero su propio elitismo incuba cegueras, su moralización condenatoria tiende a evitar la autocritica, el arsenal teórico del populismo corporativista restringe la observación de

estos fenómenos y, en especial, esta incompreensión del poder impide determinar cuáles son los eslabones decisivos sobre los que se debe actuar.

¿Por qué es una derrota estratégica?

La afirmación inicial de estas páginas es que la Convención Constitucional y el gobierno de Boric llevaron a la izquierda a una derrota estratégica. Eso requiere una precisión adicional, porque obviamente es un juicio duro.

El problema no es la derrota electoral, que obviamente duele, ni tampoco el hecho que se le haya entregado el gobierno a Kast, un pinochetista contumaz. Eso no es lo estratégico. Puede ser irritante o inquietante, pero no tiene en sí mismo el carácter de estratégico.

El punto es por qué la izquierda perdió la capacidad de construir una mayoría progresista y por qué ha deteriorado -y en algunos casos ha roto- su vínculo con amplios sectores populares y de clase media.

Quizás en estas páginas he abusado un poco de algunos términos, pero ese es el núcleo del gran aporte que Gramsci representó para la izquierda: el bloque histórico como la articulación concreta y compleja de una gran mayoría social y política, la hegemonía como la construcción de una sólida legitimidad, capaz de transformarse en un sentido común, en que los valores progresistas se vuelvan normales en la práctica cotidiana de las personas.

Aludir a *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, mirar la dinámica de estos años desde ahí, tiene varios significados: es recordar que hay una historia que recoger, no como repetición ni como leyes científicas, sino como maestra de vida, como señalaba Maquiavelo respecto de sus lecturas de “los hombres antiguos”; que la observación de las fuerzas, los intereses, los argumentos, los autoengaños, los

giros y los matices de los acontecimientos descritos ahí por Marx sirven para indagar creativamente las causas de las derrotas; y, también, lo que creo adquiere relevancia, es que hay un rico bagaje conceptual y teórico -no en sentido ideológico estrecho- al que la izquierda puede y debe recurrir para examinar sus debilidades.

Desde esa perspectiva, esta derrota también es estratégica desde el punto de vista conceptual y teórico.

Creo necesario detenerse en esto para recomponer una alianza progresista viable.

En una de sus entrevistas en la campaña de las elecciones primarias de 2025, Gonzalo Winter, el candidato presidencial del Frente Amplio, dijo que su aspiración era alcanzar una sociedad sin clases sociales, entendiendo a las clases “como proyectos autoconscientes de sí mismas, que se perpetúan en el tiempo”. Cuando lo escuché, dije “esa majamama da para cualquier cosa”, pero era claro que aludía a una base conceptual, que creo está en la raíz de las diferencias más profundas que hoy corroen a la izquierda.

La frase de Winter es una traducción del pensamiento de Laclau y Mouffe, que tanta influencia tiene en el FA y que ha contagiado crecientemente al PC. En esa matriz la hegemonía se define desde el discurso, desde la articulación de los relatos, uniendo demandas heterogéneas en torno a una idea genérica de pueblo. Por eso para Winter las clases no son la posición de cada cuál en las relaciones de producción, que existen al margen de la conciencia, sino un tipo de autoconciencia que se reproduce a sí mismo por un problema simbólico. Todas las virtudes performáticas del FA se entienden mejor desde esta mirada; y también se entienden mejor sus puntos

ciegos respecto de la facticidad de las relaciones sociales y de cómo ellas forjan su legitimidad.

Es una ruptura legítima, pero es una ruptura con la tradición más fecunda de la izquierda, que tiene consecuencias políticas; no es algo que opere solo al nivel de las ideas.

La tesis central de Laclau y Mouffe es que el discurso es lo que produce unidad política, en torno al pueblo, a la nación, a la patria u otros. No existen previos al discurso. El pueblo no es un dato sociológico, es el efecto de una operación simbólica que articula demandas heterogéneas en torno a lo que Laclau llama un “significante vacío”. Un significativo vacío es un nombre -que además de pueblo, nación y patria, también puede ser dignidad, cambio, etc.- que tiene la capacidad de representar una totalidad social sin tener un contenido único y fijo. Su fuerza política proviene precisamente de esa indeterminación, esto es, al no estar anclado en ninguna demanda específica, puede contener muchas.

En el año 2014 Iñigo Errejón explicaba el diseño de Podemos como “la articulación del descontento flotante para una activación popular que recuperase la soberanía y la democracia, secuestradas por la ‘casta’ oligárquica” y que buscaban generar “interpelaciones transversales a una mayoría social descontenta... más allá del eje izquierda-derecha ... para proponer la dicotomía ‘democracia/oligarquía’ o ‘ciudadanía/casta’ o incluso ‘nuevo/viejo’”, esto es, establecer lo que para él era “una frontera distinta que aspira a aislar a las elites y a generar una identificación nueva frente a ellas”.

El estallido social convirtió la palabra “dignidad” en el nombre de la crisis, que abarcaba pensiones, salud, CAE, alzas del transporte, medidores inteligentes de la luz, trato cotidiano y muchos otros.

Esta teoría tiene fuerza interpretativa respecto de las crisis y los conflictos, explica cómo demandas dispersas se unifican alrededor de un adversario común. *La Razón Populista* de Laclau y Mouffe estudia la dinámica de muchos momentos calificados como populistas y cuestiona el desprecio elitista de ellos como una mera irracionalidad de las masas. Sin embargo, como teoría de la transformación histórica es estructuralmente insuficiente.

A diferencia de Laclau y Mouffe, para Gramsci la hegemonía no es una operación discursiva. Es una relación social concreta que nace de las estructuras productivas, de las relaciones sociales que forman, se organiza en instituciones y se vuelve sentido común mediante la cultura. Lo que Laclau llama “articulación discursiva” para Gramsci es sólo el momento simbólico de un proceso más profundo y concreto, la construcción de un bloque histórico.

La sustitución del bloque histórico por la articulación discursiva no es la traducción cultural de Gramsci, es una desmaterialización del conflicto político que tiene consecuencias estratégicas.

Este nudo se conecta a cómo Laclau recoge las ideas del politólogo nazi Carl Schmitt, en especial su comprensión de lo político desde la distinción amigo/enemigo.

Es una concepción ontológica, respecto de cómo entienden qué es la política. No es una definición moral ni

programática, sino una comprensión de lo que la define esencialmente. La política es conflicto, nace del conflicto, no del consenso. La dinámica amigo/enemigo es. La interpretación populista de Laclau es que el pueblo se constituye enfrentándose a un enemigo, en su caso a las élites, a las castas, al sistema. El antagonismo no es un momento, es constitutivo de lo político. La interpretación de Schmitt es que el Estado no es una alternativa de consenso, sino que debe contener el conflicto, neutralizarlo, estabilizarlo. Laclau y Schmitt son, en ese sentido, antiliberales y, más aún, antiilustrados: ambos desconfían de la razón como fundamento del orden político y colocan en su lugar la voluntad, el conflicto y la decisión.

Esto se expresó nítidamente en todo el proceso de la Convención Constitucional bajo la dicotomía “pueblo/elites” o “los de abajo y los de arriba” o “los que tenían calle y los que no entendían nada”. Los Republicanos la reprodujeron en el Consejo Constitucional, bajo las dicotomías “orden/caos” o “derecho natural versus relativismo moral” o “mamarracho versus seriedad”. Después, la campaña de Jeannette Jara también sucumbió en esa estrategia. Una de las tesis que la articuló fue que la elección presidencial, o en general este ciclo del país, se jugaba en la dicotomía “los de abajo y los de arriba”. Eso alimentó parte de su agenda, de su retórica y la puesta en escena personalista de su liderazgo. Era ella y sus virtudes más que el arco de fuerzas que la podía sostener. Su consecuencia fue la incapacidad de construir alianzas más amplias y la pérdida de sectores sociales que no se reconocían en esa frontera binaria.

En este punto la izquierda puede extraviarse irremediablemente.

La primera y más radical objeción al populismo de Laclau proviene del propio Marx. Para Marx la conciencia no nace de las ideas que los hombres tienen sobre el mundo, sino de la forma en que viven, trabajan y se relacionan en él. Pero, una vez formada, esa conciencia también se convierte en una fuerza que puede transformar ese mismo mundo. La conciencia es efecto antes que causa, pero no es un reflejo pasivo, es una fuerza activa. *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* es un buen antídoto contra las simplificaciones posteriores de esta aproximación, que en parte es en contra de lo que Laclau y otros postmarxistas se confrontan.

Laclau invierte esta relación: el discurso es el que produce el sujeto político, no las condiciones materiales. Las ideas crean al pueblo. Esto es lo que Winter traduce cuando define las clases como “proyectos autoconscientes”, la lucha de clases se vuelve una categoría de autoconciencia, no una sociología de las relaciones sociales.

Esta distinción tiene otra consecuencia estratégicamente decisiva.

Para Marx, la lucha de clases era sociología, no una filosofía. Era una interpretación de la historia y de las contradicciones sociales, pero no un ideal ni el fundamento de su ética. Su famosa frase en *La Ideología Alemana* de que “el comunismo no es para nosotros ni un Estado que debe ser creado ni un ideal al que debe acomodarse la realidad”, sino que “llamamos comunismo al movimiento real que pone fin al estado de cosas existente” tiene ese carácter. La política marxista se orienta a resolver contradicciones reales, no a perpetuar un antagonismo simbólico.

Para Laclau, en cambio, la disputa pueblo/elite es permanente, no es una fase transitoria hacia un estado final sin conflicto. Desestima ontológicamente esa posibilidad. Su proyecto de la democracia radical aspira a institucionalizar el conflicto, pero no visualizan su resolución, esto es, la posibilidad de una solución universalmente válida. Eso acerca su pensamiento a Schmitt y lo separa drásticamente de Marx y Gramsci. Laclau y Schmitt comparten la creencia de que el juego político nunca va a ser clausurado por la razón o por el progreso histórico: para ellos, siempre habrá un enemigo.

Cualquiera podrá decir, razonablemente, que Laclau y Schmitt tienen razón, siempre habrá conflictos, y que la idea de Marx es una ilusión del racionalismo ilustrado: no hay soluciones finales, no hay un fin de la historia. Lo mismo se podría decir de la aspiración de Gramsci de proponerse la reforma moral e intelectual de la sociedad como una tarea histórica concreta, como la base de un nuevo orden. Pero, de nuevo, eso está en el dominio de la sociología o cómo la política es, pero falla esencial y gravemente respecto de la política como construcción de propósitos, de sentido y de ideales, que son tan consustanciales a la política como el conflicto.

A pesar de las descalificaciones que sufre, Maquiavelo calibraba esa diferencia, porque al mismo tiempo que distingue la política como es respecto de la moralización de cómo debe ser, para él la noción de la gloria que debía regir al Príncipe o a la República era un principio ordenador de sentido. Toda la teoría de la razón de Estado se funda en ese fundamento de la ética de las consecuencias.

A su vez, en este terreno, Marx es muy heredero de la filosofía alemana y, en especial, de la premisa del imperativo categórico de Kant, que en una de sus traducciones reza como "obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal". Diversas escuelas y corrientes de la izquierda se fundan en esa definición. Kant reconoce los dilemas, se sitúa en el conflicto y en la obligación de tomar opción, pero trata de articular un principio que sirva como norma orientadora de la razón. Qué es lo singular y lo universal es, obviamente, algo complejo de dilucidar, porque cambia, evoluciona. En la línea de lo que he expuesto, es un principio que permite explorar cuáles son los potenciales de legitimidad o de pérdida de legitimidad de una posición. Y, en general, es también lo que previene a la política del nihilismo y del cinismo.

Asimismo, en contra de lo que muchas veces se afirma, Laclau y Mouffe no son herederos de Gramsci, son su distorsión sistemática.

Laclau y Mouffe sustituyen el "bloque histórico" por la "articulación discursiva". Para Gramsci la hegemonía es la dirección intelectual y moral de un bloque social real, fundado en relaciones productivas, instituciones, alianzas y cultura. Para ellos, la hegemonía se redefine como una operación simbólica capaz de articular demandas en torno a un nombre. La unidad política deja de reposar en intereses estructurales duraderos y pasa a depender de identificaciones inestables. Laclau y Mouffe reemplazan la organización por el significant. Para Gramsci el partido es el "intelectual colectivo", que organiza, educa y disciplina una voluntad nacional y popular. Para ellos, en cambio, al situar la hegemonía en el significant vacío, la política se

desplaza al liderazgo o a los símbolos unificadores, no necesita ser orgánica. Laclau y Mouffe relativizan la autonomía del Estado y la cultura de sus instituciones. Gramsci, en cambio, entiende el Estado como una realidad compleja, con burocracias, equilibrios jurídicos, concepciones de mundo y restricciones materiales. Es una diferencia medular, al menos en dos sentidos: si el Estado se trata como un terreno discursivo más, se subestima su resistencia estructural como aparato y como representación de intereses en la sociedad; y, a su vez, las acciones performáticas tienden a debilitar las instituciones, sujetándolas o a veces legitimando su discrecionalidad. Por último, Laclau y Mouffe entienden la hegemonía desde la contingencia, no desde la construcción de un proyecto histórico. Eso debilita la legitimidad y la coherencia de un programa transformador.

Para Gramsci la hegemonía no es ganar elecciones, sino construir una mayoría histórica. Eso requiere confianza social profunda, no sólo movilización. El populismo moviliza, pero no genera la confianza duradera sobre la que se construye un orden político estable. Y, por esa razón, cuando el “significante vacío” asume el poder, cuando entra al Estado, cuando lo “vacío” debe llenarse de contenidos con decisiones concretas, comienza a fragmentarse, a aparecer la intransigencia, la intolerancia y las acusaciones de traición.

Esto ha tenido consecuencias.

La Convención Constitucional fracasó en su propósito de crear un espacio común para la nueva Constitución porque la estrategia de “articulación discursiva” no es compatible, en la práctica real, con el “bloque histórico” y la política de compromisos que requiere. Ello exige acuerdos reales,

concesiones genuinas, consolidación de los pivotes que permiten avanzar, comprensión de la legitimidad de los aliados y los adversarios. La Convención operó permanentemente con la lógica del “significante vacío” y creyó hasta el final que ganaría el plebiscito bajo el discurso de pueblo *versus* la elite, sin asumir que para muchos sectores ellos mismos ya eran considerados de la elite.

Las mayores dificultades del gobierno de Boric también tuvieron su origen en esta matriz. La formación del gobierno bajo el esquema de los “círculos concéntricos” es la representación de su dificultad para traducir una mayoría en alianzas históricas y no contingentes. La creencia de que los retiros de fondos de las AFP pueden moverse en el dominio discursivo, sin observar cómo ello influye en las prácticas sociales. La afirmación de que lo estructural de la reforma previsional está en su narrativa y no en las fuentes de poder que articulan el sistema. La ingenuidad de que creer que los problemas de la inmigración son solo de derechos, descuidando su impacto en las relaciones sociales y de poder que genera. La práctica extendida por los mandos intermedios de restar importancia y valor a las instituciones y a sus prácticas, sin considerar que en ellas también se articula una concepción de mundo. Y, asimismo, ahí radica el énfasis declarativo de Boric y su creencia de que la legitimidad de su gobierno se va a sostener más en el valor de sus intenciones que en sus resultados.

El mayor peligro de esa concepción, sin embargo, no es el fracaso individual de un gobierno, es el riesgo democrático que instala. El riesgo del populismo es su desplazamiento, que muchas veces ha sido activado desde la izquierda y muta hacia la derecha. Y la historia enseña que el fascismo -en cualquiera de sus expresiones- ha sido siempre un

fenómeno populista. Apela al resentimiento, al miedo y a la agitación del agobio bajo una matriz conservadora y autoritaria, porque en medio de las crisis prolongadas hay una ausencia de proyecto, de un sentido de futuro concreto. El reemplazo de la fase movilizadora de una crisis por su solución autoritaria se funda en esos temores y vacíos. Activar la tecla del populismo es moverse en ese mismo marco. La mera representación del malestar, sin un imaginario realista de cambio, suele ser la antesala del fascismo.

Kast es la expresión de esa consecuencia. El riesgo democrático del populismo no radica sólo en que, en algún momento, algún líder providencial tenga pretensiones autoritarias. Radica en la dinámica que genera y que, al final, la frontera pueblo/elite puede ser capturada por cualquier signo ideológico. Quien mejor construya su enemigo, gana. La derecha radical aprendió esa lección.

Una clave final del Brumario: la “poesía del futuro”

El *Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* está lleno de frases notables, ampliamente citadas a lo largo de los años, que buscaban traducir de un modo legible el razonamiento dialéctico que Marx quería aplicar y mostrar. Hay un hilo inicial de tres sentencias que en general circulan o se citan en forma fragmentada, pero que en realidad son parte de una misma tesis general:

"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado";

"La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado";

"La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir".

A mi juicio, el propósito de esa aproximación tiene como destino esta última afirmación: cualquier proceso de transformación debe "cobrar conciencia de su propio contenido" y que eso no surge de la mera creatividad ni de la sola voluntad, sino que está sujeto a condiciones, tendencias, fuerzas reales e imaginarios sociales que tienen fundamentos vivos, asociados a la experiencia concreta de las personas, individual y colectivamente.

Uno de los vacíos más evidentes del estallido fue que no logró formular su "poesía del futuro" ni dotarse de "su propio contenido". Las diversas demandas no produjeron esa amalgama y la noción de "dignidad" no logró traspasar su fuerza simbólica a cambios reales, a políticas e instituciones que la resguarden. La nueva Constitución, que podía fijar el marco que permitiera ese desarrollo, fue llevada al despenadero.

La Convención Constitucional y el gobierno de Boric son el retrato tardío de esa advertencia de Marx. Se disfrazaron con las ropas de los héroes de otras épocas y confundieron esa gestualidad con la sustancia del cambio.

El gran error político, estratégico y ético de la mayoría radical de la Convención fue querer reemplazar una Constitución ideológica, programática y autoritaria como la de 1980 por otra Constitución ideológica y programática, que también pretendía -bajo el ropaje de la representación popular- limitar lo que las mayorías democráticas pudieran querer decidir en el futuro. Llevar muchas materias de ley a norma constitucional es la vía para extraer de la deliberación de las mayorías el cómo se entienden y se aplican los derechos fundamentales. Se llenó de contradicciones precisamente por esa pretensión normativa similar a la anterior.

Dicho crudamente, los que encabezaron ese enfoque, Fernando Atria, Jaime Bassa, Marco Barraza y Bárbara Sepúlveda quisieron ser como Jaime Guzmán, sin darse cuenta de que esa era una pesadilla del pasado que oprimía el presente e impedía articular el futuro. Ese propósito, presentado como una victoria, como la victoria definitiva sobre el neoliberalismo, era una poesía del pasado, no del porvenir.

Algo similar ocurrió con Boric y su intento de apropiarse de la figura de Allende. Su conmemoración de los 50 años del Golpe fue estructurada desde la nostalgia, la glorificación y su moralización, sin permitir ni alcanzar la densidad histórica que otorgaba una revisión crítica de su tragedia. Una revisión, por lo demás, que la izquierda hizo con profundidad e incisividad en los años posteriores. El triste episodio de la compra de la casa de Allende fue el amargo cierre de esa aspiración. Toda esa gestualidad encerraba una limitación adicional: no disponía a la izquierda al clima político, intelectual y emocional de pensar el futuro.

La generación de los 80, de la que soy parte, teníamos -y creo que en gran medida todavía tenemos- una aproximación emocional y política algo distinta. Allende era una figura entrañable para nosotros, pero asumíamos que su fracaso había terminado en la dictadura que despreciábamos. Había una enorme valoración de todo el movimiento popular que articuló a lo largo de los años, pero al mismo tiempo sabíamos que había que hacer algo distinto. Algunos en una versión revolucionaria, otros en una reformista, pero no nostálgica. El aprecio no limitaba la mirada crítica, porque vivíamos sus consecuencias. Lo que vibraba entre nosotros era qué hacer para terminar con la dictadura y cómo íbamos a garantizar la democracia para construir un proyecto progresista, que tendría otro contenido.

Somos una generación que -junto a las anteriores y no contra ellas- luchamos contra Pinochet y lo derrotamos. Él perdió el plebiscito del 88, salió del poder, debió enfrentar la Justicia y quedó en la historia como una figura moralmente derrotada, retratada con oprobio. Tenemos esa tranquilidad de espíritu.

Sin embargo, no hemos superado el proyecto neoliberal de la derecha que lo cobijó. Superamos su raigambre conservadora, porque la sociedad chilena actual es mucho más abierta y plural, valórica y culturalmente, pero no su estructura de poder neoliberal. Esa sigue siendo nuestra gran deuda histórica, y debemos hacernos cargo de ella.

Repito y recalco el verbo superar, porque eso encierra una mayor responsabilidad. Significa dejar atrás su contenido, su mentalidad, su crisis moral. Por eso, precisamente, es que necesita alejarse del espíritu de revancha y disponerse a un acto de futuro.

La pregunta que la Concertación también ha esquivado es por qué no logramos ese propósito, por qué la transición se prolongó tanto sin resolver esos dilemas y por qué, en ese camino, también fuimos perdiendo la base de apoyo popular y en las clases medias que alguna vez tuvimos. Por muchos años nos mantuvimos cerca del 50% en todas las elecciones, pero eso también encubría la pérdida real de votación, porque los porcentajes eran respecto de los votos válidos, sin contar a la gente que se alejó silenciosamente a través de la abstención o el voto nulo o blanco. Todas las fuerzas de la izquierda y la centroizquierda debemos asumir que la crisis orgánica de 2019 también es nuestra crisis. Desentenderse de esa responsabilidad es una falta de honestidad intelectual y política, en el fondo, una falla ética.

Siguiendo esa valiosa distinción de Marx, la superación de la dictadura no iba a venir ni vendrá del pasado. No era a través de una Constitución que repitiera en sentido inverso la misma lógica de la Constitución de 1980. No era a través de la invocación nostálgica de Allende que desplegó Boric. Tampoco era de la añoranza de la Concertación que latía en los partidos de la centroizquierda y que exaltaban los ex

concertacionistas que se pasaron al Rechazo, que después apoyaron a Matthei y que terminaron integrándose exultantes al gobierno de Kast.

La superación proviene de captar el futuro: cuáles son las fuerzas propulsoras del progresismo que podemos encarnar y cómo articularlas, esto es, cuáles son las fuerzas motrices de los cambios económicos, sociales y culturales, cuáles son los sectores y actores capaces de impulsarlas, cuáles son las ideas fuerza y las corrientes de pensamiento que las deberían representar, cómo tratar democráticamente las contradicciones, conflictos y riesgos políticos que generan y dónde están sus bases de poder e influencia.

Eso es lo que ordena la necesidad un nuevo bloque histórico y, más aún, definir qué significa en el ahora traducir esa noción de un bloque histórico.

Dilemas de los “bloques históricos” actuales

El concepto de bloque histórico, su valor político y estratégico, no puede volverse otra “pesadilla del pasado”. En cierto sentido, rescatar su sustrato requiere quemar el “ropaje” con el que lo vistieron Marx y Gramsci -en quiénes más me he detenido aquí- porque lo hicieron entre la primera y la segunda revolución industrial que les tocó vivir, en un orden social ya reemplazado en la tercera revolución industrial y todas ellas muy distintas a las grandes revoluciones tecnológicas que convergen en la actualidad.

También es quemar la traducción que hizo la izquierda chilena con Allende y en la Concertación, que fueron bloques históricos propiamente tales, uno como la unidad

de la clase obrera y el campesinado organizado, más sectores medios de profesionales, intelectuales y artistas, con partidos orgánicos, sindicatos, liderazgo en las universidades y un movimiento cultural propio; otro, con la unidad política de la izquierda y la DC, que en conjunto representaban a los sectores populares marginados y empobrecidos de las zonas urbanas, el movimiento sindical rearticulado, las clases medias afectadas por la crisis de los 80, el movimiento estudiantil también reactivado en todas las universidades, un cuerpo amplio de intelectuales orgánicos gestado en el país y en el exilio, y un movimiento cultural que representaba tanto a la tradición popular de las décadas anteriores como al movimiento de protesta contra la dictadura.

Cada cual alcanzó una densidad que fue dotándose de ese contenido propio que los singularizó.

Nos vamos a equivocar si ahora lo concebimos solo como una alianza de partidos o una reconfiguración de ellos, porque es otro modo de traer pesadillas del pasado al presente. Por eso la suma de siglas no basta ni representa en sí misma la posibilidad de articular una mayoría.

Es la articulación de fuerzas de la sociedad, de sectores y actores reales, actuales y emergentes, observar cómo se configura la complejidad de las relaciones sociales, cuáles son los intereses en juego, cuáles son sus mapas de poder y su movimiento. Sobre esa base, el bloque histórico adquirirá otro contorno y puede dar forma a una estrategia que le permita al conjunto de las fuerzas progresistas recuperar la mayoría que perdió.

Es también lo que puede resolver la contradicción entre las causas identitarias y el universalismo. El problema no es la

reivindicación de una identidad, que no solo es legítima, sino también valiosa en una sociedad pluralista. El problema real es que renuncia a entender y elevar los fundamentos de cada identidad o sector de la sociedad al nivel de valores universales. Desde el punto de vista filosófico, quedarse en lo identitario o en el solo interés de cada sector evita las exigencias que Kant traza en su imperativo categórico: “obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de legislación universal”. Desde el punto de vista político, renunciar a ese esfuerzo es no comprender que el universalismo es la base de la hegemonía. Nunca habrá una síntesis real en torno al populismo, a esa suma de identidades bajo un significante vacío, sino desde el tejido activo y paciente de soluciones que alcancen una legitimidad sustantiva. Los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los migrantes, de las comunidades rurales, son legítimos en la medida que son instancias específicas del principio general de una igual dignidad, no excepciones que lo fragmentan ni privilegios que lo invierten.

Estos son dilemas reales que cruzan a las fuerzas progresistas en todos lados, no solo a la izquierda.

En Europa, los viejos partidos socialdemócratas y los nuevos partidos de izquierda, han tratado de articular -con muchas dificultades- tres grandes sectores con muchas contradicciones entre ellos: las clases profesionales urbanas vinculadas a la economía del conocimiento, la creatividad y la innovación; los sectores productivos e industriales, cada vez más expuestos a los problemas de competitividad en una globalización que los desplaza; y amplias capas de trabajadores del área de los servicios y de trabajos precarios, desplazados a las periferia de las

ciudades, muy marcados por inseguridad económica y resentimiento hacia las elites. En países que tradicionalmente fueron referencia para nosotros, esto se expresa en la desarticulación de la izquierda italiana entre el Partido Democrático y la corriente populista del Movimiento Cinco Estrellas, la reciente caída de la coalición de Socialdemócratas, Verdes y Liberales en Alemania, la ruptura entre la vía liberal de Macron *versus* el resquebrajamiento del PS y su disputa con la Francia Insumisa. En España el PSOE sobrevivió reivindicando su lugar en la izquierda *versus* un Podemos que también sucumbió a sus tesis populistas cuando entró al gobierno, aunque luego se articuló -con menos fuerza- en nuevos partidos en alianza con el PSOE y los partidos nacionalistas. En todos estos casos, hay una dificultad objetiva para reconciliar intereses sociales en la era de transformaciones actuales, que abre espacio a fuerzas populistas o nacionalistas que recogen parte del malestar.

En Estados Unidos esto se expresa en la cruda polarización de los últimos años. Los Demócratas tienden a representar a los sectores profesionales y urbanos de la economía del conocimiento y sectores urbanos que dependen de las políticas sociales, mientras que los Republicanos han logrado representar a los sectores productivos expuestos a la globalización que exigen más proteccionismo y a las zonas rurales y populares sensibles al discurso anti-élites de las grandes ciudades. Asimismo, Trump estructuró un pacto oligárquico con las grandes corporaciones tecnológicas en torno a una estrategia geopolítica de competencia con China. Y, a su vez, China tiende a resolver estas disyuntivas y contener sus tensiones objetivas -que las tiene- sobre la base de una mayor concentración de la conducción del Estado. Es un bloque histórico construido desde arriba, desde el Partido-Estado,

que subordina los intereses de diversas clases y sectores a una estrategia nacional de desarrollo. Los sectores medios y profesionales vinculados al desarrollo tecnológico gozan de una alta movilidad meritocrática, aunque sin autonomía ni libertades. El crecimiento paulatinamente más lento dificulta la inclusión de los sectores más precarios: aquellos que migran desde las zonas rurales, trabajan en servicios o se desempeñan en ramas de menor productividad. La propia producción a bajo costo incide negativamente en el consumo interno, lo que acentúa la dependencia del sector exportador. Y, finalmente, su consolidación como potencia global la expone a tensiones geopolíticas cada vez más críticas. Esto es, China enfrenta una “crisis orgánica global” con inevitables tensiones internas.

La inestabilidad de los bloques históricos en la actualidad, progresistas o conservadores, son expresión de un *interregno* que en realidad lo es a nivel global.

La sola representación del malestar o reeditar el esquema populista de “los de abajo contra los de arriba” no tiene capacidad de captar el futuro. Como se ha demostrado, puede conducir o incluso hegemonizar una crisis, pero se vuelve incapaz de gobernar y transformar, ser un factor de cambio real. Dicho sea de paso, para ser justos con el acervo teórico de la izquierda y en contra del sesgo que ha contagiado a capas enteras de sus propios líderes, el marxismo nunca fue solo una doctrina para alcanzar la igualdad, sino sobre todo una teoría sobre el desarrollo, sobre cómo resolver las contradicciones de la economía y la sociedad que permitieran el mayor desarrollo y despliegue de las fuerzas productivas. El socialismo real entra en decadencia y cae cuando se vuelve incapaz de sostener esa diferencia y queda clara y abiertamente rezagado respecto del desarrollo productivo y tecnológico

del capitalismo modernizado, ya fuera en regímenes democráticos, autoritarios o de feroces tiranías.

La “poesía del porvenir” es traer el futuro al presente.

Es futurizar la agenda de transformaciones y actuar sobre las bases de poder que la sustentarán. No hay alternativa progresista sin abordar la simultaneidad de las grandes revoluciones tecnológicas disruptivas que estamos presenciando, porque tienen el potencial de cambiarlo todo: desde luego, la economía, los mercados, la producción, las relaciones de producción, la estructura misma de la sociedad, pero también la geopolítica, la soberanía, las instituciones, sus marcos jurídicos, los modos de vida, las prácticas sociales, los hábitos, la cultura y las corrientes de pensamiento. Es lo que ha ocurrido en cada gran revolución tecnológica.

¿Cómo explorar un nuevo Bloque Histórico Progresista?

Chile necesita cuidar y potenciar sus bases de poder real en esta nueva fase de la globalización¹⁴, que en el nuevo ciclo imperial que asoma significa establecer las condiciones materiales e institucionales que nos permitan conservar autonomía estratégica.

Somos un país con poder relativo, por el tamaño de nuestra economía y de nuestra población, por nuestro nivel de desarrollo industrial y nuestra dependencia de las nuevas tecnologías, pero en términos estratégicos somos una potencia media por el poder que tenemos respecto de los recursos estratégicos que requieren las nuevas

¹⁴ Es la tesis que exploré en el libro “La Apuesta de Chile” (2005).

tecnologías y la transición energética, esto es, el cobre, el litio, los demás minerales críticos y nuestra capacidad combinada para desarrollar el hidrógeno verde a un nivel muy competitivo, como también por la posición geopolítica que tenemos hacia el Asia Pacífico. Asimismo, tenemos un posicionamiento sólido en las áreas que se denominan la “bioeconomía de frontera”, ligada al sector forestal, la biodiversidad marina y la producción de alimentos, y hemos consolidado una infraestructura digital que nos permite insertarnos en las cadenas de valor tecnológicas globales. Desde el punto de vista institucional, a su vez, al mismo tiempo que enfrentamos una crisis de legitimidad no resuelta, que el sistema democrático enfrenta los riesgos de su fragmentación, que el crimen organizado se transformó en una amenaza de poder y que el Estado cruje por sus deficiencias o por su cooptación, hay una reserva política e institucional que puede encarar desafíos estratégicos y una agenda que a la vez sea de modernización y transparencia. Hay una práctica de acuerdos público-privados exitosa, hay una base técnico-científica más amplia y sofisticada y, a pesar de la crisis de estos años, no hubo una ruptura democrática.

Las bases de poder fácticas y de legitimidad de lo que podríamos llamar ese “horizonte base” podría dar lugar a un nuevo acuerdo relativamente transversal para la revalidación de la estrategia general de los años 90 y 2000, esto es, la recuperación de una mayor tasa de crecimiento, la transformación verde del modelo extractivista, la reedición más o menos similar de una economía de *commodities* sin valor agregado y nuevos patrones de acumulación, que de nuevo podrían concentrarse en los grandes grupos corporativos, en parte del clúster empresarial a su alrededor y una clase media tecnologizada.

Sin embargo, ese sería un bloque histórico tecno-modernizador, pero peligrosamente limitado. No resolvería la crisis orgánica de este período. En términos gramscianos, sería una “revolución pasiva” que prolongaría el *interregno* de estos años.

Mirado críticamente, así tal cual, un acuerdo que se limite a un pacto tecno-modernizador de ese tipo, podría significar un nuevo período de crecimiento que financie mejor el Estado, pero sin redistribuir poder; la fragilidad del modelo extractivista no resolvería la inestabilidad de las clases medias ni el empleo precario; la ausencia de una industrialización *ad hoc* a los minerales críticos mantendría los patrones de dependencia y nos dejaría expuestos a la disputa de las grandes potencias; la bioeconomía podría reproducir la concentración de poder de los actores que actualmente la representan, sin un equilibrio con el clúster que la rodea; el retraso de los sectores populares dejaría intacto el espacio para la economía informal y el crimen organizado.

Es decir, las fuerzas propulsoras de nuestro desarrollo existen, tienen posibilidades concretas de realizarse y servir el bienestar general. Sin embargo, la pregunta que las vuelve política y estratégicamente relevantes no es si están disponibles, sino quién las conduce, bajo qué relaciones de producción se despliegan y a qué proyecto de sociedad sirven.

El litio puede financiar la desoligarquización del Estado o consolidar una nueva renta concentrada. El hidrógeno verde puede anclar una industrialización soberana o convertirse en otro *commodity* exportado sin valor agregado. Las nuevas tecnologías aplicadas a los sectores productivos pueden ser otra fuente de concentración de poder en los

mercados o servir de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños agricultores o de los pequeños mineros.

Las fuerzas materiales no tienen por sí solas una dirección histórica, la adquieren cuando un bloque histórico les imprime una.

¿Cómo concebir, entonces, un nuevo “Bloque Histórico Progresista”?

Desde el punto de vista de su campo de sectores y actores sociales, exige abordar en concreto los dilemas latentes en las experiencias descritas: una base productiva intensiva en recursos naturales y energía, una economía del conocimiento que no aprovecha su capacidad y amplios sectores en las áreas de servicios y el trabajo informal.

El primero es la base de trabajadores y profesionales ligados a las industrias de la minería, la energía, la logística y los puertos, la manufactura, la construcción, la agroindustria y los servicios externos vinculados a ellas. A diferencia de los países más avanzados, pero también de países latinoamericanos como Brasil o Argentina, el crecimiento más fuerte no viene de la gran industria manufacturera, sino de la relación entre los recursos naturales, la energía y la infraestructura. Aunque parte importante de sus profesionales y técnicos o de sus servicios están en Santiago, su fuerza laboral y su base social está concentrada principalmente en las regiones del norte y el sur. Pero, a su vez, esa misma es una fuente de desigualdad de ingresos y costos de la vida, de desarrollo y calidad de vida, de oportunidades y bienestar. Es una fuerza esencial en cualquier alternativa progresista, pero precisamente en dónde más hemos perdido espacio frente

a la captura de sus aspiraciones de crecimiento por parte de la derecha y del desplazamiento de la representación de su malestar hacia el populismo tecno-modernizador de Parisi o la radicalización de la ultraderecha.

El segundo es el asociado a la economía del conocimiento, que concentra las mayores expectativas de crecimiento, bienestar e identidad personal de las nuevas generaciones, compuesto principalmente por los profesionales y técnicos vinculados a las nuevas tecnologías, a las finanzas o a las empresas de servicio más sofisticadas, los empleados públicos más calificados, los académicos universitarios o profesionales, los creativos y técnicos de la industria cultural y, en general, las capas medias urbanas, más concentradas en Santiago, Valparaíso y el Biobío. Son los sectores y capas de la sociedad que crecieron gracias a la expansión de la educación superior, pero también muy sensibles al endeudamiento, al estancamiento de los salarios, a la meritocracia y la transparencia, a la defensa de sus libertades y expresión de sus valores, a la inoperancia del Estado y a la inseguridad. Son sectores donde la Concertación perdió sustento por la crisis de su ciclo y falta de renovación programática y de liderazgo y donde el PC y el FA perdieron parte de los sectores que antes representaban por su falta de realismo y de resultados o por el agotamiento de su política simbólica. Sigue siendo una base de sustentación de las fuerzas progresistas, pero sin capacidad de aglutinar y conducir una mayoría social. No ha tenido esa vocación de liderazgo nacional, por la conducción elitista o identitaria de sus líderes políticos.

El tercero es el amplio campo de los trabajadores precarios, vinculados al comercio, el transporte, los técnicos de las áreas de educación y salud, las pequeñas empresas, la pequeña agricultura familiar campesina, los

pirquineros o el pequeño emprendimiento. En general, el sector servicios es uno de los de mayor crecimiento en la economía, pero básicamente a partir del trabajo precario, del subcontrato o de la informalidad. Asimismo, es de los sectores que están más lejos del desarrollo tecnológico o en algunos sectores productivos es donde puede haber mayor reemplazo de sus fuentes laborales. Son los que más resienten la inflación y los bajos salarios, los despidos por el alza de los costos de las pymes, los problemas de acceso a los servicios públicos y la discriminación o el abuso en el Estado. En las zonas rurales o las zonas urbanas de regiones subsisten redes donde la izquierda los sigue representando, pero en los grandes centros urbanos es donde parte importante de estos sectores se mueve entre la abstención o el desplazamiento a partidos o movimientos populistas de derecha o izquierda, y dependiendo de las elecciones, de derecha e izquierda.

Sobre esa base, luego, ¿qué nudos asoman para articular una alianza? y ¿qué puede sustentar una agenda que procese las contradicciones reales que enfrentan estos sectores?

El primero, exige romper la falsa dicotomía entre el Estado y el mercado.

Chile necesita una estrategia que potencie desde el Estado sus fuentes de poder real en la globalización. Eso no significa estatismo ni un intervencionismo genérico. Al contrario, es distinguir entre los sectores donde el Estado debe tener un rol central, entre ellos, los recursos naturales estratégicos, los servicios universales, la infraestructura y el poder efectivo de regulación antimonopólica, y los sectores donde el capital privado puede y debe operar bajo reglas que garanticen el interés general.

En el escenario global de grandes actores corporativos ligado a sus potencias, Chile no va a resguardar sus intereses estratégicos sin actores de escala global o al menos regional, como ocurre con las empresas mineras, forestales y pesqueras, o con algunos grupos empresariales que construyen alianzas globales en algunos mercados, pero el Estado necesita conservar un poder de equilibrio que resguarde el interés nacional, garantice su autonomía estratégica e impida la captura del Estado. El modelo neoliberal de la dictadura no fue un mercado libre, fue una oligarquización del mercado, una concentración de sus rentas por las reglas del Estado.

Desoligarquizar el modelo neoliberal no es una concesión al liberalismo clásico, es más bien la oportunidad para que el liberalismo progresista instale una agenda donde el mercado funcione en favor de la innovación, el emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las fracciones que el gran capital ha subordinado o ha capturado. Esa es una zona de disputa con la ultraderecha que podemos resolver a nuestro favor. En ese sentido, un proyecto liberal-progresista no se opone al mercado, al contrario, se opone a la captura oligárquica del mercado y del Estado que lo sostiene.

En gran medida, la división en la derecha entre Matthei y Kast fue una división en el sector empresarial, entre aquellos que se proyectan globalmente, que asumen la agenda ambiental, que necesitan estructurar acuerdos con las comunidades y que tienen tamaño para absorber la agenda tributaria, laboral o social, en que la estabilidad de las reglas y la tranquilidad social permiten su desarrollo, que tendieron a estar con Matthei, y aquellos que tienen más precariedad, que dependen de la inversión, el crecimiento y la estabilidad de grandes proyectos, que el

peso de los impuestos y las cargas sociales les restringen sustancialmente sus utilidades, su competitividad o su viabilidad, que están más expuestos a la inseguridad, que se inclinaron mayoritariamente por Kast.

En ambos sectores hay una disyuntiva clave para la izquierda. Un proyecto de desarrollo nacional requiere de sus grandes empresas y necesita un pacto en torno a valores progresistas, materia en que la Concertación logró avanzar y fue parte del pacto de la transición. Y, a su vez, parte importante de esos sectores empresariales más frágiles son los más expuestos a la oligarquización y a la falta de equilibrios de los mercados (costos en el acceso al crédito, control monopólico de precios, depredación de empresas), pero no han visto o dejaron de ver en la izquierda una alternativa seria y creíble para ellos.

Reestablecer una perspectiva nacional en torno a la gran industria también necesita fortalecer su base sindical y que ella misma encabece el resguardo del interés general. No es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, donde el movimiento sindical se ha fragmentado, ha despolitizado su agenda y ha roto su vínculo con otros sectores de la sociedad. Una parte importante de ese sindicalismo se ha volcado solo a sus intereses y dejó de aspirar a la conducción del país, lo que es expresión obvia de la crisis de los partidos de izquierda. Muchos de esos sindicatos renunciaron a la CUT o ni siquiera participan de otras centrales sindicales. Las tendencias tecnológicas que anticipan parte de su reemplazo, las amenazas de los intereses de las potencias sobre las decisiones en sus mercados y empresas y la necesidad de cohesión social en torno a su desarrollo necesitan y permiten que nuevos liderazgos sindicales encabecen y legitimen esa agenda.

Pero eso debe ser promovido y articulado en torno a una agenda-país.

La oligarquización que rodea a los grandes actores de la industria no lo es solo respecto de su influencia en el Estado y sus regulaciones, sino también de los sectores que conforman la burguesía exportadora en esos mercados: los contratistas de la gran minería y de los sectores forestal y pesquero, la mediana minería, los proveedores de madera, la mediana empresa de la pesca, el sector agroindustrial, salmonero y los viñateros regionales. Cada uno tiene intereses territoriales específicos, necesita certeza jurídica sobre sus condiciones de producción, aperturas comerciales o protección respecto de sus amenazas externas y mejores condiciones de acceso financiero, lo que a su vez está condicionado por el poder de negociación de los grandes grupos o por el deterioro de las condiciones macroeconómicas cuando no son bien resueltas.

Por último, la ruptura de esta falsa dicotomía entre Estado y mercado depende decisivamente de una alianza entre los trabajadores del sector público, los profesionales de los órganos autónomos del Estado y la nueva clase media profesional y técnica, que debe encabezar la modernización del Estado y su renovación ética y moral respecto de los fenómenos de su captura. Vale decir, no desplazar la legitimidad de esa transformación imprescindible del Estado a una élite tecnocrática que en caso contrario la hará desde arriba. Ese núcleo tiene intereses convergentes respecto de un Estado que funcione, de contar con servicios públicos de calidad y de una regulación e instituciones que impidan la captura oligárquica. También tienen el desafío de la renovación institucional que las tecnologías disruptivas están produciendo. Su propio futuro está ligado a su definición

e implementación, a la anticipación de sus tendencias y efectos.

El segundo, la agenda progresista no tendrá ese carácter si es que no es capaz de ser parte y/o movilizar el desarrollo tecnológico en favor de los medianos y pequeños sectores productivos y el mejoramiento de la calidad del empleo de sus trabajadores.

Ser parte, en el sentido de que hay una amplia capa de emprendedores, profesionales jóvenes, investigadores vinculados a universidades o a startup nacionales o internacionales, innovadores en sectores productivos ya consolidados, artistas de distintas disciplinas, que requieren condiciones para desplegar las oportunidades que visualizan. En la sociedad del futuro el progresismo debe cultivar y promover una nueva base empresarial.

Movilizar, en el sentido de que para la pequeña y mediana empresa productiva, los pequeños agricultores, los pequeños mineros y pirquineros, los pequeños industriales de las regiones, los transportistas y la nueva clase media técnico-profesional, resulta imprescindible facilitar su acceso a las nuevas tecnologías, ya sea para adaptarse al cambio o para fortalecer sus actividades productivas. La brecha respecto de ella es en muchos casos una brecha estratégica, porque de ello depende que puedan fortalecer o mantengan su presencia de mercado o que sean desplazados de ellos.

En cierto sentido, los trabajadores de este sector fueron parte del corazón social del estallido. Es uno de los segmentos más expresivos del malestar, porque sufren más la precariedad de sus empleos o emprendimientos, los que están más expuestos al endeudamiento por el CAE y a la

distancia entre la formación universitaria y las oportunidades laborales reales, a los que más les pesa el alza del costo de la vida, en la salud, la educación de sus hijos o de los servicios básicos y los que más resienten la imposibilidad del acceso a la vivienda propia.

La precariedad de la clase media, aquella que apoyó el estallido y tuvo esperanzas en la nueva Constitución y que luego se ha desplazado hacia la derecha o la ultraderecha por inseguridad, inestabilidad e incertidumbre, está muy concentrada en estos grupos, tanto de la pequeña burguesía como de los trabajadores que se desempeñan en estos sectores.

Tercero, la izquierda debe resolver con realismo el vacío de su agenda respecto de los trabajos precarios e informales. En todas estas décadas, ha sido su fracaso más serio y profundo, porque la precariedad y la informalidad no son un residuo del modelo, sino producto directo de él. Es el segmento donde la ausencia de la izquierda es más cara, porque es también el terreno donde el crimen organizado construye su economía política alternativa.

La precariedad es un factor dominante entre trabajadores del sector servicios, actualmente la fracción más numerosa del empleo, ligados al sector retail, la salud privada, la educación, los servicios de seguridad, el turismo y la gastronomía, que son muy susceptibles a los ciclos de la economía, el endeudamiento, el alza de la inflación y, en algunos casos, están muy expuestos a los riesgos de sustitución.

Los trabajadores informales, que no tienen contrato, los vendedores ambulantes, los migrantes en actividades marginales, son los que por su propia condición están más

lejos de las políticas sociales y, por eso mismo, tienden peligrosamente a la marginalidad.

De aquí es de dónde más se nutre la crisis de seguridad. Aquí es donde el crimen organizado encuentra su espacio económico y social, porque ofrece mejores ingresos o porque mueve su capital en la economía informal. A partir de ahí, estructura también su forma de dominación y pretende el control sobre los sectores populares más vulnerables.

No habrá una confrontación seria con el enfoque conservador de la seguridad sin tratarlo, simultáneamente, como el problema de clase que representa, el que Marx describía como lumpenproletariado; como el problema de su carácter de industria delictual, que construye poder económico a partir del lavado de activos; y como el contrapoder que representa para el Estado democrático.

Cuarto, el bloque histórico también es una disputa por el sentido común, por los marcos morales con los que los sectores populares interpretan su vida. Ese terreno cultural no es un añadido, sino una condición de la hegemonía.

En ese sentido, es necesario retomar aquella raigambre de la izquierda que estructuró una alianza con el cristianismo progresista, que ahora es con católicos y evangélicos, porque hay una lucha moral contra el nihilismo y el cinismo de la sociedad chilena, que cruza a todos los sectores, pero cuyas consecuencias afectan más crudamente a los sectores populares.

El desprecio ilustrado por distintas formas de espiritualidad nos ha hecho mucho daño. Eso se basó en una confianza, propia de la Ilustración, que creía que la

razón sería superior a las religiones en la solución de los grandes dilemas del mundo. La Contra Ilustración de la ultraderecha global encuentra espacio, precisamente, en los límites y vacíos de esa aspiración. Eso está en la base de las corrientes contrarias a la democracia liberal y del recrudescimiento de las posiciones conservadoras en las distintas religiones. Si desde la izquierda no nos hacemos cargo de esos límites y vacíos, como lo han explorado distintas escuelas filosóficas progresistas, y no retomamos un diálogo profundo, incisivo y con sentido social con las iglesias que viven y trabajan en la sociedad chilena, estaremos cediendo un terreno estratégico fundamental a la derecha.

No se trata de una concesión doctrinaria, sino de una disputa estratégica: los espacios de sentido que la izquierda ilustrada ha abandonado son los mismos que la ultraderecha está ocupando con eficacia.

Ese desprecio, a estas alturas, no solo es torpemente obtuso, sino que también políticamente estrecho.

Este arco de actores y sus desafíos requiere un proyecto común. Cada cual tiene intereses y agendas específicas, pero no conformarán un bloque sin resolver a fondo cómo ellas convergen en una solución que represente una mayoría social y un cambio de poder real en la sociedad.

Un bloque de esta naturaleza no se construye en una campaña electoral. Se construye en el tiempo largo, en la sociedad civil, antes de llegar al poder. Y su prueba no es ganar una elección, sino poder gobernar transformadoramente sin derrumbarse ante la primera resistencia.

La posibilidad de construir un amplio arco de fuerzas, que debe volver a concebirse como una alianza social y sobre esa base una alianza política, es posible. Sigue estando a la mano, porque no se ha resuelto la crisis orgánica y porque la derecha va a intentar una restauración del orden neoliberal, aunque en una nueva versión, que tendrá sus propios límites.

El modo de hacerlo no es moralizar la derrota ni radicalizar la épica, sino identificar dónde están las contradicciones reales y cómo articularlas en un nuevo equilibrio. La transformación democrática y progresista a la que aspiramos exige ampliar la base social del cambio, integrar intereses diversos y construir un bloque histórico capaz de gobernar con estabilidad. No se trata de diluir el conflicto, sino de encauzarlo en una síntesis viable.

No es una tarea épica, es una tarea estratégica; o será épica porque resolvió sus nudos estratégicos.

Una crisis orgánica no espera. O la izquierda construye este nuevo bloque capaz de ofrecer un futuro o la historia nos reemplazará, ya sea por una nueva versión reformada del modelo neoliberal, por una variante populista tecno-modernizadora que reproducirá bajo otro ropaje las desigualdades del país o por una restauración autoritaria que se hará cargo de los miedos que generarán los fracasos de todas las anteriores.

La comprensión de la derrota es el primer acto de construcción del futuro.

Febrero-Marzo 2026

Índice

Este libro	5
El Estallido Social como “Crisis Orgánica”	11
<i>Piñera y Boric como gobiernos breves</i>	17
<i>La crisis de legitimidad en la ciudadanía</i>	20
<i>Una crisis del sentido común dominante</i>	24
<i>Ausencia de dirección capaz</i>	26
La Revolución Descendente o	
Una Hegemonía Invertida	29
<i>Fase julio-diciembre de 2021</i>	31
<i>Fase enero y abril de 2022</i>	39
<i>Fase mayo a septiembre de 2022</i>	52
<i>Fase septiembre 2022 a diciembre 2023</i>	59
<i>Fase enero 2024 a diciembre 2025</i>	78
Una incomprensión del poder	88
<i>La crisis de Temucoicui</i>	91
<i>El crimen organizado como fenómeno de poder</i>	93
<i>El caso del Tratado TPP11</i>	101
<i>La reforma previsional o cómo un poder fáctico construye un “bloque histórico”</i>	106
<i>El alza de los costos de la vida y los mapas de poder</i>	113
<i>La captura del Estado como problema estructural de Chile</i>	123
¿Por qué es una derrota estratégica?	131
Una clave final del Brumario:	
la “poesía del futuro”	142
<i>Dilemas de los “bloques históricos” actuales</i>	146
<i>¿Cómo explorar un nuevo Bloque Histórico Progresista?</i>	151

EL DIECIOCHO BRUMARIO DE GABRIEL BORIC

En octubre de 2019, Chile entró en una crisis que parecía abrir un nuevo ciclo progresista. El orden existente había perdido su legitimidad, el sistema político se vio desbordado y una nueva generación llegó al gobierno con la promesa de transformarlo todo.

Seis años después, ese impulso terminó en una derrota histórica.

¿Por qué el proceso constituyente, que nació con el 78% de respaldo ciudadano, fue rechazado por el 62%?
¿Cómo una crisis de la hegemonía neoliberal terminó abriendo paso al fortalecimiento de la derecha más radical?

Este libro es una interpretación política e histórica de esa derrota. Tomando el método crítico de *El Dieciocho Brumario* de Luis Bonaparte, Jorge Insunza examina las ilusiones, los errores estratégicos y las contradicciones que marcaron el ciclo abierto por el estallido social y su desenlace en el fracaso de la Convención Constitucional y del gobierno de Gabriel Boric.

Su tesis es que la izquierda no fue derrotada por la fuerza de sus adversarios, sino por su incapacidad de transformar una crisis del orden existente en una nueva hegemonía capaz de reemplazarlo. Confundió crisis con poder, voluntad con correlación de fuerzas, superioridad moral con capacidad de conducción.

La comprensión de la derrota es el primer acto de construcción de una nueva hegemonía.

www.ariadnaediciones.cl



9 789566 276890